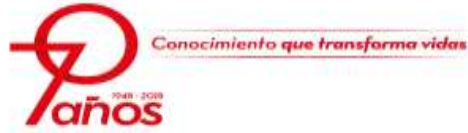


La guaca en Los Farallones de Cali: de la minería y otros demonios

Jessica Lorena Zambrano Narváez

Lizeth Carolina Collazos Caicedo

Universidad del Valle
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
Departamento de Ciencias Sociales y Económicas
Programa de Sociología
Cali – Valle
2018



La guaca en Los Farallones de Cali: de la minería y otros demonios

Monografía de:

Jessica Lorena Zambrano Narváez

Lizeth Carolina Collazos Caicedo

Directora:

María Eugenia Ibarra Melo

Doctora en Ciencias Sociales

Universidad del Valle

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas

Programa de Sociología

Cali – Valle

2018

Dedicatorias

En este trabajo se concretiza el esfuerzo de los mayores tesoros de mi vida: mis padres y mi hermana. Sobre todo le dedico este trabajo a mi madre por enseñar el gran valor de las mujeres, por enseñarme a soñar en grande para alcanzar el cielo y por mostrarme su fuerza que siempre ha sido mi motivación. Cierro esta etapa en mi vida y comprendo que es posible romper cadenas y barreras, de la vida y del pensamiento. En mi proceso de aprendizaje adquiriré las enseñanzas más valiosas que me han hecho crecer en muchos aspectos, por eso hoy entiendo que las largas horas de estudio y los sacrificios valieron la pena.

Mamá, Papá y hermana, fue posible, lo logré. Hoy ustedes son testigos que he superado uno de los tantos escalones que me falta por subir. Todo mi trabajo y mi esfuerzo son para ustedes.

Jessica Lorena Zambrano Narváez

Este trabajo quiero dedicarlo en primer lugar a mis padres, que siempre me apoyaron y me guiaron hacia el camino de la superación, que confiaron en mí durante mi proceso de formación académica y que son el motor que guía cada uno de mis pasos. A mi hermana y sobrina, quiénes me animan cada día para seguir rompiendo cadenas y superar el contexto. A mis profesores, que con cada una de sus enseñanzas lograron infundir en mí el amor hacia la Sociología, en especial la profesora María Eugenia Ibarra. A mi Universidad del Valle por abrirme sus puertas y hacer de mí no solo una gran profesional, sino una mujer empoderada con una visión crítica de la realidad.

Lizeth Carolina Collazos Caicedo

Agradecimientos

A nuestra querida universidad del Valle por darnos las herramientas para ir más allá de nuestros sueños y construir alas para volar lejos.

A los pobladores de Los Andes y Pichindé, por habernos abierto las puertas de sus casas y sus vidas sin mayor recelo. A esos mineros foráneos y propios por contarnos sus historias detalle a detalle.

A nuestra directora María Eugenia Ibarra Melo, por mostrarnos una vez más, que las mujeres unidas podemos hacer grandes cosas. Gracias por el tiempo, la paciencia y la disposición que tuvo con nosotras.

A los funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quienes nos acompañaron a las minas El Socorro o Alto del Buey y nos brindaron información para el avance de esta investigación.

A la Fundación Mariana Hoyos por brindarnos los recursos necesarios durante gran parte de nuestra formación académica.

Tabla de contenido

Un balance de estudios previos.....	10
Referentes Conceptuales.....	15
Metodología.....	23
Capítulo I: Caracterización sociodemográfica de los corregimientos de Los Andes y Pichindé.....	27
1.1 Poblamiento de la zona rural de Cali.....	27
1.2 Localización.....	28
1.3 Población.....	29
1.3.1 Composición étnica.....	31
1.3.2 Viviendas y Hogares.....	32
1.3.3 Propiedad.....	32
1.3.4 Cobertura en servicios públicos.....	33
1.3.5 Estado civil.....	34
1.3.6 Aseguramiento en Salud.....	35
1.3.7 Tipo de Ocupación.....	36
1.4 Educación.....	37
1.5 Actividades productivas.....	39
1.6 Actividades Culturales y de Esparcimiento.....	41
1.7 Infraestructura vial y formas de movilidad.....	42
Capítulo II: Actividad minera en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, (PNN Farallones de Cali).....	45
2.1 Breve recuento histórico sobre la minería en el PNN Farallones de Cali.....	45
2.2 Contexto de la Minería en el PNN Farallones de Cali.....	46
2.2.1 Identificación de la actividad minera en la zona.....	47
2.2.2 Acciones adelantadas contra la extracción ilícita de minerales en el PNN Farallones de Cali.....	47
2.2.3 Normatividad Vigente.....	49
2.2.4 Actualidad de la minería ilegal en el PNN Farallones de Cali.....	50
2.3 Actores: Mineros, Campesinos y Mujeres.....	55
2.3.1 Mineros.....	55
2.3.2 Campesino de Los Andes y Pichindé.....	56

2.3.3 Mujeres	58
2.4 Presencia de grupos ilegales en el territorio	59
Capítulo III: De los cambios Sociales, Económicos y Ambientales	62
3.1 Peñas Blancas a la sombra de la minería ilegal. De la travesía a las minas y otras historias	62
3.1.1 Al servicio de la minería	68
3.1.2 El canje de oro por drogas	70
3.2 Del derroche y la abundancia.....	71
3.2.1 Eventos Liz: el amor pagado sin censura.....	72
3.2.2 Las demandas de los nuevos clientes.....	72
3.3 De la cocina al socavón.....	73
3.4 Foráneos en las minas	76
3.4.1 El caso de Suárez - Cauca: la miseria en medio de la abundancia	76
3.4.2 ¿Y ellos de dónde son? !!De Suárez grita la gente!!.....	77
3.5 La minería en la mira institucional	80
3.6 Procesos Judiciales: evasión y reincidencia.....	81
3.7 Ocupantes ilegales: campesinos sin tierras	83
3.8 La huella del hombre en la naturaleza	86
Conclusiones	89
Referencias bibliográficas	92
Fuentes Documentales	95

Índice de tablas

Tabla 1. Características de los entrevistados	25
Tabla 2. Conversaciones Informales	26
Tabla 3. Asistencia Educativa en los Corregimientos Los Andes y Pichindé, año 2016.....	38

Índice de mapas

Mapa 1. Ubicación Geográfica.....	29
Mapa 2. Ubicación geográfica: Minas El socorro o Alto del Buey.....	46

Índice de gráficos

Gráfico 1. Pirámide poblacional por sexo Corregimiento de Los Andes año 2016.....	30
Gráfico 2. Pirámide poblacional corregimiento de Pichindé año 2016.....	31
Gráfico 3. Cobertura de servicios públicos año 2016.....	34
Gráfico 4. Estado civil de la población año 2016.....	35
Gráfico 5. Tipo de afiliación a salud año 2016.....	36
Gráfico 6. Actividad que realizó la última semana año 2016.....	37

Índice de fotografías

Fotografía 1: Vía Pueblo Nuevo parte baja.....	43
Fotografía 2: Descenso pasajeros del bus Escalera “la Chiva”.....	43
Fotografía 3: Maquinaria encontrada por Funcionarios de la CVC, Sector Minas del Socorro, año 1985.....	45
Fotografía 4. Identificación de campamento del señor Ferney Herrera.....	48
Fotografía 5. Identificación del Campamento del señor Zacarías Hidalgo.....	48
Fotografía 6. Desmonte de campamentos en compañía de Ejército y PNNC.....	51
Fotografía 7. Campamento base Batallón de alta montaña.....	53
Fotografía 8: Transporte de material rocoso.....	56
Fotografía 9: Don Jesús, Vereda Pueblo Nuevo Parte alta Corregimiento de Los Andes, año 2007.....	57
Fotografía 10. Trabajo de campo, Vereda Peñas blancas.....	62
Fotografía 11. Encuentro con soldados del Batallón de alta montaña.....	63
Fotografía 12. Vestigios de maquinaria.....	64
Fotografía 13. Desechos de la actividad minera.....	66
Fotografía 14. Captura de mineros sector del trasvase.....	67
Fotografía 15. Captura de mineros en el sector de “Patequeso”.....	79
Fotografía 16. Plantón vereda Cabuyal.....	85
Fotografía 17. Contaminación del recurso Hídrico.....	88

Introducción

Esta investigación etnográfica expone los principales cambios sociales, económicos y ambientales que han experimentado dos localidades campesinas ubicadas en la parte alta de los Farallones de Cali: los corregimientos de Los Andes y Pichindé. Estos cambios han sido producto, entre otros factores, de la incursión de nuevos agentes dedicados a la minería ilegal. Para realizar este estudio, recurrimos a una serie de elementos teóricos, metodológicos y prácticos que nos permitieron dar respuesta a los objetivos bajo los que se orientó el curso de esta investigación y que desarrollamos a través de tres capítulos. En un principio se presenta el problema de investigación, un balance de estudios previos, los referentes conceptuales, los objetivos y metodología empleada. Para así dar paso a los capítulos en los que se desarrollan cada uno de los objetivos.

En el primer capítulo, damos cuenta de una caracterización sociodemográfica detallada de los corregimientos de Los Andes y Pichindé, para evidenciar las condiciones en las que se encuentran. En el segundo capítulo, detallamos la actividad minera en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali (en adelante PNN Farallones de Cali); hacemos un breve recuento histórico sobre cómo incursionó la minería en esta zona y exponemos sus generalidades. También, caracterizamos los actores presentes en ésta, y la participación de grupos ilegales en el territorio. En el tercer capítulo se expone a la luz de la nueva ruralidad, los cambios identificados destacando cada uno de ellos.

Desde la academia y entidades gubernamentales se han realizado amplios estudios sobre los impactos generados por las multinacionales mineras. Sin embargo, es necesario prestar atención a esa pequeña minería, artesanal e informal que se presenta en varias regiones de nuestro país, la cual constituye no sólo un tipo de saberes sino también de nuevas dinámicas en poblaciones rurales. Analizar las prácticas de la minería ilegal y sus posibles impactos en dos localidades campesinas: Los Andes y Pichindé, ubicadas en la parte alta de Cali, es un ejemplo palpable de lo anterior. La pertinencia de esta investigación radica en que en estas localidades, en tiempos recientes, se ha intensificado la minería ilegal, con una cierta convivencia con actividades agrícolas.

Si nos preguntamos por el aporte de este trabajo tanto para la academia como para la sociedad, entendemos que para la primera es un estudio exploratorio, que trata de entender una realidad local presente en muchas zonas de nuestro país que constituye un esfuerzo por entender la nueva ruralidad. El aporte que con éste damos está orientado a que las localidades de estudio entiendan cuáles han sido los antecedentes y las consecuencias que ha traído consigo la minería ilegal así como su participación en esta problemática. En consecuencia, pretendemos que este trabajo sirva de apoyo a las instituciones gubernamentales que trabajan en la zona para abordar la problemática desde otra perspectiva.

Por lo tanto, resulta interesante analizar los cambios de carácter sociodemográficos, económicos y ambientales que han experimentado los pobladores de esta zona, por la introducción de nuevos agentes dedicados a la actividad minera. En las minas El Socorro o alto del Buey¹, es donde se ejerce de forma ilegal la extracción de oro. Según lo registrado en el periódico El País, esta mina existe y es explotada desde finales del siglo XIX, pero desde los últimos 15 años cuando se presenta una explotación de forma indiscriminada. Cabe resaltar que esta zona de extrema fragilidad ecosistémica, fue declarada Parque Nacional Natural en el año 1968.

Siendo consecuentes con lo anterior, sabemos que son múltiples las líneas de investigación que podemos seguir a raíz del tema mencionado. Pero teniendo en cuenta que esta investigación es un trabajo de pregrado, nos proponemos responder a la pregunta: ¿Cuáles han sido los principales cambios que ha producido el desarrollo de la minería ilegal en los corregimientos de Los Andes y Pichindé, en los últimos 15 años que permiten hablar de una nueva ruralidad? Se trata de describir los efectos de esta actividad en los aspectos sociales, económicos y ambientales que permiten identificar las características de una nueva ruralidad en los corregimientos de estudio. Por lo anterior, haremos uso de las herramientas analíticas que nos brinda la sociología e interpretaremos esa realidad, basándonos en el concepto de nueva ruralidad, superando la visión productivista y el dualismo entre lo rural y lo urbano.

Un balance de estudios previos

La minería ha sido considerada una actividad importante por su capacidad para la generación de recursos económicos desde el siglo XVII. Sin embargo, quienes han dado mayor importancia a la regulación de ésta han sido los gobiernos de la última década del siglo XX y la primera parte del siglo XXI en Colombia (Ibarra, 2014). De ahí, que el último código minas evidencie la ilegalidad de los pequeños mineros y la exigencia de requisitos que solo pueden ser cumplidos por las grandes empresas mineras (Triana, 2001).

En Colombia, gracias a la extensión de zonas dedicadas a la minería tanto a cielo abierto como subterránea, legal e ilegal se han visibilizado los impactos negativos que tiene esta actividad en las comunidades en las que ha incursionado, que se reflejan en los daños al medio ambiente, el incremento de la violencia y una exacerbación del conflicto armado como consecuencia de la vinculación de grupos armados en esta actividad (Ibarra, 2014). Los efectos de la minería ilegal son entonces más complejos de identificar, porque el Estado no tiene control y en ocasiones no tiene conocimiento de estas actividades por su condición de ilegalidad.

Los impactos de la minería a gran escala sin lugar a dudas son decisivos para la población que afecta, sin embargo centrarse en analizar los efectos de la minería ilegal en localidades nos puede dar cuenta de otras dinámicas sociales y culturales, debido a que la minería ilegal puede ser desarrollada de forma artesanal, implicando connotaciones tradicionales y ancestrales.

¹ En adelante nos referiremos a las minas El Socorro o Alto del Buey, sin embargo en varios documentos se las designa minas del Socorro o Alto del Buey.

De acuerdo con la revisión de la literatura de los trabajos relacionados con los impactos que genera las prácticas de la minería en las comunidades, se concluye que éstos se han realizado principalmente en áreas disciplinares como: la Antropología, el Trabajo Social, la Economía, la Geología y la Sociología. Robles Mendoza (2003), Gerardo Damonte (2012), Jeffrey Bury (2007) y Matthew Himley (2011) han realizado amplios estudios en el Perú sobre el impacto de las multinacionales mineras en zonas rurales. En Colombia, académicos como Mary Luz Sandoval Robayo (2013), Claudia Patricia Pinilla Pedraza y Clara Yesenia Santos Moran (2014), Yesenia Palacios Murillo (2014), Julio Fierro Morales (2012), y por último, Ada Milena Gómez (2013), han contribuido a analizar desde diversas perspectivas el impacto de la minería en las distintas localidades. Por su parte Maria Camila bolívar (2016), Ibarra y Bolivar (2017) y Andrea Posso (2018) nos muestran la vinculación de las mujeres. Sus aportes son relevantes porque permiten destacar aspectos como la participación en actividades mineras, resaltando que éstas han estado presentes en esta actividad desde tiempo atrás, pero han sido relegadas y discriminadas.

Estas referencias bibliográficas también resaltan que las perspectivas de análisis que se pueden identificar son, en primera instancia, la ambientalista, que destaca el deterioro del medio ambiente como consecuencia de la extracción minera y los posibles efectos que puede traer a las regiones la degradación de sus recursos naturales. Por otra parte, desde las políticas públicas se enfatiza en promover la minería a gran escala como una actividad que desarrollada de manera sostenible y bajo la legislación vigente puede generar progreso económico no sólo en la región donde se lleva a cabo, sino también a nivel nacional. Lo anterior con base en la supuesta rentabilidad de esta actividad.

En las categorías de análisis que los estudios privilegian, se logró identificar categorías tales como: orden social, habitus, redes comunitarias, economía campesina, violencia, conflicto social, acción colectiva, resistencia, género, acción colectiva étnica y movilización. También, se evidenció, que existe un tipo de identidad local que surge cuando incursionan trabajadores foráneos a las zonas de actividad minera. Por otra parte, se hace mención al trabajo informal consecuencia de la actividad minera ilegal y se destaca la importancia del territorio, así como de aspectos tradicionales y culturales, para las comunidades que se ven afectadas por la prácticas de la minería.

Referente a los métodos y técnicas de investigación, los documentos revisados, contemplan en su mayoría estudios de trabajo de campo partiendo de casos particulares en diferentes zonas de Colombia y de América Latina en países como Perú. Estas investigaciones utilizaron herramientas como la observación participante, entrevistas y encuestas, además que algunos de estos trabajos combinan información primaria obtenida en el trabajo campo con fuentes secundarias como noticias, boletines oficiales, censos nacionales y otros datos estadísticos.

Entre los principales hallazgos de los estudios revisados, encontramos que Perú es uno de los países que más ha estudiado en Latinoamérica el tema de los conflictos socio-ambientales como

consecuencia de la minería, en este país se ha estudiado ampliamente por los académicos el impacto de la gran minería en zonas como Cajamarca, Cusco, Piura y Cotabambas; donde se pueden destacar tres líneas de análisis. En primer lugar, los efectos económicos, sociales y culturales a partir de la incursión de tres grandes empresas mineras en la zona norte del Perú. En segundo lugar, una línea comparativa de la economía campesina con el fin de analizar cómo se han dado las transformaciones institucionales en donde se ha implementado proyectos de gran minería. Y, por último, un análisis de las transformaciones geográficas que la política minera neoliberal del Perú ha generado en aspectos como la tenencia de la tierra y los medios de subsistencia.

De los efectos económicos, sociales y culturales, Robles (2003) señala que la minería en el Perú, involucra mayormente a comunidades campesinas, pues buena parte de las reservas mineras se encuentran en el subsuelo de estas comunidades; lo anterior legitima la idea, por lo menos en los casos de Cajamarca, Cusco y Piura, que la explotación minera en la actualidad afecta la economía, el modo de vida y los comportamientos culturales de pueblos y comunidades campesinas. Cabe resaltar que este autor indica que existen efectos positivos concernientes al desarrollo de estas regiones, sin embargo cuando provocan mayor pobreza, alientan a la desintegración de pueblos y comunidades e inducen a la transformación de valores autóctonos y de sus identidades culturales, se habla de efectos negativos. Muestra de ello es la proliferación de la prostitución, el alcoholismo y el despojo de tierras que se han presentado en las localidades estudiadas por el autor.

La investigación de la economía campesina realizada por Damonte (2012) pretende hacer una comparación de las dinámicas en dos zonas de economía campesina, en donde predomina principalmente la pequeña agricultura y en donde el autoconsumo es una parte fundamental de las estrategias económicas de los hogares. Damonte menciona el paso de un modo de vida pre-capitalista a uno capitalista y extractivo por el que pasan las poblaciones indígenas asentadas en Cusco y Yanamarca, buscando entender cómo esta nueva realidad social y extractiva repercute en el proceso de cambio de las organizaciones como las comunidades y rondas campesinas.

Entre tanto Bury (2007) muestra cómo la rápida expansión de la empresa minera MYSA que acompañada de los cambios en la tenencia de la tierra, han constituido transformaciones significativas en aspectos familiares, recursos económicos, humanos y sociales, en la comunidad de Cajamarca en el Perú.

En un nivel más amplio, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, con base en una línea de análisis enfocada en aspectos socio-ambientales, realiza una recopilación de artículos que visibilizan a partir de experiencias concretas, los impactos de la minería a gran escala en países de África, América Latina, Asia y Oceanía. Es oportuno resaltar que en algunos de los artículos se profundiza en los efectos que genera la minería en las mujeres, pues se menciona cómo la condición de mujer constituye unos impactos específicos sobre éstas. Esto podría apoyarse en Matthew Himley (2011) pues en su artículo “El género y la edad frente a las

reconfiguraciones en los medios de subsistencias originadas por la minería en el Perú” expone cómo los pobladores de Chacrapampa perciben que la minería a gran escala ha configurado y transformado los medios de subsistencia, los impactos y las oportunidades de extracción, haciendo énfasis específicamente en que son las mujeres las que se ven afectadas mayoritariamente de forma negativa.

Para el caso de Colombia, el *boom* de las investigaciones sobre el tema de la minería comienza en 2011 (Ibarra, 2014). Éstas como se mencionó anteriormente siguen una línea de análisis en torno a los impactos socio-ambientales de la gran minería, que desde la Sociología y el Trabajo Social se pretenden estudiar. Un claro ejemplo de ello es Idárraga Franco, Muñoz Casallas y Vélez Galeano H, (2010) quienes en su investigación “conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia” analizan cuáles han sido los impactos sociales y ambientales que han generado empresas británicas que adelantan proyectos mineros en Colombia, estos autores hacen énfasis en las capacidades organizativas que tienen las comunidades y las acciones de resistencia frente a la incursión de las multinacionales en su territorio.

Asimismo, Fierro (2012), analiza el impacto que ha generado las políticas mineras que se han promulgado en los últimos años en Colombia. Señala ampliamente las confrontaciones entre las comunidades campesinas, obreras e indígenas contra el Estado y las multinacionales mineras a raíz de dichas políticas. Su trabajo, presenta un panorama amplio entorno a esta problemática, para ello parte del estudio de las políticas mineras así como del marco jurídico tanto nacional como internacional, cuyo objetivo ha sido transformar a Colombia en un país minero. Este autor ha evidenciado que las disposiciones legales de la política minera han traído consigo consecuencias nefastas para los territorios campesinos y étnicos, así como también al medio ambiente y la biodiversidad.

De igual forma, es importante traer a colación el libro *Minería, territorio y conflicto en Colombia*, el cual es una amplia compilación de diversos autores en colaboración con la Universidad Nacional de Colombia y CENSAT Agua Viva. El libro ofrece críticas desde perspectivas distintas al modelo económico extractivista empleado en Colombia, de ahí que se muestre los efectos de las políticas mineras impuestos por organismos financieros internacionales y que han sido replicados por los gobiernos Neoliberales de turno. También, a través de los diferentes artículos, se expone un panorama amplio concerniente al territorio concebido con un entorno de vida y desarrollo en sus diversos ámbitos, en contraste con la actividad minera y sus consecuencias en las comunidades donde opera.

Por su parte, Gómez (2013) realiza una descripción del impacto ambiental del proyecto Dominical en el entorno local y regional del municipio de la Vega-Cauca, realizando una descripción de las influencias del proyecto en las dinámicas de la sociedad local, especialmente las tensiones que provocó dicho proyecto. Asimismo, Palacios (2014) identifica los efectos que genera la explotación minera en el municipio de Tadó departamento del Chocó y la resistencia de los pobladores a esta actividad. Este estudio parte de un acercamiento a la comunidad, que

pretende visibilizar las principales problemáticas que afectan dicha población. Lo anterior, con base en el análisis tanto de la gran minería como de la minería artesanal, informal e ilegal.

Cabe anotar que desde la sociología se han hecho grandes aportes a la comprensión de los asuntos relacionados con la minería, utilizando categorías de análisis que permiten tener una visión un poco más amplia de este tema. Es así como Sandoval (2012) en su análisis sociológico plantea que la minería se comporta como un campo en los términos de Bourdieu, además de afirmar la existencia de un *habitus productivo*. Lo anterior, aplicado al caso específico de Marmato en el departamento de Caldas, en donde 470 años de explotación de oro de filón han estructurado una cultura amarrada a unas creencias y tradiciones, que tienen incidencia en el grado de racionalidad de las relaciones laborales, del trabajo y del comportamiento económico en general. En un primer momento esta investigación planteó la existencia de una diferencia marcada entre *habitus* de dueños y no dueños de minas, sin embargo, al finalizar la investigación quedó desvirtuada esta hipótesis porque se encontró que había una homogeneidad jerárquica de la población.

De igual forma, desde la perspectiva de género, la sociología ha contribuido entender la minería desde los actores que participan en ella. Es así como Bolívar (2016), en su trabajo de grado devela las características de la acción colectiva femenina como consecuencia de la disputa de los recursos naturales entre el Estado y la comunidad afrodescendiente que habita el corregimiento de la Toma en el municipio de Suárez Cauca. En síntesis, esta investigación indaga por la participación de las mujeres mineras de la Toma en las movilizaciones colectivas en contra de la minería foránea durante el primer periodo presidencial de Juan Manuel Santos (2010-2014). El objetivo de este ejercicio académico, consistió en describir las formas de participación de las mujeres que trabajan en las minas durante la coyuntura del gobierno Santos, que se oponían no sólo a las directrices estatales sino también a los actores irregulares que explotan los recursos mineros de este territorio.

Es importante, resaltar que en Colombia la minería ilegal y la legal coexisten de vieja data. No obstante, hay que precisar que no hay un reconocimiento de la minería como práctica cultural ancestral que implica una serie de cosmovisiones y rituales en las comunidades principalmente campesinas. En contraste con lo anterior Pinilla y Santos Mora (2014) en su artículo, resumen los resultados de un trabajo de grado donde se condensa desde las narrativas de los indígenas Tikuna de la comunidad de Caña Brava, el impacto que la minería ilegal ha generado en el río Cotuhé ubicado en el norte del Amazonas. En este estudio se ejemplifica cómo esta nueva actividad económica irrumpió en esta comunidad indígena quebrantando las tradiciones propias de la colectividad. Los indígenas afirman que la llegada de los mineros trajo consigo brotes de descomposición social, además de una reconstrucción del significado del territorio, esencialmente para los indígenas jóvenes.

Remitiéndose a periódicos de circulación nacional como el País, es posible encontrar que se registran noticias en las que sus principales temas de interés son la contaminación ambiental, el

cierre de minas ilegales, las protestas de los pobladores, los paros y los efectos colaterales que acarrea la minería. Para el caso particular de Cali, es posible encontrar un amplio cubrimiento del impacto que ha tenido la extracción ilegal de oro en la reserva natural los Farallones de Cali. En las noticias se muestra las afecciones a la salud por la contaminación de la cuenca de los ríos que surten a gran parte de la ciudad, así como la problemáticas sociales generadas a partir de las prácticas mineras de forma artesanal e ilegal.

En este sentido, destacamos de la revisión bibliográfica la amplia investigación que se ha hecho en el Perú sobre los impactos de la minería en localidades. Además se logra identificar que en Colombia se han hecho estudios de tipo investigativo, informativo y descriptivo del problema. Capítulos de libros como artículos se empeñan en mostrar los efectos de la minería a gran escala en regiones rurales de economía campesina. Por su parte las noticias evidencian la contaminación de las fuentes hídricas, la descomposición social y las diversas medidas que se implementan por medio de la legislación para criminalizar al pequeño minero.

Referentes Conceptuales

En nuestro esfuerzo por comprender e interpretar los cambios que se han presentado en los corregimientos de Los Andes y Pichindé, asociados a la explotación minera en el Parque Nacional Farallones de Cali, tan cercana a nuestras vivencias, por estar a pocos minutos de Cali, pero a la vez lejana para otros pobladores de la urbe, que siguen creyendo que la ciudad no tiene campo. Comenzamos por cuestionarnos cómo abordar una problemática tan compleja, que involucra diversos actores y múltiples matices. Asimismo, nos interesamos porque esta investigación aporte nuevas perspectivas a problemas tan vigentes en Colombia como la minería ilegal en tiempos de post-acuerdo y de demandas ambientales de organizaciones para contrarrestar sus efectos. Motivadas por los anteriores cuestionamientos indagamos esta realidad a partir de dos ejes analíticos: el primero: *la nueva ruralidad*, que involucra a un campesinado, ligado a un territorio y a una prácticas agrícolas y mineras (legales e ilegales) el segundo: el proceso de cambio que han producido los nuevos pobladores, las recientes actividades productivas y laborales que desarrollan los residentes, la presencia institucional (tanto de Parques, como las autoridades de Policía y las fuerzas armadas), entre otros factores que han modificado las relaciones sociales.

Nuestro trabajo contempla observar el medio rural como “...el conjunto de regiones o zonas con actividades diversas (agricultura, industrias pequeñas y medianas, comercio, servicios) y en las que se asientan pueblos, aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados...” Ceña (Citado por Pérez, 2001, p. 23). Asimismo, este medio incluye el desarrollo de actividades como la ganadería, la pesca, la minería, la extracción de recursos naturales y el turismo (Pérez, 2001). En un sentido más estricto, Ramos y Romero (Citado por Pérez, 2001) señalan que el medio rural es una entidad socioeconómica en un espacio geográfico que consta de cuatro componentes específicos:

- “...Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias primas, receptor de residuos y soporte de actividades económicas.
- Una población que, con base en un cierto modelo cultural, practica actividades muy diversas de producción, consumo y relación social, formando un entramado socioeconómico complejo.
- Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior mediante el intercambio de personas, mercancías e información, a través de canales de relación.
- Un conjunto de instituciones públicas y privadas que vertebran y articulan el funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco jurídico determinado...”
(p.23)

Entendiendo que a nivel de América Latina y el Caribe las instituciones financieras y técnicas que operan al servicio del desarrollo de los países, como lo son el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, emprendieron un proceso de revalorización de lo rural que trata de desligarse del énfasis agrarista que por décadas ha sido la base de las políticas públicas orientadas a priorizar la atención de los territorios rurales, surge la premisa de nueva ruralidad cuyo fin es combatir la pobreza y las consecuencias de ésta, es decir la exclusión social generalizada. Teniendo en cuenta la nueva realidad a la que se enfrenta el campo, diversos autores latinoamericanos han tratado de conceptualizar la categoría de nueva ruralidad.

Las transformaciones que se han producido en el ámbito rural surgen en el contexto de la emergencia de múltiples fenómenos que permiten repensar la noción tradicional de ruralidad. Esta última, en su versión tradicional, según Gómez (2008), en el libro *La nueva ruralidad en América Latina, avances teóricos y evidencias empíricas* contempla características tales como: exclusividad de la población rural en la actividad agrícola, dispersión de la población rural en un territorio de baja densidad que desconoce la intervención del entorno urbano en el medio rural; aislamiento de las comunidades rurales que no les permite acceder a servicios e infraestructura básica y a los avances de la cultura pues se presenta analfabetismo y malas condiciones de educación. Así como, una subvaloración de lo rural y sobrevaloración de lo urbano, que repercute fuertemente en que se den flujos migratorios desde el campo a la ciudad. Teniendo en cuenta lo anterior, lo urbano es sinónimo de modernidad, en contraste lo rural se relaciona con el atraso. Desprendiéndose de la antigua noción de ruralidad se define el concepto nueva ruralidad, como lo específica Vergara (2011), desde una mirada más holística que incluya la multifuncionalidad de lo rural y que rompa con la visión dualista del mundo rural y del urbano. De igual forma, se contempla el territorio como eje principal para la comprensión de la realidad del campo y se desplaza la perspectiva sectorial.

De acuerdo con Grammont (2008), el concepto de nueva ruralidad es amplio y se encuentra en constante construcción, sin embargo se puede sintetizar en grandes tendencias como: se desestima

la premisa de que el campo (asociado con el atraso) debía avanzar hacia el supuesto desarrollo de la ciudad (modernidad). Esta idea había predominado hasta la actualidad, en el mundo globalizado se considera que el campo ha vivido un proceso de urbanización, gracias a que las migraciones produjeron dinámicas de inserción en mercados laborales en actividades distintas a las agrícolas.

De la misma manera, el uso de los medios masivos de comunicación, como radio y televisión es también parte de la realidad de las comunidades rurales, se está dando un proceso en doble sentido, mientras lo urbano se ruraliza lo rural se urbaniza, gracias a los procesos de hibridación consecuencia de la globalización. Las tecnologías de desarrollo industrial impactan tanto a la ciudad como al campo, de ahí que las prácticas agrícolas están delimitadas por las nuevas tecnologías. La población rural no vinculada a la agricultura y los ingresos derivados de diversas actividades económicas cobran relevancia al hacer parte de esas nuevas pautas que impone la globalización; la idea de desarrollo pasa a desestimarse al entender que los fenómenos de desigualdad social, pobreza y marginalidad deben tener atención prioritaria en el campo. Merece atención especial la situación de las mujeres rurales y la perspectiva de género se vuelve transversal a todos los asuntos a tratar en el medio rural, así como el cuidado y conservación del medio ambiente se convierte en una demanda constante hacia las nuevas formas de intervención en el campo.

La nueva ruralidad contempla nuevos estilos de vida, que no solo se ubican en la esfera económica, sino en el ámbito de la ideología y de la cultura... Lo rural ha cambiado de significado, se revaloriza para ser representar un nuevo ideal identitario, modelos de vida y de consumo... El campo ha sufrido una urbanización, debido a que ahora las poblaciones rurales gozan de todas las comodidades propias de la urbe como luz, agua, potable, comunicaciones, escuelas, etc. (Grammont, 2008, pgs. 32-33).

Para puntualizar, el autor destaca dos enfoques bajo los cuales la nueva ruralidad se enmarca, el primero “se centra en las transformaciones económicas, sociales y políticas de la sociedad” (Grammont, 2008, p. 26). El segundo orientado a establecer cómo deben responder las nuevas políticas públicas ante los recientes desafíos que presenta el campo, con lo cual se busca que este último desempeñe el rol que se le atribuye. Para el interés de nuestra investigación, consideramos pertinente encaminarnos hacia el primer enfoque, debido a que pretendemos dar cuenta de las transformaciones sociales, económicas y ambientales que ha experimentado dos localidades rurales gracias a la incursión de una actividad económica compleja como la minería ilegal, que nos permiten hoy hablar de una nueva ruralidad.

En este sentido, traemos a colación la investigación de Ortiz (2003), “*Cultivos ilícitos y nueva ruralidad en Colombia*”, pues creemos pertinente que éste estudio resalta la aplicabilidad del concepto de nueva ruralidad para un caso particular y similar al nuestro. En el caso específico de los cultivos de uso ilícito en dos regiones de la Amazonia colombiana, Ortiz plantea que los elementos que configuran una nueva ruralidad distan ampliamente del modelo en boga de los países

de Europa y en el caso de Latinoamérica de Brasil. En estos países, “el bienestar es el parámetro que se aprecia como aglutinador de estos cambios (la segunda residencia, la revaloración de lo rural, etc.)” (p. 164). Por su parte, en las regiones que este autor analiza los cultivos de uso ilícito funcionan como el aglutinador de cambio, pues son percibidos como fuente de ingresos estables, por encima del medio ambiente, el ámbito productivo y sobre todo el tejido social. En nuestra investigación la minería ilegal sería considerada como eje aglutinador de cambio bajo las mismas premisas que señala el autor.

Ruiz y Delgado (citados por Castañeda, 2012) plantean que la que nueva ruralidad se emplea para reinterpretar formas de organización y, del mismo modo, el cambio que experimentan en la actualidad las funciones de los entornos agrícolas, las nuevas formas de relacionarse con el territorio y, por supuesto, la diversificación del uso del suelo. Por otra parte, es necesario especificar la importancia que el territorio cobra para nuestras localidades de estudio, por ello la nueva ruralidad pasa a ser un concepto de gran utilidad como herramienta analítica. En este sentido, Fals Borda afirma que el territorio no puede ser visto como un simple espacio físico, pues en éste confluyen la cultura, la tradición y la historia convirtiéndolo en una realidad multidimensional viva. De ahí que el territorio sea construido culturalmente que parte de un sentido de pertenencia por el espacio. El PNUD (2011) contempla esta visión cuando menciona que el territorio es una construcción social cargada de significados, “donde múltiples actores establecen relaciones económicas, sociales, culturales, políticas e institucionales, condicionadas por determinadas estructuras de poder y por las identidades de aquellos actores” (p. 31).

Asimismo, en esta nueva concepción de la ruralidad se tiene en cuenta los múltiples actores que participan en los espacios rurales, por ello el género cobra relevancia. Hoy se evidencia el papel preponderante de la mujer y su intervención en las actividades productivas, que antes no eran visibilizadas. Es común ver la injerencia de las mujeres rurales en actividades de agricultura, ganadería y minería. Cuando se vinculan a las prácticas mineras, reproducen los roles domésticos. Por su puesto, dentro de las nuevas dinámicas del campo se sabe que éstas se han ido incorporando a oficios comúnmente desarrollados por hombres dentro de la minería informal. Bolívar e Ibarra (2017), Posso (2018)

Como lo hemos mencionado, en esta investigación la problemática minera se ha abordado desde distintas perspectivas, para tratar de indagar sus causas y posibles consecuencias. Considerando que estas últimas pueden ser múltiples de acuerdo al contexto y tipo de minería que se realice encontramos en un primer momento la definición de minería ilegal, contemplada en el Código de Minas (Congreso de la República, Ley 685 de 2001, Art. 159). Ésta sostiene que toda actividad exploratoria y de explotación de minerales realizada dentro de propiedad privada o de la nación, que no cuente con el respectivo título minero vigente o que no tenga autorización por parte del titular de la propiedad, es considerada ilícita. Para el 2011 la Procuraduría General de la Nación destacó las razones por las cuales la minería ilegal tiene connotaciones negativas, debido a que evade el sistema,

el control y la vigilancia, al no cumplir con los requisitos para acceder a una licencia ambiental. Asimismo, por su carácter de ilegalidad, no retribuye el pago de la carga tributaria correspondiente a dicha actividad.

En ocasiones la minería ilegal impacta o se desarrolla en áreas protegidas, generando daños en el ecosistema. También afecta directamente sobre el ordenamiento territorial, puesto que no permite conocer la disponibilidad de los suelos y sus posibles usos, pues en zonas donde se instala; y generalmente, los territorios están controlados por grupos al margen de la ley. Esta actividad contribuye a engrosar las tazas del trabajo informal, al no contar con beneficios de seguridad social y ocupacional. Sumado a lo anterior, la minería ilegal emplea en su gran mayoría a menores de edad y mujeres cabeza de familia, a quienes se les vulnera sus derechos. Esta actividad dificulta el trabajo del Estado en la formulación de políticas públicas.

Leonardo González Perafán, coordinador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), destaca la diferencia entre minería artesanal, informal o tradicional y la minería ilegal. Este investigador hace énfasis en que se tiende a confundir estos tipos de minería. Aclara que la minería artesanal o tradicional tiene un carácter ancestral, debido a que hace parte de las prácticas culturales de una comunidad. También es una forma de resistencia frente a la pobreza. Ejemplo de lo anterior, son los casos de la Toma Cauca, Tadó y Condoto en el Chocó.² En contraste, la minería ilegal dista de lo mencionado anteriormente. Los grupos armados al servicio de mega estructuras del narcotráfico y multinacionales son quienes se lucran de esta actividad. De ahí que difieran la minería artesanal o tradicional de la minería ilegal, pues los actores y fines de explotación son distintos. Hasta aquí es importante destacar, que en el caso de la minería ejercida en el PNN Farallones de Cali, se encuentra una particularidad, pues en su momento ésta fue controlada por grupos armados, posteriormente por personas organizadas y actualmente, debido al control de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se desarrolla individualmente con una cierta solidaridad entre los mineros y con una constante tensión entre las autoridades ambientales y estos últimos.

De la misma manera, Cebik (citado por Juárez, 2015), ratifica que detrás de la minería ilegal hay unos años de tradición, así como una historia, una cultura y la transmisión de saberes que pasan de generación en generación. Lo anterior constituye la construcción de significados, subjetividades y narrativas diversas. Sin embargo, todo ello se encuentra ligado a un contexto específico a tener en cuenta, solo así se puede dar una interpretación verdadera que contribuya y aporte a un amplio conocimiento de la actividad minera.

Igualmente, Güiza (2014) enfatiza que la condición de ilegalidad de la minería es una situación residual originada por las normas, que no reconocen las condiciones tanto sociales, como culturales

² Para ahondar en el caso de La Toma ver trabajos de: Donney Carabalí Viveros y Vivian Andrea Ladino Mosquera (2014) “*Mujer minera y vida cotidiana*”; María Camila Bolívar Rocha y María Eugenia Ibarra Melo (2017) “*Las mineras de la Toma. Resistencia negra en defensa de la vida y el territorio*”; y Anabel Arias Cuéllar (2015). *Conflicto minero y organizaciones étnicas: Cabildo Indígena Nasa de Cerro Tijeras y Consejo Comunitario Afrodescendiente de La Toma en resistencia*.

y económicas en la minería de subsistencia, en donde las técnicas de extracción son predominantemente manuales. Como consecuencia se comete el error de colocarla al nivel de la gran minería.

En lo que respecta a la minería ilegal, el Centro Internacional para Investigaciones sobre el Desarrollo (Citado por Juárez, 2015), señala aspectos centrales que caracterizan a la minería informal e ilegal. El trabajo y las relaciones de parentesco así como las de vecindario constituyen ejes sobre los que se fundamenta esta actividad. Adicionalmente, dentro del ambiente de informalidad la posesión de la minas es transmitida de generación en generación por vía de hecho y reconocimiento social. En este sentido, la minería informal e ilegal, pasa a ser una actividad local, legitimada en su contexto y en un cierto modo reproductiva, por ello requiere que su análisis y enfoque sea completamente diferente de la visión global de la minería.

Por otra parte, trasladándonos a la noción de campesino, Bejarano (Citado por Vergara, 2011), afirma que en los años cincuenta el enfoque de la modernización caracterizaba a los campesinos como productores tradicionales e irracionales en cuestiones económicas, pues estos no tomaban sus decisiones con base en las pautas dictadas por las economías del mercado. Para entonces, se notaba ampliamente la diferencia entre el granjero capitalista de los países desarrollados y el campesino común de nuestro país, debido a que el atraso tecnológico y la escasez de capital eran estrechamente relacionados con la situación de estos últimos. Consecuencia de lo anterior eran la poca productividad agrícola y la pobreza generalizada.

Entre los años cincuenta y sesenta, en América Latina se generalizó el concepto de campesinado como un grupo social uniforme, cerrado, dócil y con escaso capital económico, que lo ubicaba en el escalafón más bajo de la sociedad. Se contemplaba la familia campesina como una institución productiva, pues la fuerza de trabajo estaba a cargo de los miembros del hogar, quienes destinaban su producción para el autoconsumo. El arraigo a su territorio les permitía compartir rasgos culturales y las actividades económicas se volcaban al sector agropecuario. En Colombia, la discusión giraba en torno a que existía un campesinado excluido de las relaciones socio económicas internas, sin una posición política clara y mucho menos con una capacidad transformadora de su entorno, condicionado como proveedor en el mercado y condenado a la explotación y desigualdad que desde siempre ha sido latente en el campo, lo anterior parte de una visión estructuralista que predominaba la época (Castañeda, 2012).

Ahora bien, desde una mirada institucional más reciente, se recalca el rol decisivo de los campesinos en el fomento del sector agropecuario, debido a su contribución en la producción de alimentos. Han sido claves en la apropiación del territorio y en las luchas por la tierra. También se reconoce, su papel histórico en el surgimiento de partidos políticos tradicionales y actuales. Darle un reconocimiento definitivo a los campesinos ha permitido entender que estos han nutrido las corrientes migratorias hacia el interior del campo y hacia las ciudades aportando a los procesos de modernización (PNUD, 2011, p. 115).

Sumado a lo anterior, la declaratoria sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Reza en su artículo primero que:

1. Un campesino es un hombre o una mujer de la tierra, que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción de alimentos u otros productos agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en familia y otras formas en pequeña escala de organización del trabajo. Los campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno natural local y los sistemas agroecológicos.
2. El término campesino puede aplicarse a cualquier persona que se ocupe de la agricultura, la ganadería, la trashumancia, las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares en una zona rural. El término abarca a las personas indígenas que trabajan la tierra.
3. El término campesino también se aplica a las personas sin tierra. De acuerdo con la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se consideran personas sin tierra las siguientes categorías de personas, que probablemente se enfrenten a dificultades para asegurar sus medios de vida: a) Familias de trabajadores agrícolas con poca tierra o sin tierra; b) Familias no agrícolas en zonas rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos miembros se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la prestación de servicios; c) Otras familias rurales de trashumantes, nómadas, campesinos que practican la agricultura migratoria, cazadores y recolectores y personas con medios de subsistencia parecidos (ONU, 2013, p.2).

Teniendo en claro la noción de campesinado y de su importancia dentro de las transformaciones que pretendemos dar cuenta, destacamos que cuando nos referimos a los cambios y las transformaciones sociales hablamos de “ciertos aspectos de multitud de diferentes procesos sociales, cada uno de los cuales sigue su propia lógica individual” (Tilly, 1998, p.28). Para este caso específico no se puede comprender las transformaciones en los distintos aspectos sociales, económicos y ambientales como un todo, es necesario complementarlo con otras perspectivas para dar cuenta de cómo se dan esas transformaciones y qué factores intervienen en ellas.

Retomando a Tilly, para destacar aspectos importantes del cambio, éste señala que a finales del siglo XX aún seguían vigentes las ideas sobre la organización social y el cambio predominantes en el siglo anterior. Estas ideas surgían de la preocupación de los intelectuales por la conmoción que estaban generando sucesos de la época tales como: concentraciones de población, producción, capital, fuerza coactiva y poder organizativo sin precedentes. Así pues, estas ideas se fundamentaban en cómo la creciente diferenciación se constituye en el principal proceso conductor de cambio social, “considerando a la sociedad como un conjunto de estructuras coherentes y frágiles, vulnerables al desequilibrio entre diferenciación e integración, y toda una serie de ideas relacionadas con ellas” (Tilly, 1991, p.16).

En ese sentido, Tilly señala que “el cambio social no es un proceso general, sino un término que engloba procesos muy diferentes entre sí y entre los que existen unas conexiones muy distintas unas de otras” (Tilly, 1991, p.27). Por ello, plantea que la sociología tiene que desprenderse de las viejas nociones con las que se estudia el cambio social. Sugiere que es imprescindible construir análisis históricos concretos de las grandes estructuras en los que se debe tener en cuenta el tiempo, los lugares y las personas. Además, al ser históricos tendrían que limitar su alcance a una época definida, para lo que es preciso reconocer desde un principio, lo indispensable del tiempo, pues “el *cuándo* pasan las cosas dentro de una secuencia afecta al *cómo* ocurren” (Tilly, 1991, p.29).

Tilly, como uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX, formuló grandes aportes que se pueden sintetizar en una teoría macro del cambio social, así mismo, realizó consideraciones fundamentales sobre lo que debe ocupar a nuestra disciplina, y por qué la sociología no sólo debe estudiar el cambio, sino estudiarlo de determinado modo, teniendo en cuenta los grandes procesos y las transformaciones enormes. Éste autor sugiere entonces, que los cambios no deben ser tomados a la ligera, pues no son algo esporádico ni efímero, por el contrario, son procesos que se perpetúan en el tiempo y tienen consecuencias que se reflejan en la sociedad.

No obstante, para tratar la noción de cambio social de manera más operativa, traemos a colación las consideraciones de Rocher (1990), quien especifica qué es y qué no es un cambio social desde la perspectiva sociológica. Este autor define el cambio social como: “toda transformación observable en el tiempo, que afecta, de una manera no efímera ni provisional, a la estructura o al funcionamiento de la organización de una colectividad dada y modifica el curso de su historia” (p.414). Asimismo, afirma que un cambio social no es un acontecimiento, aunque éste pueda acompañarlo y hasta provocarlo; tampoco lo es una sustitución del personal, pues ésta última se produce constantemente en la sociedad. Por último, no es considerado un cambio, aquel que sólo afecta a una persona o unas pocas, debido a que la socialización de una persona implica en ella transformaciones trascendentes, que no necesariamente involucran un cambio social.

De igual modo, Andrés de Francisco afirma que la noción cambio social, es “un concepto *complejo y equívoco*. Su complejidad puede convertirlo en un concepto demasiado difícil de entender, mientras que su equivocidad lo puede convertir en un concepto demasiado fácil de aplicar” (de Francisco, 1997, p.47). Este autor hace un ejercicio académico importante en el estudio del cambio social, porque descompone el concepto aislando sus dimensiones esenciales y diferenciando sus múltiples referentes.

De las dimensiones que descompone están en primera instancia la importancia de las estructuras y las acciones; seguido de los factores, mecanismos, condiciones y consecuencias del cambio social, continuando con las formas de cambio social: tipos de procesos, pasando por el ritmo del cambio social y la intertemporalidad e interespacialidad de éste, para posteriormente destacar la dimensión ético normativa del cambio social (de Francisco, 1997). Para nuestra investigación, son de mayor interés los mecanismos, factores y consecuencias del cambio social, así como

también tener en cuenta la linealidad del mismo y determinar qué tipos de cambios se han dado, lo cual implica indagar si éstos han sido liberales, conservadores o a lo sumo pequeñas reformas. Por otra parte, entendemos que la noción macro del cambio social, quizá implique procesos muchos más largos que se perpetúan en el tiempo, como el paso de una sociedad feudal a una industrial. Por ello, trataremos de forma más operativa la categoría de cambio social, entendiendo que en nuestro caso de estudio identificamos cambios estructurales, producidos a través de influencias externas, en este caso el desarrollo de una actividad económica como la minería ilegal. De igual forma, cuando hablamos de cambio social nos referimos a “sucesivas diferencias en el tiempo de alguna relación, norma, función, status o estructura social: por ejemplo, la familia, la iglesia, la nación, la propiedad, el rol de la mujer, el status del padre, la comunidad aldeana”. (Nisbet, R., Kuhn, T., White, L., y otros, 1988).

Después de abordar estas nociones planteamos que el objetivo general de este trabajo es describir los principales cambios sociales, económicos y ambientales en los corregimientos de Los Andes y Pichindé, como consecuencia de la explotación ilegal de oro, en los últimos 15 años en las minas de El Socorro. Como objetivos específicos nos proponemos.

- Caracterizar sociodemográficamente la población de los corregimientos de Los Andes y Pichindé, donde se ubican las minas del Socorro o Alto del Buey.
- Rastrear los elementos históricos y actuales de la actividad minera en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, que afecta los corregimientos de Los Andes y Pichindé.
- Identificar, desde las narraciones de los pobladores, las fuentes documentales y las observaciones en campo, los principales cambios sociales, económicos y ambientales que se han producido en el territorio, por el desarrollo de la actividad minera, principalmente.

Metodología

Investigar un tema de alta sensibilidad como lo es la minería ilegal, implicó pensar en una metodología que contempló a los actores como fuente principal de información, por ello recurrimos a las técnicas del diseño etnográfico. Las entrevistas se convirtieron en ejes claves al momento de caracterizar las principales transformaciones sociales, económicas y ambientales y las múltiples conversaciones informales corroboraron la información recogida en campo. De igual forma, dedicamos tiempo a la observación participante, al acompañamiento de actividades cotidianas y a eventos culturales, que nos permitió familiarizarnos con la población, y el conocimiento de las diversas realidades a las que se enfrentan parte de los pobladores rurales de Cali. Los datos cuantitativos fueron obtenidos de fuentes como el Sisben, la encuesta de Calidad de vida y el portal de Datos Abiertos de Colombia, éstos constituyen el insumo básico de la caracterización sociodemográfica de los corregimientos donde se desarrolló la investigación.

La determinación de optar por una estrategia que combinara las técnicas del diseño etnográfico para el proceso de recogida de información partió de la definición que hace Giddens.

La etnografía es el estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo de tiempo utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social. La investigación etnográfica pretende revelar los significados que sustentan las acciones sociales; esto se consigue mediante la participación directa en las interacciones que constituyen la realidad social del grupo estudiado (Giddens, 2004, p.810).

Ante los retos que implicaba la contextualización de la problemática minera, se hizo necesario recurrir a la revisión de prensa, que abarcó dos de los periódicos más importantes de circulación nacional: El Tiempo y El País. De igual forma, se visitó instituciones gubernamentales que hacen presencia en la zona y que tienen información sobre el desarrollo de la minería ilegal y la población. De las distintas visitas institucionales al DAGMA, la CVC, Cali rural (Planeación municipal), la oficina de Gestión del riesgo de la Alcaldía de Cali, El Archivo histórico y Parques Nacionales Naturales de Colombia, se nutre la caracterización que realizamos y parte del análisis que hacemos en esta monografía.

Es importante destacar que Parques Nacionales Naturales de Colombia (En adelante PNNC) desde la Dirección Territorial Pacífico nos permitió acceder a información recopilada de la minería que se desarrolla en los Farallones de Cali, además nos garantizó las condiciones necesarias para la visita realizada a las Minas El Socorro o Alto del Buey.³ Durante esta visita se hizo un reconocimiento del campo de afluencia de la minería a través de recorridos por los distintos campamentos mineros, con lo cual fue posible un registro fotográfico del daño ambiental y de las condiciones en que se desarrolla la explotación de las minas. Además, con este recorrido experimentamos no sólo las inclemencias del clima, sino las actitudes diferenciadas de funcionarios, de los miembros de la Fuerza Pública y, por supuesto de los mineros. En medio de los recorridos los funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia y miembros del Ejército del batallón de Alta Montaña Rodrigo Lloreda Caicedo realizaron capturas de mineros en flagrancia. Asimismo contamos con la posibilidad de conversar con algunos de los mineros capturados, a los que les indagamos sobre algunas cuestiones relevantes.

Con respecto a las personas que colaboraron en nuestra investigación destacamos la dificultad que tuvimos para contactarlas, pues es bien sabido que en la minería ilegal participan grupos armados ilegales en pro de esta actividad, por lo tanto fue un riesgo para nosotras como investigadoras indagar sobre este tema. Las entrevistas que lograron concretarse fueron posibles porque una de nosotras tiene familia en la zona, por ello éstas se dieron dentro del marco de relaciones familiares y vecinales, mediante la técnica de muestreo bola de nieve. Recalcamos que lo anterior fue posible porque una. Igualmente, algunas personas con las que logramos acercamientos esperaban que nuestra investigación generara algún tipo de retribución a la comunidad. Otros tantos nos asociaron con entidades que han trabajado en el territorio y los cuales no tienen credibilidad para ellos. Hubo quienes se mostraron renuentes a participar porque se encontraban implicados en procesos judiciales sin resolver. Por otro lado, en cuanto a las mujeres, puntualizamos la dificultad de concretar entrevistas con éstas, pues algunas ya no se encontraban en la zona y otras se mostraron reacias a brindarnos información.

³ Visita realizada del 13 al 17 de enero de 2018

Las entrevistas fueron dirigidas a los pobladores de los corregimientos de Los Andes y Pichindé, para ello se identificaron dos perfiles: campesinos y mineros. Tuvimos en cuenta las variables de sexo, ocupación, lugar de origen y tiempo en el territorio. También destacamos el trabajo de las mujeres en la actividad minera. A través de la participación en eventos culturales, plantones y reuniones de la comunidad hicimos contacto con algunos líderes de los corregimientos. El enfoque de las entrevistas giró en torno a cuatro ejes temáticos: características básicas, relación primaria con el territorio, relación con la minería y percepción de cambio. En el primer eje temático se buscaba la identificación del actor. El segundo y el tercero recogieron información que nos fue útil en la caracterización de los corregimientos así como de la minería presente en la zona. En el cuarto eje se identificó, desde la percepción de los actores, los principales cambios sociales, económicos y ambientales.

Se realizaron trece entrevistas semi estructuradas a mineros y campesinos (Ver tabla 1), al igual que conversaciones informales con distintos agentes (Ver tabla 2). Éstas se llevaron a cabo en las viviendas de los informantes ubicadas en los corregimientos de estudio. Asimismo, algunos de los informantes optaron por desplazarse hasta la vivienda de don Adolfo Caicedo, sitio en el que nos encontrábamos hospedadas. El continuo traslado entre los corregimientos para realizar las entrevistas nos llevó a conocer las distintas veredas y por ende nos amplió el espectro de observación. El rango de edad de los entrevistados va de 19 a los 81 años. Por seguridad de los mismos se cambiaron los nombres y se usaron seudónimos.

Tabla 1. Características de los entrevistados

Nombre del entrevistado	Lugar de Nacimiento	Ocupación	Edad	Vereda-Corregimiento	Nivel educativo alcanzado	Hace cuanto vive en la zona
Edier	Risaralda	Minero	36	Pueblo Nuevo parte alta	5to de primaria	30 años
Chepe	Cali	Campesino	26	Pueblo Nuevo parte alta	7 tmo de Bachillerato	Siempre
María	Peñas Blancas	Ama de casa	37	Peñas Blancas	5to de primaria	Siempre
Juan	Peñas Blancas	Agricultor y estudiante	19	Peñas Blancas	cursando grado 10	Siempre
Encho	Cali	Pensionado de la Policía	57	Pichindé	2 semestres de contaduría	desde los 5 hasta los 11 años y desde hace 10 años
Joaquín	Pueblo Nuevo	Líder comunal y Gestor deportivo de la secretaria del deporte	49	Los Andes cabecera	Tecnólogo en producción agropecuaria del Sena	Siempre
Jesús	Popayán	Agricultor	81	Pueblo Nuevo parte alta	8vo Bachillerato	50 años
Rosó	Sotará Cauca	Agricultor	65	Pueblo Nuevo parte alta	4to de primaria	55 años
Pedro	Cali	Independiente	37	No es de la zona (Cali)	*	*
Yilber	Peñas Blancas	Caminero	32	Peñas Blancas	2do de primaria	Siempre
Gabriel	Cali	Agricultor	27	Los Andes cabecera	Bachiller	Siempre
Simón	Suárez Cauca	Minero	28	No es de la zona	Bachiller	*

Tabla 2. Conversaciones Informales

Nombre	Características
Alonso Rodríguez	Inspector de Policía Peñas blancas y Pichindé (1985)
Claudio Borrero	Defensor de los ejidos de Cali
David Navarrete	Integrante del Consejo Municipal de Desarrollo Rural de Cali
Jhon	Minero procedente de Cali
Fabián	Minero procedente de Santander de Quilichao
Giovanni	Minero procedente de Cali
Elkin	Minero procedente del Caqueta
Eduardo	Minero procedente de la Unión-Nariño

También, es importante resaltar que el procesamiento de los datos se llevó a cabo por medio de herramientas básicas como Word, para la transcripción de las entrevistas y Excel, para la construcción de gráficos y tablas con base en los datos estadísticos. La clasificación de la información de prensa por periódico y fecha también se realizó con esta última. Hicimos uso del software Geovisor IDESC de la Alcaldía de Cali par

a presentar los mapas de los corregimientos. De igual forma, para la elaboración del listado de fuentes bibliográficas y del diario de campo, las herramientas ya me mencionadas fueron útiles. Zotero, un gestor de referencias bibliográficas, fue empleado como instrumento de apoyo para la realización de las citas.

Capítulo I: Caracterización sociodemográfica de los corregimientos de Los Andes y Pichindé

1.1 Poblamiento de la zona rural de Cali

En el año 1870, específicamente en la zona de los corregimiento de Los Andes y Pichindé, como señala el señor Alonso Rodríguez, inspector de Policía en las veredas de Pichindé cabecera y Peñas Blancas en el año 1985, “se dio una gran migración de la onda caucana formada por municipios como Almaguer, Bolívar y la Sierra y por departamentos como Putumayo y la parte Norte de Nariño” (Entrevista, 14 de Noviembre de 2017). La población proveniente de estas regiones del país había dejado sus tierras porque estas últimas se encontraban deterioradas debido a la erosión ambiental y a que la producción de comida era escasa. Es así como estos migrantes comenzaron la búsqueda de terrenos baldíos con clima frío similares a las condiciones de las que provenían. En aquel entonces era bien conocido que el municipio de Cali existían amplias extensiones de tierra que en su mayoría eran terrenos baldíos y cumplían con las características que ellos buscaban.

Los baldíos que ocuparon los campesinos migrantes fueron tomados en posesión para cultivarlos y así poder alimentar a sus familias, “de esa manera fue que se poblaron los 13 corregimientos de Cali, comenzando desde Pance que se fundó en 1902, Los Andes en 1870, Pichindé 1885 y así sucesivamente se pobló la zona rural de Cali, por ocupación de baldíos” (Entrevista Alonso Rodríguez, 14 de Noviembre de 2017).

Corregimientos Los Andes y Pichindé|q |

Se conoce que el corregimiento de Los Andes comenzó a poblarse a partir del año 1870, con personas provenientes de las dos principales corrientes de inmigración en la ciudad de Cali: la andina y la paisa. Los inmigrantes andinos eran campesinos de escasos recursos que buscaban tierras que les permitiera cultivar sus productos de clima frío, allí estos comenzaron a organizar sus estructuras económicas y sociales, “con un patrón de poblamiento disperso, las familias Valencia y Collazos, colonizan globos de tierra de alrededor de 70 hectáreas cada una en el actual corregimiento de Los Andes, desarrollándose una actividad económica pecuaria, de carácter extensivo” (Motta, 2007, p. 13).

Igualmente, los primeros pobladores del corregimiento de Pichindé datan de los Tayronas, en su periodo nómada, según lo narran algunos descendientes de los fundadores de dicho corregimiento (Solano & Vera, 1996). No obstante,

En 1850 comienza la colonización del corregimiento de Pichindé con inmigrantes del Viejo Caldas, donde realizan actividades agrícolas y luego establecen actividades comerciales en

Cali. Sus familias en el siglo XX consolidan los asentamientos constituyendo parcelaciones rurales de tipo recreativo y corresponde a una población de ingresos medios. Desde 1968 Pichindé empieza a ser parte del Parque Natural Nacional de los Farallones de Cali (Motta, 2007, p. 15).

Otras fuentes especifican que

Más o menos en el año 1880 llegaron procedentes del departamento de Antioquia y del Cauca los primeros pobladores, trayendo cada uno diversas herramientas para la agricultura, como el viaje fue a pie se demoraron meses hasta llegar al corregimiento de Pichindé. En cuanto al nombre de éste último, se dice que el nombre de Pichindé tiene su origen en la llegada del batallón Pichincha a la zona. También hay quienes afirman que este nombre lo dieron los indígenas nativos de la región (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2003, p. 5).

Por otra parte, la historia oral más popular, destaca la llegada del general Lucio Velasco quien pertenecía al Batallón Pichincha. El Gobierno nacional le entregó tierras a este general, que por aquel entonces eran conocidas como Montañas del Lili, en recompensa por los servicios que había prestado en la Guerra de los Mil Días. En Peñas Blancas, el general instaló una guarnición donde construyó la hacienda Las Margaritas, asimismo incentivaba entre sus soldados la colonización de la zona. Por ello, luego de prestar su servicio militar, algunos de éstos establecieron sus viviendas en la región, construyendo casas de barro y paja. Es importante resaltar que previo a la llegada de Velasco, ya existían habitantes asentados en la zona, presuntamente procedentes del Cauca (Solano & Vera, 1996).

En 1938, los Farallones de Cali fueron declarados reserva forestal. Las autoridades encargadas de administrar la reserva respetaron los asentamientos humanos que se encontraban ahí. Las migraciones se hicieron frecuentes como consecuencia de las condiciones económicas de la región, llegan campesinos de localidades aledañas (La Leonera, Felidia, Los Andes); asimismo se da una migración de habitantes de la zona urbana de Cali y de otros municipios del Valle (La Cumbre, Dagua, Tuluá) y de los departamentos del Cauca, Nariño, Tolima, Caldas, Antioquia, Quindío, Huila y Cundinamarca que aportan población a esta colonización de los Farallones de Cali (Solano & Vera, 1996).

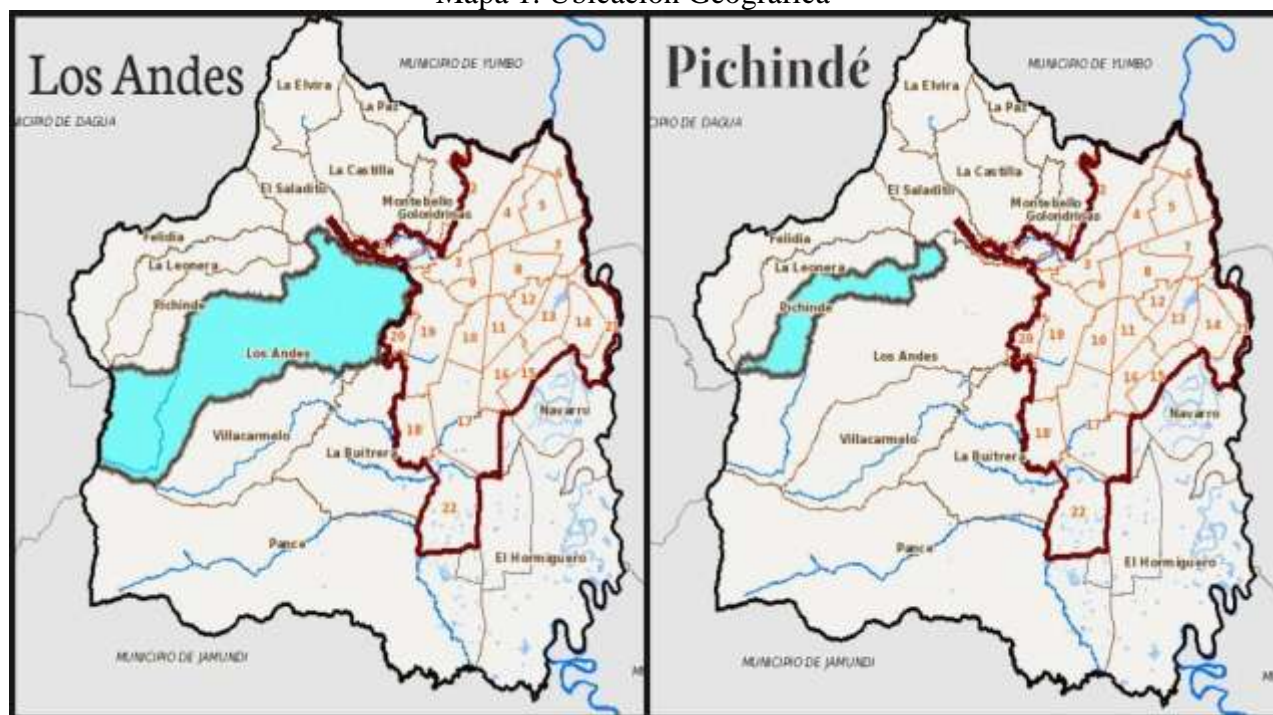
1.2 Localización

Los corregimientos de Los Andes y Pichindé hacen parte de la zona rural de la ciudad de Cali, se encuentran ubicados en la cordillera occidental (Véase Mapa 1). Los Andes limita al norte con la comuna 1 y los corregimientos de Pichindé y El Saladito, al occidente con la cordillera Occidental, al sur con los corregimientos de Pance y Villacarmelo y al oriente con las comunas 19 y 20, este corregimiento cuenta con una extensión de 6.610,51 hectáreas, por lo cual es considerado uno de los más grandes de la zona rural de Cali.⁴

⁴ Alcaldía de Santiago de Cali. (2016-2019) Planes de Desarrollo 2016-2019 Corregimiento Los Andes; Recuperado de <http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/135089/planes-comunas-corregimientos-2016-2019/>

El corregimiento de Pichindé es mucho más pequeño, tiene alturas entre los 1500 y los 1700 metros sobre el nivel del mar; limita al occidente y al norte con el corregimiento de La Leonera, y al oriente y sur con el corregimiento de Los Andes (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2003).

Mapa 1. Ubicación Geográfica



Fuente: elaboración propia, software Geovisor IDESC, Planeación Municipal

1.3 Población⁵

El corregimiento de Los Andes está compuesto por 11 veredas y cuatro sectores: Los Andes (cabecera), Los Cárpatos, Quebrada Honda, Pueblo Nuevo, El Faro, La Reforma, El Mango, Los Andes Parte Baja, Las Pilas del Cabuyal, El Cabuyal, Atenas, Mónaco, Urbanización Cañaveralejo, Bajo Cristo Rey y Cerro de Cristo Rey.

Para el año 2016, el corregimiento de Los Andes contaba con una población de 3.335 habitantes, el 50,25% son hombres y el 49,75% son mujeres⁶. La mayor parte de la población se concentra en la vereda La Reforma, seguida por la población que vive en la vereda Atenas y la vereda El Mango. El resto de la población se distribuye concentra en proporciones menores al 4% en las

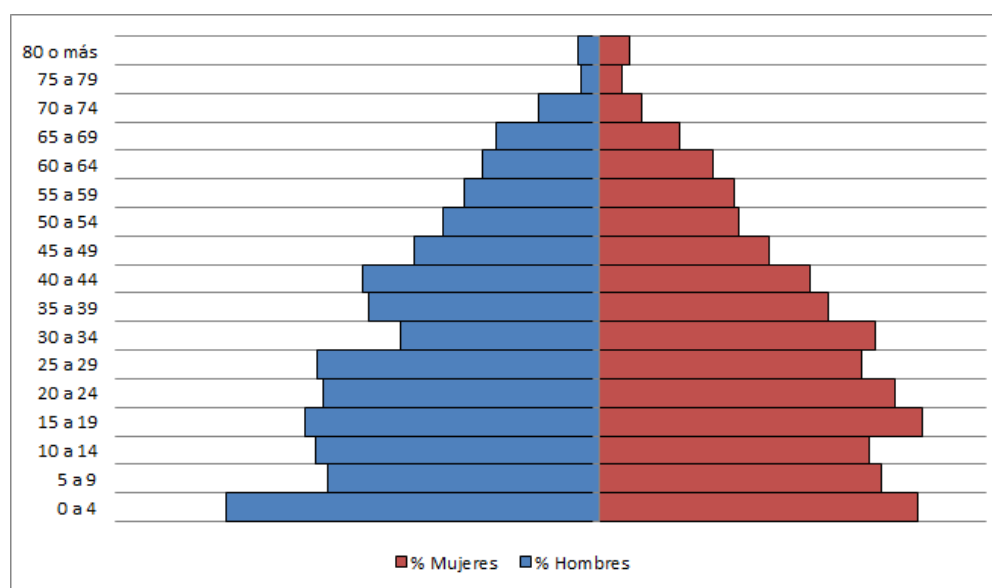
⁵ En un primer momento se contempló tomar en cuenta las estadísticas del Censo Agrícola del 2015 para la caracterización de la población, pero al comprar dichos datos con los arrojados por Cali en Cifras y el Sisben, se encontró que éstos difieren ampliamente entre sí. De acuerdo con los datos del Censo Agrícola para el 2015 la población de los corregimientos de Los Andes y Pichindé era de 468 y 156 habitantes respectivamente.

⁶ Estadísticas por vereda del Sisben III - 2016 en el municipio de Santiago de Cali

demás veredas y sectores del corregimiento. Cabe resaltar que respecto al sexo esta es una población homogénea.

La pirámide poblacional del Corregimiento de Los Andes (Véase gráfico 1) se caracteriza por ser progresiva, con una base amplia la cual se va condensando a medida que aumenta edad, lo que nos muestra una población joven con una alta proporción de niños y adolescentes y una proporción baja de adultos y ancianos. En cuanto a los hombres en edades productivas (30 a 34 años) se observa una conformación atípica, que posiblemente esté relacionada con una probable migración de éstos a la ciudad de Cali, es decir, que quizá hay una movilidad de la gente joven hacia un polo de atracción laboral como lo puede ser Cali. La pirámide poblacional también nos señala que hay mayor número de niños que de niñas.

Gráfico 1. Pirámide poblacional por sexo Corregimiento de Los Andes año 2016



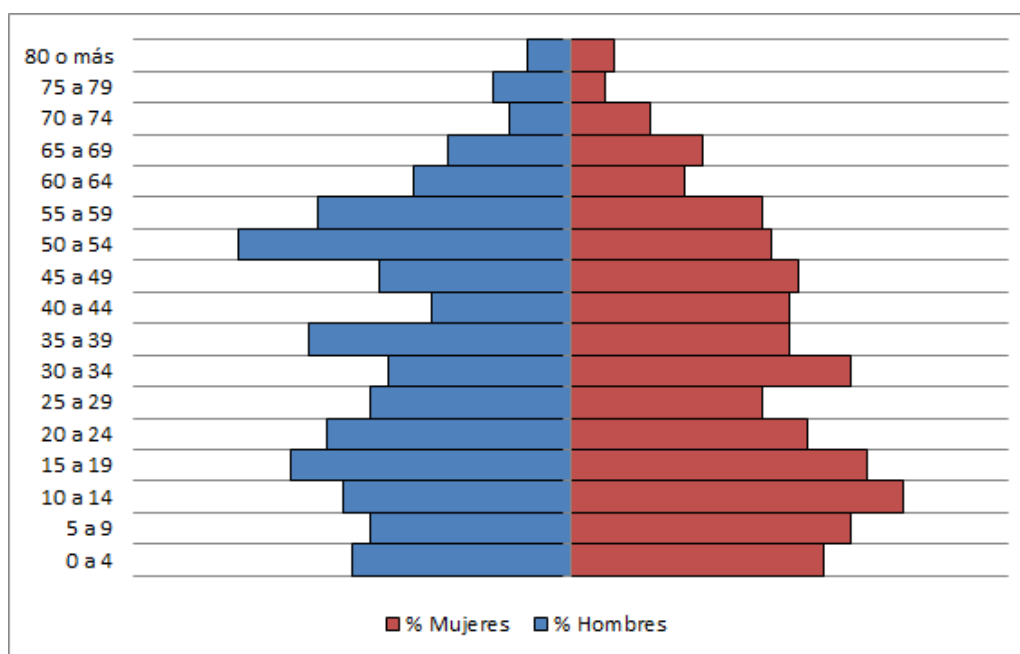
Elaboración propia con datos obtenidos de las estadísticas por vereda del Sisbén III - 2016 Santiago de Cali

En cuanto a la población de Pichindé, se encuentra que el corregimiento contaba, hasta el año 2016, con 747 habitantes y con tres veredas: Pichindé (cabecera), Peñas Blancas y Loma de la Cajita. Cabe resaltar que la diferencia entre hombres (49%) y mujeres (51%) dentro de las veredas es pequeña, por lo tanto se podría decir que la presencia de hombres y mujeres es proporcional.

La pirámide poblacional de Pichindé (Véase Gráfico 2) nos muestra que a partir de los 15 años se está dando una reducción sustancial de las tasas de natalidad, es decir, hay una menor reproducción. Igualmente se observa que la población tiende a estar más concentrada en los rangos de mayor edad, así como también que las mujeres son más longevas que los hombres. Llama la atención la contracción que se presente en los hombres entre los 40 a 44 años,

probablemente asociada al fenómeno de migración. Quizás sea pertinente preguntarse qué pasó hace 20 años para que se esté dando tal situación. Por otro lado, las mujeres no registran contracciones notables por tanto se podría decir que éstas tienden a permanecer en el territorio.

Gráfico 2. Pirámide poblacional corregimiento de Pichindé año 2016



Elaboración propia, datos obtenidos de las estadísticas por verdad del Sisben III-2016, Santiago de Cali.

1.3.1 Composición étnica

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida (EECV) del municipio de Santiago de Cali 2013, los habitantes del corregimiento de Los Andes se identifican en su mayoría como indígenas (41,5%) y, en segundo lugar, como mulatos (22%). En igual porcentaje (7,3%) los habitantes se reconocen como blancos y mestizos; pero es importante resaltar que el (14,6%) de la población responde no saber a qué grupo étnico pertenece y que un 7,3% no responde a la pregunta. Con relación a los mismos indicadores en el corregimiento de Pichindé se encuentra que la población mayoritariamente se auto reconoce como Mestiza (39,3%), otra parte importante de la población (25,0%) dice no saber a qué grupo étnico pertenece. Asimismo el 17,9% de los habitantes del corregimiento se identifican como blancos y otro tanto se reconoce como indígena (14,3%) y afrodescendientes (3,6%).

La diversidad en la composición étnica de estos corregimientos está asociada con lo que señala Ocampo (2014):

nuestro espacio rural es tremendamente heterogéneo, no sólo en razón de la compleja geografía del país sino del peso de las distintas conformaciones sociales que son el legado de nuestra historia: la población indígena, las formas de subordinación de la población indígena y mestiza, la esclavitud que afectó a muchas de las zonas cálidas, la población raizal de San Andrés y Providencia, y la migración de población blanca en una etapa avanzada de la Colonia, que generó asentamientos de medianos y pequeños productores en dos regiones del país (Antioquia y Santander) (p. 5).

En otras palabras el campo colombiano es un reflejo de las diversas conformaciones sociales que se han dado en nuestro país, donde no es extraño encontrar comunidades pluriétnicas y multiculturales, de acuerdo con los parámetros que definió la Constitución Política de Colombia en 1991.

1.3.2 Viviendas y Hogares

De la composición de la población por viviendas y hogares y de acuerdo los datos obtenidos por el Sisben para el año 2016, en el corregimiento de Los Andes hay 979 viviendas y 999 hogares, es decir, que existe una amplia correspondencia entre ellos. Para el caso de Pichindé se presenta la misma situación, pues el número de viviendas y hogares es de 243 y 247 respectivamente.

Por otro lado, según estos mismos datos, se puede establecer que el promedio de personas por hogar tanto en el corregimiento de Los Andes como en Pichindé es de tres personas. Las familias en estos dos corregimientos en su mayoría son nucleares, resaltando que también se presenta familias monoparentales donde predomina la jefatura femenina.

En cuanto al material con el que están construidas las viviendas de Los Andes y Pichindé, según la observación realizada durante el trabajo de campo se destaca que los materiales predominantes son la madera y el ladrillo, principalmente en las cabeceras de los corregimientos y en las veredas donde están asentadas las fincas de recreo. Sin embargo, es posible encontrar casas propiedad de los habitantes más antiguos de Adobe y Tapia.

1.3.3 Propiedad

Los corregimientos de Los Andes y Pichindé, como ya se ha mencionado están dentro del PNN Farallones de Cali, el cual se ubica en la cordillera Occidental y entra en jurisdicción del municipio de Cali, abarcando 13.136 hectáreas que corresponden al 32% del Parque. De acuerdo con la Personería Municipal de Cali, en el informe sobre el PNN Farallones de Cali “desde la expedición de la Resolución 092 de 15 de julio de 1968 ya existía un gran número de colonos y cultivadores ubicados en predios de la Reserva Forestal”. De ahí se deriva la preocupación relacionada con el fenómeno de la ocupación ilegal y tenencia de la tierra en estos corregimientos pues al ser declarado Parque Nacional no tendría por qué tener pobladores.

La compra indiscriminada de predios que se ha dado en los corregimientos de Los Andes y Pichindé, de acuerdo con el informe de la Personería, “está relacionado con el clima, ya que la población busca lugares con una temperatura más favorable y apetecible para su bienestar o descanso, lo que lleva a la posesión de tierras para construcción de viviendas bien sea para ocupación permanente o como áreas de descanso.” Lo mencionado se observa en estos corregimientos, tanto en Los Andes como en Pichindé donde se ubican diversas fincas de recreo; construidas hace varios años y otras recientemente. De igual forma, existen algunas viviendas y pequeñas fincas de pobladores.

Las características de propiedad en esta zona son complejas, pues existen títulos de propiedad privada, predios de la nación e invasiones ilegales, además de esto, los que poseen títulos de propiedad privada han dividido sus predios y vendido a terceros. De acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro: “lo que antes era un solo predio de reserva forestal, hoy son 170 predios que tienen ocupaciones y que incluso están pagando impuestos al Municipio”. Por tal razón, estos corregimientos se componen de grandes fincas de recreo, grandes fincas de campesinos, lotes pequeños, viviendas pequeñas sin terrenos para cultivar, y lotes vacíos que en su mayoría son del Municipio; en donde a pesar del título que se tenga prima la declaratoria de Parque Nacional con las restricciones que esto implica. Por ello, la Superintendencia de Notariado y Registro en 2012, bloqueó los títulos de propiedad, entre los cuales se encontraban compraventas, embargos e hipotecas, con el fin de frenar el aumento de predios en la zona.

1.3.4 Cobertura en servicios públicos

En cuanto a la cobertura en servicios públicos (Véase gráfico 3). En el corregimiento de Los Andes, el servicio con el que más cuenta la población es el de energía (97,2%), el cual ha sido producto de la organización y autogestión de los pobladores. Por su parte, y en menor proporción, los pobladores acceden a los servicios de acueducto (36,1%), alcantarillado (19,6%) y telefonía (10,3%). En el corregimiento de Pichindé, el servicio público con que más se cuenta en las viviendas es el de la energía (98,8%), prestado por las Empresas Municipales de Cali (Emcali), seguido del servicio de acueducto (48,1%) que presta una empresa creada por los pobladores llamada Acuapichindé, que forma parte de una iniciativa de la comunidad para organizarse debido al aumento de población que se comenzó a dar en la zona. Por último, se cuenta con el servicio de alcantarillado (5,3%) y de telefonía (4,5%).

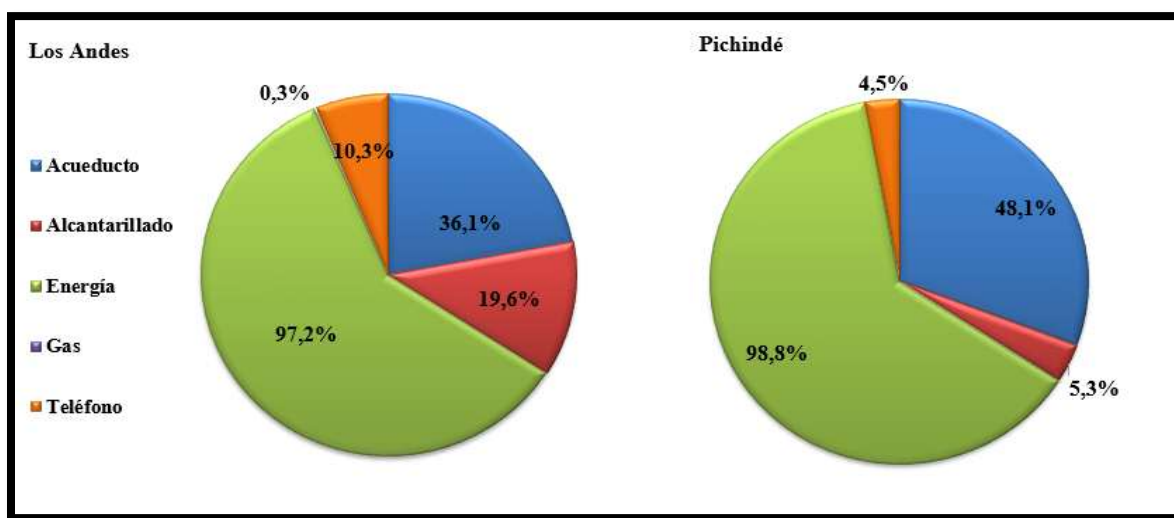
En Colombia, de acuerdo con el documento *Conpes 3018 de 2014*:

Las acciones para asegurar la provisión de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales han quedado en cabeza de los municipios, especialmente en aquellos que presentan un baja capacidad institucional y financiera o de comunidades organizadas, que se caracterizan por no contar con instrumentos que les permitan acceder a los recursos para financiar proyectos de construcción, ampliación u optimización de los servicios (DNP, 2014, p. 6).

La poca e inadecuada provisión de servicios primordiales como agua potable y saneamiento básico que tienen las zonas rurales del país, lleva a que sean las propias comunidades quienes auto gestionen los servicios básicos, situación presente en los corregimientos de Los Andes y Pichindé. Por su parte, otra de las cuestiones que dificulta la cobertura de servicios públicos en las zonas rurales del país se da por cuestiones geográficas y topográficas, pues implica llegar a zonas de difícil acceso, esto conlleva a unos costos más elevados en inversión.

En el caso de los corregimientos de Los Andes y Pichindé como zona rural de la ciudad de Cali, si se compara la cobertura del área rural y la urbana teniendo en cuenta que los corregimientos se encuentran relativamente cerca de la ciudad (aproximadamente 45 minutos), encontramos que existen brechas significativas principalmente en el servicio de acueducto y alcantarillado, debido a que la cobertura de acueducto está por debajo del 48% y alcantarillado por debajo del 20% en la zona urbana, mientras en Cali la cobertura de estos servicios es del 100% .

Gráfico 3. Cobertura de servicios públicos año 2016

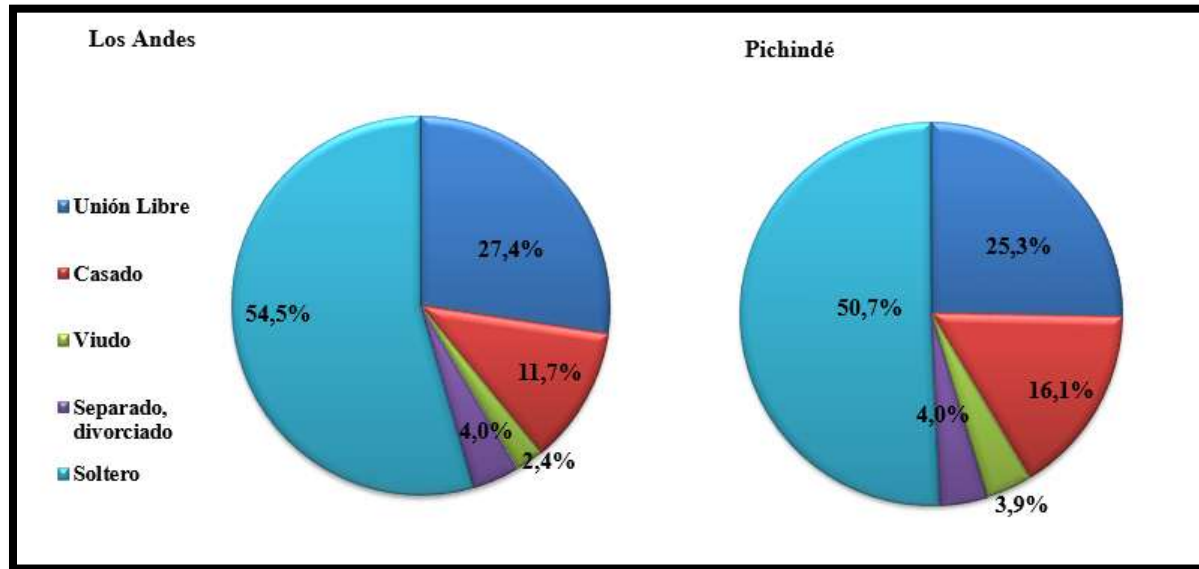


Elaboración propia con datos obtenidos de las estadísticas por vereda del Sisbén III - 2016 Santiago de Cali

1.3.5 Estado civil

De acuerdo con las estadísticas del Sisben 2016, en cuanto al estado civil de la población (Véase gráfico 4), se destaca que más de la mitad de la población (54,5%) para Los Andes y (50,7%) para Pichindé dice ser soltero, lo cual podría explicarse por el hecho de que la población de estos corregimientos está compuesta en mayor proporción por niños, adolescentes y jóvenes, los cuales no están en edad de casarse. Además, en el corregimiento de Los Andes el 27,4% de la población vive en unión libre y solo el 11,7% se ha casado; ahora bien, hay un importante porcentaje de habitantes del corregimiento de Pichindé (41,4%) que dice estar casado o en unión libre, siendo la unión libre el estado civil con mayor proporción (25,3%).

Gráfico 4. Estado civil de la población año 2016



Elaboración propia con datos obtenidos de las estadísticas por vereda del Sisbén III - 2016 Santiago de Cali

1.3.6 Aseguramiento en Salud

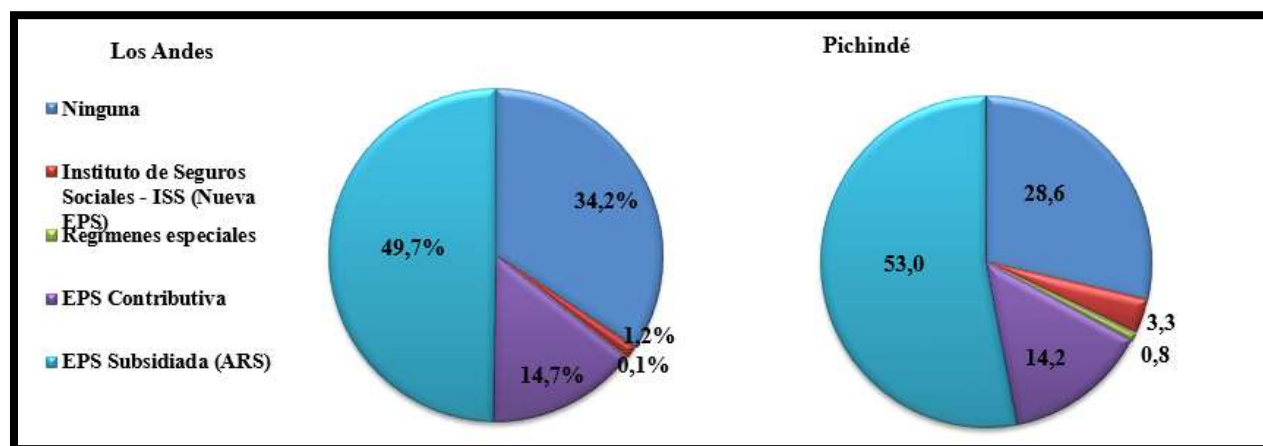
En cuanto al tema de salud, Los Andes cuenta con un centro de salud, con un personal médico que atiende servicios de medicina general, asimismo Pichindé tienen dos centros de salud los cuales ofrecen servicios de atención básica. Como se muestra en el gráfico 5, gran parte de la población (49,7%) en Los Andes y (53%) en Pichindé se encuentra afiliada a la EPS subsidiada (ARS). Llama la atención que hay porcentajes considerables de la población que no cuenta con ningún tipo de afiliación a las EPS (34,2%) en Andes y (28,6%) en Pichindé, lo cual tiene relación con el hecho de que es una población rural en donde los ingresos son bajos y los trabajos son inestables,

“este hecho y, aún más, el predominio de prácticas informales de trabajo, implica que algunos mecanismos de protección social (el sistema pensional) casi no existen en las zonas rurales y otros tienen un desarrollo precario (acceso a los servicios de las Cajas de Compensación) o están caracterizados por serios problemas de calidad (educación y salud)” (Ocampo, 2014, p.8). Si tomamos en cuenta lo anterior, es comprensible que sólo el (14,7%) de la población de Los Andes y (14,2%) de la de Pichindé esté afiliada a una EPS contributiva.

Según el informe del DNP (2014), la afiliación de la población rural y urbana a salud, ha disminuido sustancialmente las brechas existentes, no obstante, el acceso, uso y la calidad de los servicios dista de ser igual entre las cabeceras y la población dispersa. Los habitantes rurales cuentan con centros de Salud que solo prestan servicios generales, en el caso de Los Andes y Pichindé, hay 3 centros de salud que atienden a la población con un alcance muy limitado. El médico general atiende 2 veces por semana las situaciones que requieren mayor cuidado, siendo frecuente la permanencia de la enfermera quien a su vez es la promotora de salud, es decir,

cumple varias funciones que no le permiten cubrir eficazmente las necesidades de los pacientes. De ahí que para consultar un especialista, realizarse exámenes médicos y reclamar medicamentos los pobladores se deben trasladar hasta la ciudad de Cali para dichos procedimientos. La distancia a los hospitales y clínicas constituye un aspecto fundamental en el acceso limitado que tienen los habitantes rurales a los servicios de salud, pues genera costos adicionales asociados a transporte, alimentación y en muchas ocasiones estadía, lo cual es una queja constante entre los habitantes de Los Andes y Pichindé.

Gráfico 5. Tipo de afiliación a salud año 2016



Elaboración propia con datos obtenidos de las estadísticas por vereda del Sisbén III - 2016 municipio de Santiago de Cali

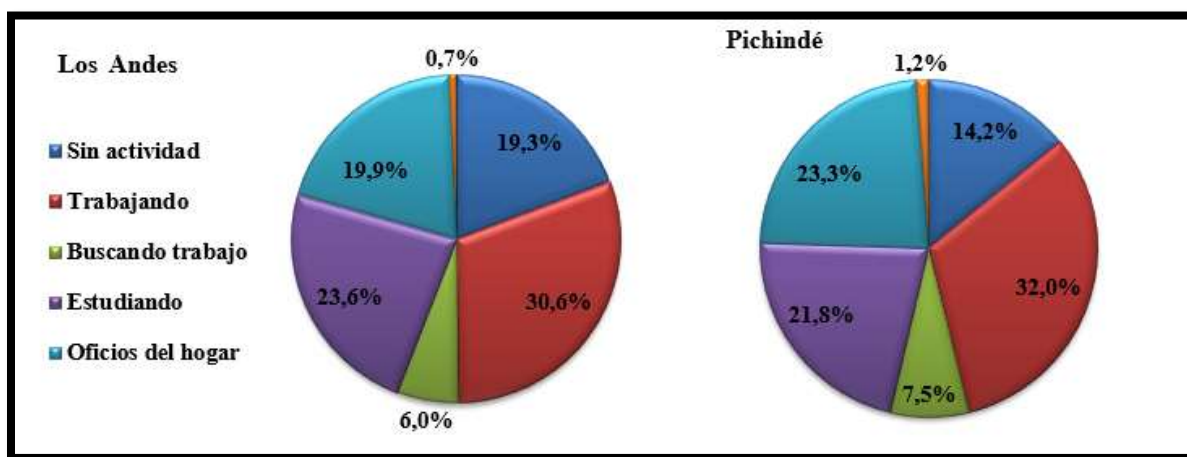
1.3.7 Tipo de Ocupación

Las estadísticas del Sisben 2016 revelan con respecto a la pregunta: ¿cuál fue la actividad realizada la última semana?, que solo el 30,5% de la población de Los Andes y 32% de Pichindé respondieron que estaban desarrollando una actividad generadora de ingresos, o que estaban trabajando. Si se intenta dar un sentido a tal situación es posible contemplar que “una parte importante del campesinado trabaja como aparceros, arrendatarios o en tenencias precarias, que tienen derechos informales de propiedad y no siempre se registran en las estadísticas” (PNUD, 2012, p. 50). Asimismo, el 23,5% de la población de Los Andes y el 21,8% de Pichindé respondió que estaba estudiando, esto último coincide con la alta proporción de población en edad escolar que se asienta en los dos corregimientos.

De la misma forma, se destaca que en el corregimiento de Los Andes, aproximadamente, el 70% de la población dice no realizar alguna actividad que genere ingresos económicos al hogar, en este estimado se encuentran las personas que se dedican a los oficios del hogar (19,9%), los que no realizan ninguna actividad (19,3%), los que están buscando trabajo (6%) y las personas que se encuentran estudiando (30,5%), éstos representan más de las tres cuartas partes de la población. En Pichindé la población que no está generando ingresos constituye el 45,1% (Véase gráfico 6).

Los anteriores datos nos permiten percibir una realidad que se repite en diversas zonas rurales de nuestro país, y es que el Estado desde tiempos inmemoriales tiene una presencia diferenciada, representada en necesidades básicas insatisfechas y sobre todo en el afianzamiento de un conflicto interno que hasta nuestros días sigue afectando a las comunidades campesinas. Hacernos una idea del estado en que se encuentra parte de la población rural en Cali, con base en los datos estadísticos presentados por el Sisben, corre el riesgo de que no sea clara, pues los cálculos existentes a nivel nacional sobre la población campesina toma como referencia la población “resto”, de ahí que no sean precisos.

Gráfico 6. Actividad que realizó la última semana año 2016



Elaboración propia con datos obtenidos de las estadísticas por vereda del Sisbén III - 2016 Santiago de Cali

1.4 Educación

El corregimiento de Los Andes cuenta con tres establecimientos educativos: Tierra de Hombres, Juan Pablo I y Francisco José de Caldas. Pichindé cuenta con dos centros educativos: José Holguín Garcés, Sergio Cantillo y la Inmaculada. En relación con la asistencia escolar y, de acuerdo con las estadísticas del Sisben 2016, encontramos que en el corregimiento de Los Andes, la población considerada en edad escolar (6 a 10 años) y (11 a 16 años) asiste en mayor proporción a los centros educativos (8,8%) y (8,2%) respectivamente (Véase tabla 2). En Pichindé se repite un patrón parecido en los anteriores rangos de edad, pues 7,4% de los niños de (6 a 10 años) y el 9,1% pertenecientes a el rango de edad de (11 a 16 años) tienen una asistencia escolar notoria (Véase tabla 3).

Tabla 3. Asistencia Educativa en los Corregimientos Los Andes y Pichindé, año 2016

Rangos de edad	Corregimiento de Los Andes			Corregimiento de Pichinde		
	% Total	Sí%	No%	% Total	Sí%	No%
0 - 4 años	10,8	1,4	9,4	7,3	0,7	6,6
5 años	1,1	0,7	0,4	1,2	0,9	0,3
6 - 10 años	9,5	8,8	0,7	8,1	7,4	0,7
11 - 16 años	8,8	8,2	0,6	9,4	9,1	0,3
17 - 21 años	11,6	3,7	7,9	9,9	3,3	6,6
22 años y más	58,2	0,9	57,3	64,2	0,5	63,7
Total	100	24	76	100	22	78

Elaboración propia con datos obtenidos de las estadísticas por vereda del Sisben III - 2016 Santiago de Cali

En el caso de los niños que se encuentran en el rango de edad de (0 a 4 años), la No Asistencia prima sobre la Asistencia, en Los Andes (9,4%) y en Pichindé (6,6%). Tal vez la ausencia jardines infantiles pueda ser una explicación posible de lo anterior. Para el rango de edad de (17 a 21 años) es notorio que es mayor el porcentaje de No Asistencia escolar para los dos corregimientos, Los Andes (7,9%) y Pichindé (6,6%), dicho indicador se relaciona con las escasas posibilidades que tienen quienes se gradúan para acceder a la educación superior, debido a la precaria calidad de la educación rural, pero además a que una buena proporción de quienes inician la formación media no la culminan. En un panorama más amplio a nivel nacional Ocampo (2014) menciona al respecto que:

Mientras que la población urbana de 15 años y más tiene al menos los 9 años de educación obligatoria, la población en zona rural tiene tan solo primaria completa (5,1 años). Si bien la brecha se ha cerrado gracias a los esfuerzos por la universalización de la primaria, el reto es grande en educación secundaria y media, y sobre todo en acceso a educación superior. El problema no es solo en cobertura sino de pertinencia y calidad, para que la educación se traduzca en mayores ingresos, productividad y competitividad. (p.7).

De ahí que el bajo logro educativo en las áreas rurales del país es evidente. El panorama que nos ofrecen Los Andes y Pichindé no dista mucho del análisis de la situación a nivel nacional, que hacen los expertos en campesinado en Colombia.

1.5 Actividades productivas

El área rural de Colombia ha sido uno de los principales ejes sobre los que se ha movido el desarrollo económico del país, sin embargo también ha sido uno de los más olvidados y con mayor atraso. Las actividades rurales se encuentran en un estado de subdesarrollo, estamos frente a un sector rural estancado en el tiempo, cuyo progreso se ha visto paralizado gracias a que no hay diversificación en cuanto a lo que cultiva el campesino, asimismo, la ausencia de políticas claras para atender las necesidades del campo, encuentran un terreno propicio para que no haya iniciativas oportunas que permitan el desarrollo y fortalecimiento del sector rural. Es cierto que hay una creciente actividad minera, y muchos otros servicios de diferente naturaleza, por ejemplo, en los núcleos poblados y en zonas rurales se desarrolla ecoturismo, no obstante, quienes prestan estos servicios y hasta los mismos mineros artesanales se encuentran en peores condiciones que los pequeños agricultores (Ocampo, 2014).

Por otro lado, en los corregimientos de Los Andes y Pichindé, coexisten actividades productivas precarias, pero que aportan a la economía de los hogares, entre las que se encuentran la agricultura, la minería, el turismo y la tala de madera. Absalón Machado (citado por el PNUD, 2012), resalta ampliamente que las economías rurales familiares implementan estrategias pluri activas que les permite incursionar paralelo a la agricultura en otras actividades (la minería, la explotación de bosques, el transporte, el comercio, la pesca artesanal la agroindustria rural, el agroturismo, la venta de servicios ambientales, el cuidado de microcuencas y de los recursos naturales por lo cual pueden negociar pagos con entidades públicas o privadas, las artesanías, y otros) (PNUD, 2012).

Muestra de lo anterior son los corregimientos de Los Andes y Pichindé donde existe diversas actividades de las que los pobladores obtienen recursos, entre los que se encuentra el cuidado de las fincas de recreo, vigilancia, oficios varios, entre otros. Estos últimos desarrollados en Cali y Cristo rey. Ocampo (2014) señala que “el mundo rural abarca desde zonas relativamente desarrolladas y con una fuerte articulación con ciudades grandes e intermedias hasta otras extremadamente pobres, generalmente en las regiones más apartadas del país” (p. 6), es decir, que los corregimientos de estudio presentan estas características ya que poseen una fuerte dependencia de Cali por su cercanía.

Es así que podemos decir, que el campesino de nuestro tiempo, por lo menos en Colombia, ha podido hacerle frente al contexto hostil y a las múltiples adversidades que se presentan ante un Estado ausente en el sector rural, gracias a que ha diversificado sus fuentes de ingresos, dicha capacidad de diversificación ha abierto oportunidades en los mercados. Cabe resaltar, que los consumidores urbanos cada vez tienen mayor conciencia del valor del trabajo de las comunidades rurales (PNUD, 2012).

En los corregimientos de Los Andes y Pichindé la agricultura es desarrollada sólo por algunos pobladores de la zona, de forma no tecnificada y principalmente para el autoconsumo. De

acuerdo con el PNUD (2012) los cultivos que se pueden considerar “*predominantemente campesinos*”, son los que se desarrollan con la participación activa del campesinado, requieren de personal numeroso y además se caracterizan por realizarse bajo una estructura familiar. Lo anterior no dista de lo que sucede en los corregimientos mencionados, pues en las fincas o parcelas donde se desarrolla la agricultura a pequeña y mediana escala existe participación de los miembros del hogar en actividades como siembra y recolección de los cultivos.

Los corregimientos de estudio se han distinguido por ser comunidades agrícolas, en un principio y de acuerdo con las versiones de los pobladores en la zona se comenzó cultivando principalmente mora, café y tomate de árbol. Estos productos eran comercializados en la ciudad de Cali para la compra de insumos de la canasta básica familiar; con el tiempo se comenzó a cultivar también hortalizas, plantas medicinales (orégano, tomillo) y aromáticas utilizadas para el autoconsumo familiar y también para la comercialización. En la actualidad se siguen manteniendo este tipo de cultivos, pero además se han sumado otros como el de aguacate, lulo, frijol, plátano, maíz, naranja, limón, arveja y repollo. De igual forma, en algunos sectores de estos corregimientos se están incorporando cultivos de flores como los girasoles y las heliconias.

De los productos agrícolas cultivados en los corregimientos de estudio para el año 2016, se destacan principalmente el mango, plátano, maíz, cilantro, guayaba, cebolla, yuca, café, naranja, limón, ruda, aguacate, frijol y mandarina. Los cuales se cultivan en sectores como Los Andes cabecera, Pueblo nuevo parte alta, Pueblo nuevo parte baja, Pichindé cabecera, el Castillo, el sector del cementerio, los Alpes y en Lomas de la Cajita (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018). Estas estadísticas nos proporcionan un panorama más amplio de todos los productos que se cultivan en la zona rural, pero es necesario tener en cuenta que en nuestro país el “modelo tecnológico definido para la agricultura comercial tiende a excluir al campesinado, porque su organización social y cultural no le permite gestar rápidamente las transformaciones productivas esperadas”. (PNUD, 2012, p. 42). Es por ello que la mayoría de los cultivos que hay en estos corregimientos no cuentan con un gran desarrollo industrial ni tecnificación requerida para entrar a competir en un mercado más grande, sumado al hecho de que muchos de sus productos son utilizados para el autoconsumo, minimizando su papel en el desarrollo económico principalmente de su región como del mercado global.

La minería, ejercida en las minas El Socorro o Alto del Buey no cuenta con permisos de explotación por encontrarse dentro de un Parque Nacional Natural, se desarrollada en paralelo con la agricultura, generando diversas problemáticas de carácter social. Ocampo (2014) especifica que “la minería ha entrado en conflictos con las actividades agropecuarias, en especial por el uso del agua, pero también del suelo y de la mano de obra. Mientras las dos primeras deben considerarse como estrictamente negativas, la última es positiva, ya que jalona los ingresos de los habitantes rurales, aunque reduce la competitividad de la producción agropecuaria.” (p.11). En los corregimientos de Los Andes y Pichindé, algunas familias consideran rentable la actividad minera para la economía, pues se obtiene ingresos de manera más rápida.

En cuanto al turismo, destacamos en estos corregimientos, el recorrido que se realiza al sector conocido como Peñas Blancas, específicamente la visita a la peña que hace parte de la ruta del Sendero Ecológico del PNN Farallones de Cali. Estos recorridos son organizados por un grupo ecológico, del que hacen parte algunos miembros de la comunidad, que está autorizado por las entidades ambientales. Tiene un costo de treinta mil pesos por persona y en el caso de que sea un grupo de más de diez personas, el valor se reduce a diez mil pesos por cada uno. Al río Pichindé llegan grupos grandes de turistas, pues es el sitio de encuentro de bañistas, que suben a disfrutar del paisaje natural que este sector les ofrece. Los negocios de la zona se benefician de la visita de los turistas a quienes se les ofrecen desde almuerzos hasta productos de tienda, bebidas alcohólicas y juegos de billar.

Con respecto a la tala de madera, se conoce que en un principio se utilizaba para la sobrevivencia de la población, la construcción de viviendas y la comercialización. Después de la declaratoria de Parque Nacional esta actividad fue prohibida por el daño provocado al ecosistema. No obstante, actualmente, algunos pobladores talan madera de forma ilegal para comercializar como material de construcción de casas y enseres. Esta es una actividad rentable por la alta demanda que tiene en la zona y en la ciudad.

1.6 Actividades Culturales y de Esparcimiento

Situar a los corregimientos de Los Andes y Pichindé en medio del PNN Farallones implica entender la cotidianidad de una población rural amarrada a una serie de tradiciones que influyen en los modos de recreación o esparcimiento de sus pobladores. En el deporte encontramos una de las principales actividades orientadas a la recreación, pues en Pichindé y Los Andes cada cuatro meses se hacen campeonatos de fútbol donde participan todas las veredas de estos corregimientos y también algunos equipos de Cali. El tiempo de duración de estos eventos es de aproximadamente tres meses. Asimismo, las gallerías abren sus puertas cada 15 días para que sus clientes hagan sus apuestas. En voces de algunos pobladores, estas apuestas van desde cien mil hasta los 2 millones de pesos. Cuando se trata de ingerir licor hay distintos establecimientos que prestan este servicio, desde pequeñas cantinas en las veredas, pasando por billares y discotecas. La Fonda de Nicolito y Bávaro, dos discotecas ubicadas en Los Andes y Pichindé, respectivamente, son el punto de encuentro de pobladores que quieren bailar música tropical o simplemente escucharla y departir con otros habitantes del lugar. De la misma manera, los más aventureros se dirigen hasta Felidia, a disfrutar del ambiente festivo, muy popular en la zona, o de los distintos establecimientos de rumba.

En cuanto a las actividades culturales, se sabe que por iniciativa de los líderes comunales, en Los Andes se viene desarrollando el Festival del Agua, realizado el mes de Agosto, desde el año 2016. El principal objetivo de este festival es generar conciencia sobre el cuidado del agua, dada la riqueza de fuentes hídricas en una zona de gran fragilidad ecosistémica. También se busca que haya una apropiación del territorio por medio de actividades que incentivan el conocimiento del mismo. En Pichindé, se realiza el Festival de la Familia, celebrado en un día festivo del mes de

agosto. En este se desarrollan la cabalgata y la verbena popular, los espectáculos principales son el Cerdo Engrasado, el reinado y el concurso del que más beba cerveza. El párroco de la iglesia de Pichindé es quien coordina estos eventos. En diciembre, se lleva a cabo la feria rural y comunera, con la presentación de orquestas y grupos de baile, coordinada por Corfecali.

1.7 Infraestructura vial y formas de movilidad

A pesar de que los corregimientos de Los Andes y Pichindé, se encuentran a tan solo unos minutos de la tercera ciudad más importante del país: Cali, es común escuchar las múltiples quejas de los pobladores por el mal estado de las vías. El tema de infraestructura vial en nuestro país ha estado ligado a fuertes diferencias entre los ciudadanos y el Estado, y es que contamos con un sin número de peajes a precios considerables, cuyos ingresos no se ven reflejados en las mallas viales. Muestra de lo anterior es que para el 2015 del total de redes existentes (204.725 kilómetros), un 69,5 por ciento (142.284) eran regionales, terciarias o rurales; otro 22 por ciento (45.040 km) eran secundarias y un 8,5 por ciento (17.401 km), primarias o autopistas (Periódico El Tiempo, 2015). Para este año, el gobierno nacional expresaba su interés de no dejar a un lado las vías rurales, estas últimos escenarios para la construcción de la paz e indispensables para el movilizar la producción agrícola. Asimismo se habían logrado avances importantes en las mejoras de grandes autopistas de acceso a las ciudades, puertos y aeropuertos.

En contraste, hasta el momento en Los Andes y Pichindé, las mejoras en infraestructura vial que el gobierno planeaba ejecutar en el 2015 no se han hecho visibles. Las vías permanecen deterioradas y las mejoras se hacen por iniciativa de los pobladores o porque algún político en época de elecciones entrega recursos de la campaña para dicho propósito a cambio de votos.

Trasladándose a los datos puntuales, Los Andes cuenta con 20.663 km de malla vial. Asimismo, tanto Los Andes como Pichindé tienen una vía parcialmente pavimentada deteriorada por sectores. En la actualidad, está en proceso de licitación el pavimento en asfalto del proyecto denominado Vuelta de Occidente. Las vías internas de Pichindé están habilitadas con huellas vehiculares en hormigón en la vereda Loma de la Cajita y también en sectores como la Esmeralda, el Castillo, el Caney cabecera, sector Cementerio y Cabecera sector la Florida. Como vemos, en los corregimientos en cuestión prima el mal estado de las vías, y es que como el Ministerio de Transporte lo señala en Colombia aún contamos con un 24 por ciento de la red vial construida en tierra, un 6 por ciento está pavimentada y el 70 por ciento, en afirmado (Periódico El Tiempo, 2015), es decir, que es una infraestructura vial precaria que no aporta al desarrollo rural.

Fotografía 1: Vía Pueblo Nuevo parte baja



Trabajo de campo, Corregimiento de Los Andes, 27 de noviembre de 2017

Por último, se señala que para llegar a estos corregimientos hay dos formas: una es que se cuente con un medio de transporte propio, generalmente moto porque los que en su mayoría tienen carros son los dueños de fincas de recreo; otra es que se vaya hasta la carrera 10 con calle 10 en el Centro de Cali, al sitio denominado “El Cuadradero”, que abre sus puertas desde las 6:20 de la mañana hasta las 6 de la tarde y se aborde, dependiendo al lugar para donde vaya, un campero (Guala), un bus o una chiva (Ver fotografía 2). Si el destino es Pichindé Cabecera con seguridad se encuentra transporte a cualquier hora del día.

Fotografía 2: Descenso pasajeros del bus Escalera “la Chiva”



Trabajo de campo, Vereda Peñas Blancas, 6 de enero de 2018

Si se quiere ir hasta Los Andes Cabecera o Peñas Blancas, esta última una vereda de Pichindé, la cual es el destino obligado de las personas que suben a las minas, se debe tener en cuenta los horarios de la Chiva (Bus escalera) (9:00a.m, 1:00 y 3:00 p.m.) que es la única que hace recorridos completos. Así las cosas, se puede decir que en cuanto a medios de transporte, los corregimientos de Los Andes y Pichindé, cuentan con una cierta accesibilidad pero que ésta depende del sitio al que se dirija, pues hay veredas apartadas a las cuales sólo es posible llegar caminando, a caballo o en su defecto en moto.

Capítulo II: Actividad minera en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, (PNN Farallones de Cali)

2.1 Breve recuento histórico sobre la minería en el PNN Farallones de Cali

En cuanto a la explotación de oro en el Sector conocido como minas El Socorro o Alto del Buey, se dice que data del siglo XX. Versiones de pobladores de la zona afirman que los españoles y los holandeses se asentaron en las Minas e iniciaron la exploración y posterior explotación de oro. Aún hoy se encuentran vestigios como molinos, rodillos y otros implementos que fueron usados para el procesamiento de material rocoso en dicha época (PNNC, 2011). (Ver fotografía 3)



Fotografía 3: Maquinaria encontrada por Funcionarios de la CVC, Sector Minas del Socorro, año 1985. Tomada de Informe de Recorrido Interinstitucional 2011, PNN Farallones de Cali.

De igual forma, otros testimonios afirman que las minas siempre han sido explotadas. El Ingeniero Civil Claudio Borrero Quijano, conocedor de la historia y defensor de los ejidos de Cali, es vehemente en señalar que los alemanes, “venían desplazados por la guerra de Hitler y Cali les abrió las puertas y les dio refugio en ejidos de la zona de farallones, fueron ellos los que descubrieron la beta y ellos hicieron la mina” (Entrevista, 10 de Noviembre de 2017). Por otra parte, también se señala que la llegada de los alemanes se dio por el boom de los piratas ingleses que robaban el oro a los españoles. Para aquel entonces, América Latina poseía una riqueza incalculable no sólo en recursos hídricos, sino también en oro, de ahí que los alemanes vinieran en busca de este último. Se dice que la familia Valencia, trabajaba para estos extranjeros por ello eran testigos cuando “bajaban de 4 a 10 mulas diarias con oro, ellos eran los arrieros de los alemanes y le subían la comida, herramientas y bajaban el oro” (Entrevista Alonso Rodríguez, 14 de Noviembre 2017).

Ciertamente no se tiene conocimiento de cuánto tiempo duró la explotación por parte de los alemanes en las Minas de El Socorro, sólo se sabe remitiéndose unos años más adelante (1985), que su explotación se realizaba por unas cuantas personas.

En la época que estuve de inspector tuve conocimiento que se ejercía minería ilegal en la zona, pero en ese tiempo no había controles y eran muy poquitos como 4 o 5 personas únicamente, y yo no le veía problema. Los pocos que ejercían esta actividad no eran de la zona, eran caucanos, de Suárez; los del pueblo lo que hacían era alquilarles las bestias para subir la herramienta y la comida. (Entrevista Alonso Rodríguez, 14 Noviembre de 2017).

2.2 Contexto de la Minería en el PNN Farallones de Cali

La minería presente en el PNN Farallones de Cali se ubica en las denominadas Minas El Socorro o Alto del Buey, estas últimas localizadas en la parte alta de los ríos Felidia y Pichindé que son afluentes principales del río Cali en los corregimientos de Pichindé, Los Andes, Felidia y La Leonera en la zona de ladera del municipio de Santiago de Cali (Véase Mapa No 2).

Mapa 2. Ubicación Geográfica: Minas El Socorro o Alto del Buey



Fuente: Diario El País

Se dice que la extracción ilegal de oro, es desarrollada por pobladores que habitan en el territorio de influencia y dentro del área protegida (corregimientos de Pichindé, La Leonera y Los Andes), asimismo, se identifican ejerciendo esta actividad a migrantes de distintas regiones del país (departamentos del Cauca, Antioquia, Quindío, Risaralda y Nariño principalmente).

2.2.1 Identificación de la actividad minera en la zona

Desde que parte importante de la zona rural de Cali fue declarada Parque Natural Nacional, la entidad encargada del control y vigilancia de la minería ilegal ha sido Parques Naturales Nacionales de Colombia, es por ello que desde la jefatura del PNNC, se tuvo conocimiento de la explotación minería ilegal a partir del año 2007.

La Corporación Autónoma Regional del Cauca (hoy del Valle del Cauca) – CVC, en su momento fue la primera autoridad ambiental en visitar el área y encontrar la maquinaria e implementos en un radio estimado de tres (3) hectáreas. Además de la maquinaria, se pudo evidenciar la presencia de un grupo de 25 familias de mineros que desarrollaban de forma alternada la actividad minera, del mismo modo, se rotaban entre los grupos familiares la excavación y el procesamiento del Oro en las quebradas el Socorro y las cabeceras del río Pichindé de manera muy artesanal en los cauces de las quebradas presentes en el sector. Es importante mencionar que este grupo de mineros venía desarrollando sus actividades amparados en un título minero expedido por INGEOMINAS que culminó en años pasados (PNNC, 2011, p. 2).

De igual forma, informaciones recibidas por el PNNC, señalan que quien “heredó” el aparataje así como los vestigios de la actividad minera de vieja data fue el señor Ferney Herrera. Zacarías Hidalgo, ex empleado del señor Herrera, diecisiete años más fue quien se hizo a la “mayor infraestructura, número de máquinas y personal para realizar la actividad de extracción, triturado y lavado del material aurífero” (PNNC, 2011, p. 3).

2.2.2 Acciones adelantadas contra la extracción ilícita de minerales en el PNN Farallones de Cali

De acuerdo con información del PNNC, Dirección Territorial Pacífico, el apoyo interinstitucional llevado a cabo desde 2007 ha logrado un cierto control de la extracción de minerales en el PNN Farallones de Cali. Lo anterior ha permitido que entre 2007 y 2015 se hayan adelantado recorridos de prevención, vigilancia y control de forma esporádica debido a los problemas de orden público. Asimismo, se ha realizado la apertura de procesos sancionatorios ambientales, con cierta dificultad para identificar plenamente a los presuntos infractores. Para este periodo de tiempo, se identificó los primeros campamentos dentro del PNN Farallones de Cali (ver fotografías 4 y 5). A partir de 2015, se instaló el campamento base del PNNC y del Ejército Nacional. También se hizo la identificación y georeferenciación de los socavones, capturas en flagrancia, apertura de procesos sancionatorios ambientales y se evidenció el cambio del proceder de los presuntos infractores.

Fotografía 4. Identificación de campamento del señor Ferney Herrera



Fuente: PNNC, abril 26 de 2012

Fotografía 5. Identificación del Campamento del señor Zacarías Hidalgo



Fuente: PNNC, marzo 27 de 2011

Es importante destacar, que las acciones adelantadas para ejercer control de la minería ilegal, por parte del PNNC, Dirección Territorial Pacífico y su equipo humano, en conjunto con personal del Batallón de Alta Montaña N° 3 Rodrigo Lloreda Caicedo, ha sido de manera continua hasta la fecha. Por ello, desde el 28 de septiembre del año 2015, en la parte alta del río Cali, en las

denominadas Minas El Socorro, se siguen realizando actividades relacionadas con la prevención, vigilancia y control a través de recorridos diarios para verificar y disminuir el impacto a los ecosistemas generados por la explotación ilícita de yacimientos auríferos en esta zona del Parque.

2.2.3 Normatividad Vigente

El PNNC como la entidad encargada del control y vigilancia de las áreas protegidas, recopila las normas y decretos en los que se enmarca su accionar, por ello en el *Informe de la Gestión Desarrollada por Parques Nacionales Naturales de Colombia para controlar extracción ilícita de Yacimientos Auríferos en el sector conocido como las Minas del Socorro o Alto del Buey 2016-2017*, se destaca la siguiente normatividad: La constitución de 1991 es clara en destacar el deber del Estado en torno a la necesidad de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

El Decreto 2811 de 1974 o Código de recursos naturales, establece en el artículo 47 que podría declararse reserva una región cuando sea necesario para la restauración, conservación o preservación de los recursos naturales y del ambiente, definiendo a las áreas de manejo especial como aquellas delimitadas para la administración, manejo y protección del medio ambiente y de los recursos naturales renovables (arts. 308 y ss.)

Según el artículo 329 del citado decreto, el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) tiene la siguiente categoría de manejo:

Parque Nacional: Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas en general no ha sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales y animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se somete a régimen adecuado de manejo (Citado por Fierro, 2012, p. 137).

En la Resolución N°092 de julio 15 de 1968, en su artículo primero se establece que con el fin de preservar la flora, la fauna, el caudal y los ríos, las bellezas escénicas naturales y los yacimientos arqueológicos, se declara el sector Farallones de Cali, zona que se encuentra ubicada en jurisdicción de los municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura, en departamento del Valle del Cauca, como Parque Nacional Natural, por tanto debe preservarse y conservarse.

La normatividad vigente que hace posible la prohibición de la minería en el PNN Farallones de Cali está sustentada en los decretos Decreto 1076 de 2015, en el cual se especifica que se prohíbe cualquier actividad que pueda generar a daños al medio ambiente. Se completa como tal el uso de sustancias tóxicas, de explosivos y el desarrollo de actividades agropecuarias o industriales incluidas las hoteleras, mineras y petrolera entre otras. Asimismo la Ley 685 de 2001 del código

de Minas, es su artículo 34 señala cuales son las zonas excluibles de minería en el territorio colombiano.

La Ley 599 de 2000 código penal Colombiano, en los artículos 338, 337 y 331, establece primero las sanciones a los que se hacen acreedores (prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes) quienes desarrollen explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales que provocan daños a los recursos naturales o al medio ambiente. En segundo lugar se contempla que quien invada áreas de especial importancia ecológica incurre en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por otra parte, el incumplimiento de la normatividad existente y la generación de daños en los recursos naturales en las áreas protegidas tiene una sanción de prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2.4 Actualidad de la minería ilegal en el PNN Farallones de Cali

Proponernos indagar por la actualidad de la minería ilegal en los Farallones de Cali nos llevó a hacer un rastreo de la prensa digital. Con las noticias de periódicos como El Tiempo y El País, reconstruimos lo que está pasando en la zona. Asimismo, la información aportada por PNNC Dirección Territorial Pacífico, contribuyó a bosquejar esa realidad latente en las montañas de los Farallones.

Al realizar esta tarea, los hallazgos que saltan a la vista, en un primer momento es que si bien es cierto que la minería ilegal ha estado vigente en el Valle del Cauca, es sólo hasta el año 2011, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle ordena al ex alcalde Jorge Iván Ospina cerrar en un plazo de 48 horas las minas ilegales presentes en los Farallones.

Para el 2011, la administración de Ospina realizó distintos operativos con el fin de hacer frente a la minería ilegal que colocaba en riesgo la calidad del agua de la ciudad; dichos operativos fueron adelantados por la administración municipal en compañía, de hombres del batallón de alta montaña, funcionarios de la CVC, Ingeominas, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y Policía (Ver fotografía 6). Con el cierre de 40 socavones que se encontraban en las cuencas de los ríos Pichindé y Felidia, se comenzó un proceso de intervención con las distintas entidades, que permitió no solamente la identificación de aquellos que se encontraban desarrollando la actividad minera, sino también la judicialización de los mismos. Las noticias registran, que desde Procuraduría ambiental se señala la existencia de las minas El Socorro o Alto del Buey desde finales del siglo XIX (1890); de sus viejos socavones, ubicados en la parte alta de Felidia y la Leonera, se ha extraído oro informalmente, pues no se cuenta con la autorización de Ingeominas ni del PNNC .

Fotografía 6. Desmonte de campamentos en compañía de Ejército y PNNC



Fuente: PNNC, mayo 1 de 2012

A pesar del cierre de bocaminas, llevado a cabo durante el 2011, estas acciones resultaron ineficaces, pues poco después de los cierres, los mineros volvieron abrir los socavones, así como nuevos frentes de explotación. Se resalta, entonces, que la problemática de la minería ilegal en los Farallones de Cali, resulta difícil de tratar porque las condiciones agrestes del terreno no permiten un control policial adecuado, asimismo fuentes oficiales afirman que en la zona operaban algunas mafias y grupos guerrilleros, que controlaban la explotación ilegal de oro.

Para el año 2014, El Tiempo y El País resaltan la vigencia de la minería ilegal en los Farallones de Cali. Jaime Celis director de PNNC Dirección Territorial Pacífico señalaba, para ese entonces, que en las inspecciones realizadas en los Farallones en septiembre de 2014, se había encontrado 61 socavones activos y 13 campamentos móviles con capacidad para 500 personas cada uno. Se visibilizó el daño ambiental por el uso de materiales altamente contaminantes como el cianuro de sodio, el cual estaría siendo depositado en la cuenca del río Felidia que desemboca en el río Cali. Según algunas fuentes consultadas en la zona por los diarios, presuntamente era arriesgado salir en la noche porque circulaban hombres armados. Para estas mismas fechas, se comenzó a notar la llegada de hombres foráneos en busca de oro, esto último se venía presentando de forma esporádica desde hace cinco años atrás.

Es importante destacar que para el 2014, se decía que aproximadamente el 71% de la reserva del PNN Farallones de Cali habría sido apropiada por particulares, y desde el Supernotariado se pretendía recuperar estos predios. Esta problemática se desencadenó a raíz de la desaparición del

Instituto Municipal de Reforma Urbana y Vivienda (Invicali) el cual regulaba y tenía a su cargo cuatro zonas de la reserva en los Farallones. Invicali cedió predios a particulares en los años noventa, lo cual generó impactos y afectaciones al medio ambiente. Diversas entidades reunidas en audiencia pública buscaron dar solución al problema de la tenencia de la tierra que existe en los Farallones, así como también al problema de la minería, por ello se planteó la necesidad de unir esfuerzos a través diversas dependencias de la Alcaldía para realizar una intervención no sólo en los asentamientos con población vulnerable, sino también en la cuestión de desalojos y en la restitución de predios, debido a que existen grandes terratenientes en la zona que están afectando el Parque. Por otra parte, se planteó que algunos predios que eran de Invicali pasarán a la dirección de recurso físico de la Alcaldía mientras se determinaba si esas tierras pasaban a manos de Parques Nacionales.

En medio de la discusión sobre la minería ilegal en los Farallones, se destaca la implementación del proyecto de la Vuelta Occidente, la cual busca unir 5 corregimientos de la zona rural de Cali, incluyendo actividades de ecoturismo y sedentarismo pero sin tener en cuenta el impacto que podría generar al área protegida del PNN Farallones de Cali. Ante lo anterior, la Secretaría de Infraestructura señala que para la realización de este proyecto se están llevando a cabo los estudios necesarios. El PNNC plantea que la construcción de estas vías puede facilitar el acceso a los mineros.

Actualmente, se cuenta con un batallón de alta montaña a 50 kilómetros de Cali y 3.400 metros sobre el nivel del mar en el sector de las minas de El Socorro o Alto del Buey (Ver fotografía 7), el cual tiene como misión la preservación del PNN Farallones de Cali y evitar que se ejerzan actividades de minería ilegal así como también la entrada de grupos armados. En el marco del posconflicto y con la presencia militar, en la zona rural de Cali menguaron los conflictos relacionados con los grupos armados, pero se desencadenó la problemática de minería ilegal, la cual está generando un gran impacto ambiental. Además de la unidad militar también se cuenta con un proyecto de 35 guardabosques contratados por el PNNC y el DAGMA entre los cuales participan ex mineros.

Fotografía 7. Campamento base Batallón de alta montaña



Trabajo de campo, visita a las minas enero 13 de 2018

De acuerdo con el director del PNNC Dirección Territorial Pacífico, la lucha contra la minería ilegal actualmente ha permitido una reducción del 95% de la explotación de oro en las minas el Socorro o Alto del Buey. Por su parte la comunidad menciona que la minería intensiva ha alterado sus rutinas y economías, la tranquilidad de la zona también se ha visto afectada por las muertes que se han generado a raíz de esta actividad. PNNC todavía recalca la alarmante situación por la ocupación de los predios, ya que por la falta de control existen más de setenta títulos de propiedad que puede que no sean legales, pero que de igual forma brindan derechos.

A la fecha se habla de puestos de control para el acceso al Parque, donde se prevén puestos fijos que eviten el ingreso de mineros e insumos para esta actividad. Uno de los proyectos que se plantea es una base militar y una estación científica con espacios para los guardabosques que tendría un costo de cuatro mil millones de pesos. Una de las cuestiones importantes a tener en cuenta es que a pesar de que se han realizado capturas y puestas a disposición de la fiscalía, hoy persisten problemas con la política ambiental, pues a pesar de que la minería ejercida en los farallones es ilegal solo constituye un delito ambiental y este último no tiene sanción de cárcel.

Con el fin de frenar la minería ilegal, actualmente se comenzó con la construcción de un puesto de carabineros de la policía, en el lote el Arbolito en las afueras de Pichindé. Este proyecto ha sido rechazado por los habitantes, y diversos líderes de la comunidad dicen que el control de la minería está siendo ejercido por el Ejército a través del batallón de alta montaña en la zona de las minas El Socorro, por lo cual no ven necesario la construcción de este puesto, han cuestionado las verdaderas intenciones detrás de este proyecto. Esta obra se encuentra suspendida por el DAGMA mientras se aclaran las dudas de la comunidad.

La construcción del puesto está estimado en mil cuatrocientos noventa millones de pesos, el cual no sólo tendrá carabineros de la policía, sino también personal del Dagma y del PNNC. La ubicación del puesto de control se propone sea en una zona estratégica, con el fin prevenir y mitigar la minería ilegal, así como también el comercio ilícito de fauna y flora. Según el Consejo

de Cali esta obra no debe ser consultada con la comunidad, por lo tanto debe continuar, pues está en juego el medio ambiente. Este último, es el argumento que utiliza el alcalde Armitage para no ceder a las demandas y peticiones de la comunidad. Por su parte, algunas versiones afirman, que las personas interesadas en que no se construya el retén son una minoría, que tiene intereses en la minería ilegal, la comunidad, responde que entre ellos no hay mineros, sino campesinos que han sido atropellados en sus derechos, y la posible construcción de un puesto de control cerca de las viviendas daría pie a situaciones de confrontación entre las autoridades y la comunidad.

Así las cosas, para septiembre de 2017, los habitantes de la zona rural de Cali, se manifestaron con el bloqueo de la vía, impidiendo la entrada al PNN Farallones de Cali, en el sector conocido como el Arbolito, en chivas y con pancartas exigiendo que se les permita su labor. Según algunos manifestantes están en contra del establecimiento del puesto de control y piden que se les permita labores de minería, entre estos manifestantes existen personas que llegan de otras regiones.

En las últimas tres alcaldías se han aplicado controles y diversas intervenciones a la minería ilegal, el puesto de control es uno de ellos. A mediados de mayo de 2017 se anunció también el establecimiento de puestos itinerantes por parte de la policía y el ejército, pero estos puestos fueron suspendidos desde finales de mayo debido al plan pistola contra la policía ha anunciado por el “clan del golfo”. En estos diarios, se registra que a pesar de las distintas acciones para frenar la minería ilegal, ésta última sigue activa, y es ejercida por personas foráneas. Asimismo, se especifica que habitantes de la zona recurren a la minería para generar ingresos, sólo que ahora el modo de extracción varía, pues ya no se tritura la piedra en la mina, sino que se transporta a otro lugar donde se hace dicho procedimiento. Otro punto a recalcar, es la estancia de los mineros en los campamentos, pues ahora el tiempo es más reducido, uno o dos días a lo sumo.

En versiones del PNNC Dirección Territorial Pacífico:

En la actualidad las actividades de minería ilegal se presenta en dos modalidades aclarando que en ambos casos la extracción del material rocoso de los socavones se realiza mediante el uso de explosivos (algunos de uso privativo de las fuerzas militares) o con herramientas de mano (porras, cinceles, barras, etc...): la primera requiere del empleo de maquinaria (principalmente motores y cilindros de balines) que instalan y operan para moler la piedra y extraer el oro amalgamado con mercurio, durante horas de la noche y ocultan durante el día entre el bosque o enterrados en socavones que cubren con plásticos, piedra y arena, mientras los mineros duermen por turnos dentro de algunos socavones; la segunda modalidad consiste en bajar el material rocoso a lomo de mula o hombre en “morrales” improvisados contruidos a partir de costales de fibra a los cuales les instalan unas tirantas, desde las Minas del Socorro hasta Peñas Blancas, lugar desde el cual es desplazado a sitios como Suárez en el departamento del Cauca, en donde se realiza el procedimiento de (molienda) del material rocoso para la extracción del oro regularmente a través de métodos químicos (mercurio y cianuro). Al respecto y de acuerdo con la información registrada por Parques Nacionales, en la mayoría de los casos el material rocoso extraído de los socavones es trasladado desde las minas a diferentes sectores del Parque (aún sin identificar) a lomo de mula o humano para luego ser triturado e incluso se tiene versiones

que indican que lo trasladan al municipio de Suárez- Cauca en vehículos a los cuales la fuerza pública viene haciendo seguimiento. (PNNC, 2017).

2.3 Actores: Mineros, Campesinos y Mujeres

La actividad de minería ilegal presente en el PNN Farallones de Cali, involucra por un lado a aquellos que han trabajado directamente en las minas El Socorro o Alto del Buey, los mineros, resaltando que estos últimos desarrollan paralelamente otras actividades como la agricultura, a campesinos, quienes se han dedicado plenamente al campo pero siempre han sabido de la existencia de las minas y por ello de la explotación de las mismas. Cabe aclarar, que para el interés de esta investigación los campesinos aquí contemplados pertenecen a los corregimientos de Los Andes y Pichindé. Por último, se tiene en cuenta a las mujeres, que en versiones de informantes, en ocasiones han replicado las labores domésticas en las minas.

2.3.1 Mineros

Chepe, minero de los Farallones, relata que en su última noche en las minas, a un compañero se le vino la montaña encima y la embestida fue tan fuerte que éste perdió la vida. El gran impacto que le causó este suceso lo hizo considerar no volver a trabajar a este sitio. Cuenta, que en este páramo las condiciones climáticas son tan extremas, que la primera vez que subió a las minas se le vino la sangre por la nariz y el frío le caló hasta los huesos, y es que a más de tres mil metros sobre el nivel del mar, las bajas temperaturas hacen estragos.

En las minas El Socorro o Alto del Buey en un primer momento se pudo identificar tres perfiles de mineros: el dueño del montaje, quien en alguna etapa de su vida fue minero de socavón y que en su afán de obtener más ganancias abrió su frente de explotación y empleo a otros, garantizando las condiciones e insumos para la trabajo en las minas; también el minero de socavón, quien se adentraba en los túneles para extraer la roca de la que se obtiene el oro; y por último el arriero que transportaba la roca hasta los molinos donde era triturada y procesada (Ver fotografía 8), éstos últimos sólo invertían su fuerza de trabajo. Ahora, solo se puede identificar al minero de socavón, éste ya no depende de un patrón y todo lo que obtiene es para es para su beneficio. La autogestión es su principal instrumento de trabajo.

Fotografía 8: Transporte de material rocoso



Fuente: Parques Nacionales Naturales de Colombia, Dirección Territorial Pacífico

De igual forma, se ha identificado que los mineros que practican minería ilegal en el PNN Farallones de Cali provienen de diversas regiones del país, asimismo, las edades varían, se pueden encontrar desde niños hasta adultos de la tercera edad. Los primeros en compañía de sus padres aprenden del oficio para luego insertarse a las filas de hombres que obtienen su sustento de la minería ilegal.

2.3.2 Campesino de Los Andes y Pichindé

El campesino de Los Andes y Pichindé, sin lugar a dudas, siempre ha estado en tensión constante por reivindicar su derecho a la tierra, y es que desde que los primeros pobladores llegaron a esta zona rural han cargado con el estigma de ser ocupantes ilegales de tierras consideradas en un primer momento reserva natural y posteriormente Parque Nacional, de ahí que la actividad campesina esté sometida a las restricciones que implican encontrarse dentro de la jurisdicción de un Parque Nacional Natural. Es por ello que la ganadería es nula o inexistente en la zona.

Los campesinos tienen posesión de sus tierras pero no son dueños de ellas, algunos ni siquiera tienen títulos y otros tantos han sido desalojados por ser nuevos pobladores que compraron predios de forma irregular. A los que se les ha respetado su derecho de posesión es a aquellos que han heredado sus tierras y por ende sus parientes se encontraban en la zona antes de ser declarado Parque Nacional Natural. Asimismo, han tenido que sortear la presencia débil del Estado representada en la carencia de servicios de saneamiento, por lo que la autogestión de los campesinos ha permitido que servicios básicos como energía y agua, en algunos momentos establecimientos educativos, sean resarcidos por los mismos pobladores.

Por otro lado, es posible afirmar que nos encontramos ante un campesino que ha vivido una especie de transición, pues en sus inicios éstos obtenían su sustento directamente de lo que cultivaban, vendían sus cosechas y las ganancias adquiridas de ellas iban en beneficio del hogar, otra parte se reinvertía en la siembra de productos para el consumo y la venta. Ahora mismo, encontramos un campesino que demanda servicios de la ciudad, a tal punto que productos que pueden ser cosechados en la zona son comprados en Cali, encontramos un campesino que no ha

fomentado la expansión de sus cultivos, lo que quizá haya impulsado la inserción de éstos a empleos en los que se pagan a jornal. Sin embargo, hablar del campesino tradicional, por lo menos en la parte alta de veredas como Pueblo Nuevo, es asociarlo con un arraigo a la tierra, pues lo que se siembra busca generar el menor impacto posible en el medio ambiente. Por ello, es común escuchar que no se aplican químicos a los pocos productos que se cultivan, buscando que éstos sean naturales.

Don Jesús, un hombre de un metro con cincuenta y cinco cm (Ver fotografía 9), es el ejemplo del campesino de Los Andes y Pichindé. Migró del Cauca a la parte alta de Pueblo Nuevo, vereda de Los Andes. Su madre, doña Salomé Collazos, se había trasladado hasta esta zona rural del municipio de Cali, para junto con sus hermanos trabajar la tierra y dar sustento a sus hijos. Según testimonios doña Salomé y sus hermanos eran dueños de parte importante de la vereda Pueblo Nuevo.

Vivo en la zona hace más de 50 años, yo conozco acá desde que tenía 6 años, que me traían al batallón, al campamento del batallón Pichincha y me dejaban con mi abuelo. El general Velasco fue quien le vendió a mi papito y mi familia se vino para acá, porque mi papito compró y pues les dejó herencia a los hijos y pues nos vinimos (Entrevista Jesús, 30 de Noviembre de 2017).



Fotografía 9: Recuperada en trabajo de Campo. Don Jesús, Vereda Pueblo Nuevo Parte alta Corregimiento de Los Andes, año 2007

Desde muy pequeño don Jesús fue criado en las labores del campo, sus familiares le enseñaron a cultivar la tierra como una forma de subsistencia, también trabajó durante algunos años en el Ingenio Manuelita como cortero de caña. A sus 23 años contrajo matrimonio con doña Isaura Salas con la que formó un hogar con 9 hijos. Se independizó en un terreno que le heredó su familia en la vereda Pueblo Nuevo, donde construyó su vivienda y se ocupó de cultivar la tierra. En su parcela se dedicó a sembrar principalmente mora y café para comercializarlos en la ciudad

de Cali en la Galería Alameda, asimismo sembraba algunas hortalizas como cebolla, orégano y tomillo, utilizadas principalmente para el autoconsumo.

Durante la semana, de lunes a jueves se dedica a recoger la cosecha de café y mora. Su día comienza muy temprano y termina con la puesta del sol. Los jueves en la noche baja su carga en caballo hasta donde aborda el transporte, a una hora de camino. El día viernes aún de madrugada se embarca en la primera Chiva (bus escalera) que lo lleva a la ciudad para vender sus productos. Con las ganancias que obtiene de sus ventas compra víveres para llevar a su casa, principalmente carnes, legumbres, cereales y aceites. Desde muy pequeño le enseñaron el cuidado de su territorio y las buenas prácticas agrícolas, por ello, sus cultivos siempre se caracterizaron por ser naturales, los abonos que utiliza los hace con los desechos de cáscaras de algunas frutas, y hasta ahora no permite que en sus tierras se utilicen productos químicos para sus cultivos.

2.3.3 Mujeres

En las minas El Socorro o Alto del Buey la presencia de las mujeres se daba por el parentesco con los mineros. Según testimonios tanto de mineros como de pobladores de la zona, las primeras mujeres que subieron a las minas eran compañeras sentimentales, hijas, primas, sobrinas o hermanas de los hombres que laboraban ahí. Se dice, que lo agreste del terreno implicaba que no cualquiera pudiera ir, primero porque ya se habían establecido unos campamentos con sus jefes al mando y segundo porque al ser minería ilegal existían restricciones por parte de las autoridades.

De igual forma, uno de los requisitos fundamentales que las mujeres debían cumplir para subir a las minas era saber cocinar, pues testigos especifican que las mujeres eran contratadas con un sueldo fijo para cocinar a los mineros durante su estadía en los campamentos. Cabe aclarar que esta dinámica de reproducción del rol doméstico en las minas por parte de las mujeres, data de la época donde se establecieron los grandes campamentos con capacidad para más de cien trabajadores. En contraste, actualmente al no existir los campamentos y reducirse el tiempo de estancia como consecuencia de controles implementados por autoridades ambientales, los mineros optaron por subir en pequeños grupos distribuyendo entre ellos las labores de la cocina. Es posible que lo anterior sea una de las causas del por qué el rol de las mujeres ha cambiado en esta actividad pues ahora, según versiones recogidas en el trabajo de campo, las mujeres suben a las minas específicamente a la extracción de oro. De acuerdo con el testimonio del señor Pedro, dueño de montaje y minero por varios años en las minas El Socorro o Alto del Buey:

Las mujeres que habían eran, la mujer de don Zacarías, las mujeres eran cocineras de los manes que trabajaban allá, cuando empezó la temporada que se torió el oro, ellas ya querían era sacarnos de los trabajos buenos, donde pintaba el buen oro, para allá se iban ellas, la mayoría eran de la familia de don Zacarías (Entrevista Pedro, Enero 25 de 2018).

En el tiempo de los grandes campamentos, existieron algunas excepciones, en cuanto la labor de las mujeres en las minas, pues se sabe de mujeres que estuvieron dentro de los socavones picando, las cuales pretendieron hacerse a los mejores puntos de trabajo. Estas mujeres tuvieron

estos alcances porque eran hijas del dueño de uno de los campamentos más grandes de la zona. Así lo evidencia Edier, minero por más de 10 años en los Farallones:

En la mina también hay mujeres y bastantes, hay hasta piqueras que trabajan desde antes que se podía trabajar tranquilamente, no solo iban a cocinar sino también a trabajar en la mina. El señor Zacarías, tuvo hijas, sobrinas y nietas trabajando en las minas (Entrevista Edier, Diciembre 1 de 2018).

Lo mencionado por Pedro, destaca una particularidad de la participación de las mujeres en las minas El socorro o Alto del Buey, pues algunas de éstas lograron transformar su rol desempeñándose como piqueras, situación que difiere de otras explotaciones mineras donde las mujeres son relegadas y discriminadas, como se señaló en el estado del arte.

2.4 Presencia de grupos ilegales en el territorio

El departamento del Valle del Cauca, ubicado en el suroccidente del país, compuesto por 42 municipios, como muchas otras regiones han sufrido el impacto del conflicto armado.

En principio, las guerrillas encontraron en este departamento una geografía montañosa que les permitía una conexión con el Pacífico –el puerto de Buenaventura–, donde hacerse a recursos para la guerra, ocultarse de sus enemigos potenciales, y ocultar a sus rehenes, debido a que el secuestro era una de sus principales fuentes de financiamiento. Posteriormente, finalizando los años noventa y comenzando la primera década del siglo XXI, incursionaron los grupos paramilitares, en respuesta al crecimiento y fortalecimiento de la guerrilla, con lo que se agudizó el conflicto en el Valle (Acosta, 2012, p.1).

La localización geográfica del Valle lo hacía un sitio estratégico para el accionar de estos grupos, pues llegó a convertirse en territorio de disputa por ser un corredor clave, militar y económico, en especial para el narcotráfico. Por otro lado, con respecto a la presencia de las FARC en el Valle del Cauca, el Observatorio de Derechos Humanos (citado por Acosta, 2012), señala que las FARC operaban en la región a través de varias estructuras que hacían parte del Bloque Occidental o Comando de Occidente. Asimismo el accionar del ELN se ha registrado por medio del Frente de Guerra Suroccidental.

Para la parte alta de la zona rural de Cali, no hay un momento más decisivo que el secuestro de los 12 diputados del valle. Para el 2002 el frente Arturo Ruiz de las FARC operaba en el territorio y fue éste el encargado de ejecutar el secuestro de los diputados. Se dice, que la guerrilla de las FARC se habían hecho al dominio del sistema montañoso de Cali, así pues instalados en campamentos coordinaban y controlaban no solamente el narcotráfico sino también la minería y los secuestros que se realizaban en el Cauca y el Valle. Pichindé fue al primer sitio a donde llevaron a los 12 diputados, por la vereda Peñas Blancas los trasladaron hasta la parte alta de los Farallones para luego ser llevados hacia Nariño. El Ejército, a raíz de lo anterior, comenzó una ofensiva militar en la zona, la cual produjo que la guerrilla abandonara el territorio y que posteriormente se instalarán los campamentos móviles de Parques Naturales y del Batallón de Alta Montaña. Los testimonios de pobladores confirman el accionar de las FARC en el territorio.

El señor Encho, poblador del corregimiento de Pichindé, testigo presencial de los tiempos del conflicto señala al respecto:

... La guerrilla se salió de allí cuando secuestraron a los diputados, que ese fue el mayor error... ellos allá tenían de todo, tenían hospital, en medio de la montaña, criaban gallinas, cerdos, allá llegaron a haber más de mil hombres, canchas de fútbol, ellos tenían todo eso. Entonces qué pasó, eso para ellos era un negocio para la guerrilla, porque ellos cogían la gente... en Cali secuestraban la gente y ellos (secuestradores) se la negociaban a la guerrilla, los traían y los entregaban aquí, la guerrilla cogía toda esa gente y los echaban para allá arriba, cobraban el rescate y los bajaban a la Chiva, y en la chiva bajaban los secuestrados, la gente que no era de por acá... ah esos eran los que tuvieron secuestrados. Más atrás bajaba la guerrilla con la plata a consignarla en Cali, porque esos manes tienen sus cuentas y todo, así como en el narcotráfico.

El peor error de ellos fue secuestrar a esos diputados, porque hasta allí... ahí le metieron el Ejército y todo eso, mire por ejemplo, un ejemplo, anteriormente eso allá habían más de mil tipos. El Arturo Ruiz era un frente, era como un grupo de choque, de las FARC, aquí operaba el frente 30 de las FARC, mire por ejemplo, un ejemplo mandaban una escuadra del Ejército que tuviera por ahí trescientos hombres o 200 hombres y el Mayor decía yo no voy a meter a mis muchachos a que me los maten allá. Sí eso, cuando se formó el mierdero de eso de los diputados, que entraron esos misiles, que los paraban ahí en esa cancha... el fantasma va por encima como él identifica el calor humano, eso allá en las últimas fincas de Peñas, eso allí hubo gente, soldados y gente que los mataron porque esos manes (guerrilleros) estaban por ahí y también de esa gente (guerrilleros) mataron mucha, yo no fui a ver eso porque no me gusta ver eso, pero disque en los árboles quedaban los brazos y todo eso, de la gente que los cogía esas bombas. Entre Peñas Blancas y la Mina, eso fue como en el 2002". (Entrevista Encho, diciembre 1 de 2017).

La aparente calma que se sentía en los Farallones, después de que las FARC abandonara el territorio ante la persecución del Ejército, se disipó poco a poco cuando atraídos por la búsqueda de oro fueron llegando foráneos quienes impusieron nuevas dinámicas económicas. Las versiones de algunos pobladores tanto de Los Andes como de Pichindé, afirman que cuando las FARC dejaron de operar con frecuencia en la parte alta de los Farallones de Cali, personas tanto foráneas como propias del territorio empezaron a subir a las Minas El Socorro con el fin de extraer oro de la tierra. Y es que según los testimonios, las FARC sabían de la existencia de la mina pero no la explotaban. El territorio era utilizado, como ya se mencionó anteriormente, para la estancia, asimismo que al ser un corredor estratégico para el tránsito hacia el Pacífico, constituía un punto clave para realizar múltiples actividades como el secuestro y la extorsión.

A pesar de que se estableció un campamento móvil del batallón de Alta Montaña, la minería, que por aquel entonces empezaba su bonanza, siguió en pie y logró instalarse como una actividad económica a la cual recurrieron pobladores de la zona. El campo, condenado al olvido por muchas décadas, "ha sido, además, del escenario principal del largo conflicto armado" (Ocampo, 2014, p. 1), el sitio propicio para que el narcotráfico y la minería ilegal encuentren eco. Los Farallones de Cali, donde se encuentran asentadas familias campesinas, es ejemplo de lo mencionado. Específicamente en Peñas Blancas y algunos sectores de Los Andes, se sabe que las FARC, en los tiempos del conflicto, lograron imponer un orden local. Valiéndose de la débil

presencia del Estado en esta zona, fueron involucrando en su accionar a algunos pobladores hasta convertirlos en colaboradores.

Ellos se metieron con la gente de Peñas Blancas porque vieron muy vulnerable la gente allá, entonces donde vieron vulnerabilidad comenzaron a apoyar a la gente, a los muchachos que veían vulnerables les daban plata y les decían anda date la vuelta en la chiva, después que tráeme dos cablecitos que necesito, tráeme colchonetas y así los fueron involucrando a muchos y los convirtieron en milicianos de esa manera. La guerrilla con la gente no se metía, pero llegó el momento por ejemplo que las directrices eran como que los muchachos que había tenían que estudiar o ayudar a la mamá o al papá porque no podía haber vagos allá, esa era la ley en Peñas Blancas, Pueblo Nuevo y los Andes. Esas eran las directrices como que no podía haber viciosos, porque de hecho mataron uno, para mostrar que si era verdad que estaban matando los viciosos, en ese sentido el vicio se calmó (Entrevista Joaquín, Enero 4 de 2018).

En lo concerniente a la presencia de los grupos ilegales en el territorio, es importante destacar que algunas versiones señalan a la zona rural de Cali como crucial para el accionar de los grupos insurgentes, pues fue el lugar por donde transitó desde el M-19 (Movimiento 19 de Abril) hasta las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). A través de los siguientes fragmentos, extraídos de las entrevistas realizadas en el trabajo de campo al señor Encho y al señor Alonso Rodríguez, se puede visibilizar dicha situación:

... cuando yo estaba muchacho en el Pato, Carlos Pizarro León Gómez, que fue el máximo jefe del M-19, él estudiaba en la universidad del Valle (Nacional), y él llevaba un poco de muchachos y muchachas allá al Pato y los hacía subir por unas montañas y unas rocas, y el cuento era que él estaba entrenando gente para la Cruz Roja, yo muchacho, yo he sido muy malicioso... un día me levanté como a las 2 de la mañana que ladraban los perros, cuando veo toda esa hilera de muchachos, y les daban dizque un bocadillo y pedacito de queso, y los hacían subir con unas manilas por unos peñascos, esa gente no estaba entrenando para la Cruz Roja, mentira, estaban .entrenando para el M-19” (Entrevista Encho, diciembre 1 2017).

En la zona el ELN y las FARC se rotaban el terreno pero también el M-19, pero en esa época al M-19 no lo querían, lo que es la oficialidad de las FARC, porque los elenos (ELN) y los FARC decían que el M-19 era un movimiento populista, porque la mayoría eran burgueses con ganas de ser revolucionarios (Entrevista Alonso Rodríguez, noviembre 23 de 2017).

A pesar, que no hubo una presencia prolongada y acentuada en los corregimientos de Los Andes y Pichindé de las FARC, si se puede decir que éstos trastocaron el orden social, como ha pasado en otras regiones rurales de Colombia, donde por décadas en conflicto armado ha marcado las dinámicas cotidianas de los pobladores rurales.

Capítulo III: De los cambios Sociales, Económicos y Ambientales

En este capítulo mostraremos los cambios identificados en los corregimientos estudiados. Sin duda, la minería ilegal, como eje aglutinador de cambio, cobra gran significado en la cotidianidad de los pobladores de esta zona rural. Partimos de la premisa de que los foráneos han impuesto nuevas dinámicas económicas que impactaron en las relaciones sociales. No obstante, descubrimos que éstos no fueron los únicos actores presentes en esta problemática, sino que confluyen diversos factores. La frágil presencia del Estado y el traslado de nuevas prácticas mineras provenientes de Suárez-Cauca han contribuido a afianzar las transformaciones que evidenciaremos, en el marco de la nueva ruralidad, a continuación.

3.1 Peñas Blancas a la sombra de la minería ilegal. De la travesía a las minas y otras historias

“Y allá están los Farallones, esas montañas verdes que esconden celosamente riquezas incalculables: ¿oro? ¡No!, flora, fauna, la vida en general”



Fotografía 10. Trabajo de campo, Vereda Peñas blancas

A las nueve de la mañana dejamos atrás la ciudad de Cali para irnos con rumbo a las minas El Socorro o Alto del Buey. Los funcionarios de Parques Nacionales nos trasladaron hasta la vereda de Peñas Blancas, el punto de partida de la travesía a las minas. Nuestras expectativas eran grandes, pues no contábamos con un estado físico óptimo para enfrentarnos al reto de caminar más de seis horas por lo empinados caminos de la ruta a la mina. Éstos que han sido transitados muchas veces por hombres y mujeres en busca del tesoro que esconden Los Farallones de Cali. Desde tiempo atrás se sabe que la vereda de Peñas Blancas es el sitio donde confluyen todos aquellos que suben a las minas. Es posible que durante nuestra estancia allí nos hayamos cruzado con algunos mineros, quienes probablemente en el momento hayan tomado caminos alternos a los que se utilizan regularmente para no encontrarse con los funcionarios de Parques Nacionales y la Fuerza Pública que nos estaban acompañando por la ruta oficial.

Estando en la vereda de Peñas Blancas esperamos por la escuadra de soldados que tenían encomendada la tarea de acompañarnos y protegernos ante cualquier eventualidad (Ver fotografía 11). Aclaramos, que para poder realizar esta visita fue necesario tramitar un permiso ante PNN Farallones de Cali Dirección Territorial Pacífico, pues solo de esta manera se puede subir legalmente a las minas. Tramitar el permiso nos llevó aproximadamente tres meses, pues éste tiene un proceso largo que pasa por múltiples dependencias y entidades del Estado. No obstante, se nos presentó la posibilidad de ir a la mina de forma clandestina con ex mineros de la zona quienes se ofrecieron acompañarnos y a darnos información de primera mano del funcionamiento de la actividad. Decidimos no tomar esta opción, por las implicaciones legales y el peligro que esto representaba, pues se sabe del tránsito no solo de grupos ilegales, sino también de particulares armados en pro de la minería ilegal.

Fotografía 11. Encuentro con soldados del Batallón de alta montaña



Trabajo de campo, visita a las Minas, enero 13 de 2018

Debido a la distancia a la mina y lo agreste del terreno, era poco probable que pudiéramos subir caminando con el equipaje, por ello los funcionarios de Parques Nacionales contrataron el

servicio de muleros⁷ para llevar la carga pesada hasta el campamento que tienen instalado junto con el Ejército, estos últimos también utilizan este servicio para subir sus víveres. Empezamos el ascenso a la mina con la zozobra de lo que podríamos encontrar en el camino, se nos había dicho que el recorrido era largo y que a pie era más difícil, pues generalmente algunos militares y personal autorizado suben a caballo. Durante el recorrido nos encontramos con los primeros campamentos, los cuales en su tiempo había sido grandes montajes con capacidad de albergar hasta cien trabajadores, solo se veían los vestigios de viejas maquinarias y cambuches que ahora pasaban hacer parte del paisaje que adorna los Farallones de Cali. A pesar de los esfuerzos de Parques Nacionales por mitigar los impactos ambientales y desarticular toda la maquinaria inservible y abandonada ha sido imposible evacuar estos elementos; de ahí que sea evidente el impacto que esta actividad ha causado al ecosistema (Ver fotografía 12).

Fotografía 12. Vestigios de maquinaria



Trabajo de campo, visita a las Minas, enero 13 de 2018

Siendo las cinco de la tarde, llegamos al campamento base. Lo primero a lo que nos enfrentamos fueron las bajas temperaturas que cobijan Los Farallones. El campamento se encuentra ubicado en lo que era antes el montaje minero más grande de la zona: el de don “Zacarías”. Desde ahí coordinamos las visitas a los antiguos campamentos y también los recorridos a puntos estratégicos de monitoreo de mercurio en agua y sedimento, lo anterior realizado por una profesional en suelos y aguas autorizada por Parques Nacionales. Durante la noche, tuvimos la posibilidad de conversar con algunos soldados quienes nos contaron sobre la constante tensión de funcionarios y Fuerza Pública con los mineros. Lo que más se resalta de estas conversaciones es la reincidencia de éstos últimos, pues muchos de los que son capturados en flagrancia tienen la habilidad de escaparse cuando son trasladados hacia el campamento base donde son

⁷ Generalmente ex mineros y otros tantos que desde siempre se han dedicado a prestar este servicio a quienes suben a la mina.

individualizados y posteriormente reseñados, poniendo en riesgo sus vidas. Ellos se lanzan por los llamados “voladeros”, que no son más que despeñaderos que desembocan en caminos alejados del control de las autoridades. Asimismo, se resaltan las continuas capturas que se han llevado a cabo durante la estancia específica de este pelotón compuesto por soldados regulares, éstos afirmaban que en el poco tiempo que llevaban habían logrado un mayor número de capturas que los soldados profesionales que habían estado antes en la zona. Esta información se puede asociar a los datos recogidos en campo en los que se afirma una posible complicidad de los soldados profesionales con los mineros.

Sin lugar a dudas, el día más importante de nuestra visita a las minas El Socorro o Alto del Buey fue el lunes quince de enero del 2018, ese día vivimos de cerca la cotidianidad de los recorridos que en ocasiones realizan funcionarios de Parques Nacionales, las condiciones en las que trabajan los mineros y la tensión generada por las capturas de estos últimos. En el campamento base el día comenzó a las cinco de la mañana, se había planeado realizar visitas tanto a campamentos mineros como a sitios de monitoreo de mercurio en agua y sedimento en algunos puntos fijos. Mientras más nos adentrábamos en Los Farallones evidenciábamos el rastro de los desechos y la contaminación que la minería ilegal había dejado a su paso, pues era común encontrarse desde una planta de energía hasta toallas higiénicas. Especialistas en el tema afirman que tratar de evacuar estos desechos y limpiar la zona es un proceso sumamente costoso, que Parques Nacionales no está en capacidad de asumir, por ello aunque se ha avanzado en el desmantelamiento de los campamentos los residuos generados por la explotación siguen contaminando.

Es realmente triste dimensionar de cerca la contaminación que deja esta actividad (Ver fotografía 13). Desde la ciudad observamos montañas verdes y limpias que parecieran respirar vida. Sin embargo, adentrarse en el corazón de estas montañas nos enfrenta a una realidad distante de aquella observable desde Cali. Mirar como las aves y las ardillas se alimentan de la comida desechada por los humanos es un indicador de cómo se ha invadido su hábitat, y cómo éstos han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por el hombre.

Fotografía 13. Desechos de la actividad minera



Trabajo de campo, visita a las Minas, enero 15 de 2018

El primer sobresalto que tuvimos se presentó en el sector conocido como “trasvase”, donde se ve cuán inclemente ha sido el hombre a la hora intervenir la naturaleza, pues perforar una montaña a tal punto de atravesarla para desviar un río, es un acto tan cruel que despoja a la naturaleza de su esencia. Al inicio de la jornada se había acordado que durante los recorridos no se harían ninguna captura, porque lo primordial era salvaguardar la vida de todo el equipo y hacer las actividades que estaban programadas. Las capturas significaban invertir más tiempo en el traslado. Sin embargo, a pesar de lo que se había acordado, en este punto nos encontramos un campamento improvisado en medio de la montaña, fabricado a partir de plásticos y madera. Los mineros, bajo esas condiciones se las arreglaron para armar los molinos con los que trituran la roca que contiene el oro, montar una cocina y adaptar en medio de la humedad viejos socavones como dormitorios. Estos últimos usados por turnos debido a que se buscaba optimizar el tiempo, pues la estancia no podía ser larga por los controles constantes de las autoridades ambientales.

Para nosotras fue de gran de impacto ver las condiciones bajo las que trabajan los mineros, una cosa es ver esta realidad desde afuera, desde lo que se lee en los informes, lo que se ve en las fotos y lo que cuentan las noticias, pero otra muy diferente es ser testigos presenciales de esta realidad. Encontrarlos soportando las inclemencias del clima y sometidos a extensas jornadas de trabajo, no los mostraba como los bandidos que suelen describir los medios, sino más bien los asemejaba a animales acorralados que querían huir a costa de lo que fuera. Así las cosas, a pesar de saber que estaban cometiendo un delito sentíamos una profunda conmoción al verlos en una aparente indefensión que los mostraba vulnerables. Los primeros capturados aquí fueron dos hombres oriundos de Suárez-Cauca, y es que se dice que a los Farallones llegan de esta región del país muchos en busca del metal preciado. En plena molienda de la roca se encontraba David,

el más joven (28 años), mientras don Elkin (50 años aproximadamente) había cocinado y se disponía a comer (Ver fotografía 14).

Fotografía 14. Captura de mineros sector del trasvase



Trabajo de campo, visita a las Minas, enero 15 de 2018

El procedimiento a seguir cuando se capturan mineros en flagrancia es en primera instancia informales a éstos que se encuentran dentro de un área protegida donde se prohíbe la minería, posteriormente se les pide que desmonten todo y se procede a botar la roca triturada, destruir la maquinaria y quemar todo lo que se pueda. A los mineros se les da la opción de tomar sus pertenencias personales como cobijas y ropa, pero éstos solo se quedan con lo que llevan puesto, porque lo demás generalmente está en mal estado. Supimos que en este sitio se encontraban dos mineros más que se fugaron al escuchar los disparos de fogeo que hizo uno de los soldados que nos acompañaban, uno de ellos luego fue capturado.

Partimos del Trasvase hacia la zona conocida como Patequeso, acompañadas de los tres capturados. Un funcionario de Parques Nacionales les explicó a los mineros el recorrido que nos encontrábamos haciendo y que debían acompañarnos mientras terminábamos esta labor, pues no se contaba con el personal suficiente para trasladarlos hasta el campamento base donde serían individualizados. En Patequeso, los soldados ingresaron al socavón y capturaron cuatro mineros, de igual forma se sabía que había muchos más lograron escaparse. En este punto ya eran siete las personas capturadas que nos acompañaban, por ello se pidió refuerzos al Ejército para un mayor control de la situación, pero no se tuvo respuesta.

Se acercaba la noche y devuelta al campamento la lluvia y el intenso frío hacían estragos en todos, de pronto en un voladero uno de los mineros se lanza sin temor y logra escaparse, según los testimonios de funcionarios Parques Nacionales y del Ejército este ya había sido capturado en ocasiones anteriores. Durante el traslado se sintió una tensión constante, los mineros buscaban justificarse ante nosotras y hasta solicitar nuestra ayuda para no ser reseñados. Ante esto

sentíamos una sensación de incertidumbre al saber que estábamos en medio de una situación tan compleja y al mismo tiempo sentíamos la necesidad de ayudarlos en lo que fuera posible. Es que es verdaderamente impactante escuchar sus historias de vida en la que justifican su accionar en la necesidad.

Ya en el campamento base, ante el evidente cansancio y la falta de alimentos, los soldados dieron comida a los mineros. En esta oportunidad, las autoridades trataron dignamente a los capturados. Posteriormente, el teniente a cargo del pelotón procedió a leerle sus derechos y hacer la correspondiente anotación en la ficha de captura a cada uno, de igual forma un funcionario de Parques Nacionales expidió el comparendo ambiental al que se hacen acreedores. Se designó a un grupo de soldados para trasladar a los capturados hasta la vereda de Peñas Blancas donde éstos abordaron un camión del Ejército y fueron transportados hasta el batallón de alta montaña y luego a la Fiscalía donde definieron su situación.

Nuestra estancia en la mina duró cinco días. El día que bajamos llegando a la vereda Peñas Blancas nos encontramos que, para nuestra sorpresa, algunos de los mineros que tanto nos conmovieron, iban de vuelta a las minas. Nos enteramos, que todos fueron dejados en libertad después de haberles realizado el respectivo proceso, algunos salieron libres bajo advertencia por ser capturados por primera vez y a otros tantos se les abrió proceso legal. Muchos de ellos ya habían pagado multas en diversas ocasiones o tenían varias por pagar.

Para nosotras, como agentes externos a la realidad de la minería ilegal presente en el PNN Farallones de Cali, fue una experiencia enriquecedora que superó nuestras expectativas en cuanto a nuestra capacidad de soportar no solo la larga distancia que tuvimos que caminar y las inclemencias del clima, sino también la conmoción que nos causó ver de cerca el grave daño ambiental y las condiciones en las que permanecen mineros, Ejército y funcionarios de Parques Nacionales. Ver como los mineros viven en constante acecho y se someten a condiciones tan extremas nos llevó a preguntarnos cuál ha sido el rol que ha cumplido el Gobierno para evitar que estas personas participen de esta actividad, pues en las conversaciones que tuvimos con ellos supimos que en su mayoría venían del Cauca, otros tantos de Nariño y en menor proporción del Valle, decían ser campesinos que ante la falta de oportunidades en el campo no tenían más opción que ejercer la minería ilegal a riesgo de su propia vida.

3.1.1 Al servicio de la minería

“Peñas Blancas, la puerta de Los Farallones a las Minas”

Los pobladores rurales en Colombia, condenados al olvido por generaciones, han tenido que implementar estrategias de sobrevivencia para sortear las dificultades cada vez más apremiantes a las que se ven enfrentados. Sin lugar a duda, es preciso reconocer que la diversificación de las fuentes de empleo ha sido uno de los cambios más relevantes que el mundo rural ha experimentado bajo las corrientes de la globalización. La tercerización del Estado producto de estas corrientes, ahondan en la idea de ignorar el potencial del campo para generar progreso. El campesinado desprovisto de herramientas para competir en las nuevas dinámicas del mercado, ha quedado relegado y a merced del sistema de producción capitalista, por ello debe adaptarse y

emplearse en trabajos subsidiarios que le permitan sobrevivir, en muchas ocasiones en condiciones precarias.

La realidad presente hoy en el campo, requiere de una visión amplia que permita explicar las grandes transformaciones que se están dando en el mundo rural. La nueva ruralidad, como una propuesta innovadora, nos da cuenta de la pluriactividad como un mecanismo que ha desarrollado la población rural para obtener mayores ingresos, en pro de subsanar el déficit que deja en los hogares rurales la fluctuación de los mercados, la inestabilidad de los precios de los alimentos, el descenso de las exportaciones, la reducción de las zonas cultivables y la incursión de mano de obra campesina en fincas tecnificadas (Castañeda, 2012). Para nuestro caso de estudio, la pluriactividad como mecanismo de resiliencia, encontró eco en la incursión de la minería ilegal, pues a partir de ésta se generaron importantes fuentes de trabajo y de ingresos, que contribuyeron a emplear tanto a población flotante como oriunda de los corregimientos. No obstante, en uno de estos últimos se identificó mayor vinculación a múltiples actividades al servicio de la minería ilegal, específicamente en la vereda de Peñas Blancas del corregimiento de Pichindé.

La vereda de Peñas Blancas es la puerta de Los Farallones a las Minas, ubicada en el corregimiento de Pichindé, es un sitio de contrastes. Podemos encontrar desde casas de madera en estado de deterioro hasta casas de material que cuentan con servicio de Directv e internet. Se dice que muchos pobladores de esta vereda subieron a las minas en los tiempos de bonanza y pudieron sustituir sus casas de madera por material, también otros se atreven afirmar que la minería convirtió a Peñas Blancas en una vereda fantasma, todos se iban a la mina, los niños y jóvenes abandonaban sus estudios para acompañar a sus padres y las mujeres se iban detrás de sus maridos. Desde hace 15 años la minería empezó a hacer estragos en Peñas Blancas, foráneos llegados del Cauca conocedores del oro explotaron las montañas de Los Farallones haciéndose a los mejores socavones e impusieron sus prácticas mineras.

En el 2002 como ya se ha mencionado, con la salida de la guerrilla de las FARC y la entrada de nuevos agentes dedicados a la minería, Peñas Blancas empezó un proceso de inserción a nuevas actividades económicas. Esta zona que para aquel entonces había sido golpeada por el conflicto armado y olvidada por el Estado, a pesar de estar tan cerca de Cali, lidiaba con la falta de oportunidades para alcanzar condiciones de vida dignas, pues no contaban con la posibilidad de fortalecer las actividades agropecuarias de las que dependían mayoritariamente sus ingresos.

Es así, como la minería permitió a muchos campesinos vincularse a las dinámicas de una economía clandestina que suponía nuevos servicios. Surgieron nuevos oficios como el de los “muleros” o arrieros, quienes se encargaban de transportar víveres, insumos y maquinaria necesarios para desarrollar esta actividad. Éste último demandado constantemente. De igual forma, el servicio de “motoraton” (transporte prestado en motocicleta) fue momentáneo, pues surgió de la necesidad de los foráneos quienes por el voz a voz llegaban a la zona en busca de oro. Así, cuando hubo la bonanza de las minas los que prestaban este servicio cumplían una doble función, por un lado transportaban mineros y al mismo tiempo servían de informantes y guías. Los “motoratones” sabían de primera mano que algunos mineros andaban armados,

además que pagaban hasta cuatrocientos mil pesos para que los dejaran trabajar y que por medio de radios estaban en constante comunicación para evadir a las autoridades.

3.1.2 El canje de oro por drogas

“se daban el lujo de subir a vender vicio allá”

Edier - minero

El complejo entramado de relaciones derivadas de la incursión de nuevas prácticas mineras en los Farallones significó la imposición de nuevos patrones de consumo y el fortalecimiento de algunos existentes. El consumo de sustancias psicoactivas en la zona se asocia, generalmente con el incremento de la actividad minera, debido a que el trabajo en las minas implicaba extensas jornadas laborales que eran más llevaderas con el consumo de drogas, de ahí que los ingresos obtenidos se destinarán a este fin. En los Andes y Pichindé, los oriundos afirman que la presencia de foráneos trajo consigo grandes males, a estos agentes externos se los culpa de los altos niveles de delincuencia y de consumo de drogas.

La minería llegó al punto de que llegaron jíbaros. Un man que se llamaba el costeño, que en este momento está preso, se daba el lujo de subir a vender vicio allá, marihuana y demás, cambiaba vicio por oro, producto de eso supuestamente hubieron (hubo) los muertos que hubieron (hubo)...ese man era un man que le decían el costeño, cuando el man comenzó a vender vicio en esos días, comenzaron a robarse las motos en Peñas, comenzaron a hacer daños, a robarse las bestias (caballos) (Entrevista Edier, agosto 9 de 2018).

Otra de las consecuencias, que se asocia a la incursión de la minería es la proliferación de fenómenos inexistentes, como la prostitución y el tráfico armas. Muchos afirman, que el dinero obtenido en las minas empezó a generar envidias entre la población, por ello algunos, los que ahorran e invertían, tuvieron que armarse para evitar robos.

Otros como Chuy que compro ganado y una Guala (campero) que después me vendió, el malbarato menos plata, porque él empezó a ahorrar y a guardar la plata y la gente empezó a pillar que él guardaba plata y le tocó conseguirse un guarda espalda de esos delincuentes, por eso comenzaron a formarse las bandas por allá, por eso fue que comenzaron a formarse bandas delincuenciales por el poder en Peñas Blancas. A través de eso comenzaron a entrar armas...porque comenzó a entrar droga, empezó a entrar prostitución en la zona. El problema social con los hogares fue, que por lo menos con las niñas, les empezaron a ofrecer plata para tener relaciones con ellas. (Entrevista Joaquín, enero 4 de 2018).

Pudimos identificar a través de los distintos testimonios, que los pobladores manifiestan un total rechazo hacia lo que desencadenó la minería en esta zona, los altos niveles de delincuencia, las drogas, etc. No obstante, cuando se trata de ver la minería como una fuente generadora de ingresos pasa a ser validada como legítima y necesaria ante las pocas opciones para la subsistencia.

3.2 Del derroche y la abundancia

*“Cogían una veta, entonces ya se patroneaban”
Encho-poblador de Pichindé*

En una zona donde las actividades generadoras de ingresos eran netamente campesinas, la minería ilegal pasó a ser esa actividad que vendía la ilusión de la abundancia inagotable. Los mismos campesinos afirman que a la llegada de ésta, muchos se “patrioniaban”, es decir, encontraban una veta, establecían todo el “montaje”, suministraban la comida y repartían las ganancias, en ocasiones por partes iguales o a porcentajes acordados con los trabajadores. Para muchos, ser dueños de un “montaje” les otorgaba cierto status del que antes no gozaban, pues se habían establecido roles diferenciados entre los que antes simplemente eran campesinos, ahora, algunos pasaron a ser dueños de “montajes” quienes garantizaban las condiciones necesarias para el trabajo en la veta. Otros tantos, se dedicaron al trabajo duro dentro de los socavones a merced de un porcentaje. Al respecto don Encho señala:

otro problema que comenzó fue este: que la gente de pronto nativa de por ahí (Peñas Blancas), ehh ya no quería. Cogían una veta, entonces ya se patroneaban, ósea la veta es mía yo te pongo la comida vos trabajas y el cincuenta por ciento es mío y el cincuenta por ciento es tuyo de tu trabajo, entonces comenzó a trabajar mucha del Cauca y todo eso (Entrevista Diciembre 1 de 2017).

Muriel (2012), en su artículo *Paramos intoxicados: No todo lo que brilla es oro*” hace referencia a lo que señala don Encho:

Los dueños de las cantinas y los prostíbulos son mineros, los de los graneros también. Si le va bien, en ocho días un minero logra hacerse su montaje porque puede sacar hasta dos millones de pesos; con eso compra una planta eléctrica, una molienda, el barril, el motor, los químicos, la dinamita, el combustible y listo, abre su frente de trabajo (p.1).

En lo anterior, podemos ver los cambios representativos a raíz de la incursión de una nueva actividad económica. Como vemos, a la luz de la nueva ruralidad el campo enfrenta grandes transformaciones, que no sólo van de la mano de las reformas económicas, sino también éstas se potencian gracias a la emergencia de fenómenos como el narcotráfico y la minería ilegal.

La minería la gente no la aprovechó, la gente ganó tanta plata y por falta de educación y la ignorancia hacia todo, y pensaron que toda la vida iban a tener plata, que solo era ir y escarbar e iban a tener plata siempre, entonces ellos botaban la plata, la regalaban, se la tomaban y la prostituían; porque venían a la 20 y cerraban los negocios y decían que cerraran y les dejaran las viejas y que sacaran a todo mundo y dejaran el sitio solo para ellos, al estilo la “Guaca” y compraban todo el surtido y tiraban la plata. Y hoy en día no tienen con qué comer (Entrevista Joaquín, enero 4 del 2018).

Es necesario entender las nuevas necesidades y patrones de consumo que configuran las lógicas de algunas localidades campesinas. Generalmente, ante la falta de lugares de esparcimiento en los espacios rurales, los patrones de consumo se inclinan hacia las bebidas alcohólicas, y algunas veces, como en nuestro caso de estudio, acompañado del pago por servicios sexuales.

3.2.1 Eventos Liz: el amor pagado sin censura

“Pero la mayoría de la gente que iban [iba] a trabajar allá, trabajaban e iban y cogían 5 o 6 millones de pesos. ¿Sabe dónde quedó toda esa plata?: en Eventos Liz”
Encho- poblador de Pichindé

“Era nuestra segunda casa después de las minas, bajábamos de las minas para allá (Eventos Liz), veníamos a las casas a cambiarnos y de nuevo para las minas y bajábamos otra vez, ese fue nuestro segundo hogar, y es que en ese tiempo como había plata eso no importaba, el decir de uno era después la recupero”. (Entrevista Edier, Agosto 9 de 2018).

Así describe un minero su paso por Eventos Liz. Este sitio fue el recinto donde cada quince o veinte días los mineros desahogaban sus más bajas pasiones, en los momentos de bonanza que las minas les brindaban. Según sus versiones, “derrochaban” a manos llenas, pues la plata no importaba porque después se recuperaba. Esta fue la cotidianidad de los mineros en cuanto a recreación, en los tiempos en los que las minas El Socorro o Alto del Buey daban sus mejores vetas. En Eventos Liz se reunía un amplio grupo de hombres para departir por largas horas. Dicen que llegaban a los dos de la tarde y salían de allí hasta la madrugada. Cada uno en promedio podía gastarse entre ochocientos mil y un millón de pesos en los que se incluía licor, contratación de trabajadoras sexuales y espectáculos.

3.2.2 Las demandas de los nuevos clientes

El trabajo en las minas, para algunos pobladores de Peñas Blancas, significó un poder adquisitivo que el trabajo en la agricultura difícilmente podría otorgarles. El golpe de suerte, tan anhelado por muchos, se concretaba en quienes hacían inversiones en bienes como casas, carros, negocios y fincas. Otros tantos, llevaron una vida frenética basada en la inmediatez, que les permitió alcanzar una abundancia y un alto consumo efímero. Los que lograron condiciones económicas estables abandonaron sus cultivos, se dedicaron exclusivamente a los negocios adquiridos a partir de las minas o simplemente a recoger las ganancias que los “montajes” les dejaban. Así, menciona al respecto el Periódico El País sobre algunos testimonios de la localidad:

A muchos les ha ido bien, como a don Hélmer, que de un tiempo para acá construyó su casa en ladrillo, compró otras tres casas más y tiene ganado. Por eso abandonó sus cultivos. La gente lo sabe. Otro muy mentado es un señor Getial, que dicen que ya no sube a las minas sino a recoger oro y a pagar jornaleros. (Periódico El País, Septiembre 28 de 2014)

Es cierto que en Peñas Blancas y sus alrededores, negocios como tiendas y cantinas existían de tiempo atrás, sin embargo, la minería atrajo nuevos clientes, ya no solo eran los campesinos que demandaban productos básicos de la canasta familiar sino foráneos que venían por víveres para llevar a las minas, que también demandaban licores e insumos para la estancia y el trabajo en éstas. Fue así, como en Peñas Blancas tras la llegada de los mineros y la abundancia del dinero circundante, las tiendas y cantinas aprovecharon para ofrecer mercancías escasas en la zona a precios desmesurados. Asimismo, se presume que el licor, las drogas y el amor pagado en este

contexto fueron demandados para sobrellevar las extremas condiciones bajo las que se da el trabajo en las minas.

Un joven de la vereda de Peñas Blancas quien en algún tiempo estuvo vinculado al trabajo en las minas, hijo y nieto de mineros, es vehemente en afirmar: “Por acá hay muy poca gente que tome bastante !!!Que deme botellas!!! y pues uno ahí se da cuenta quien está en la mina, quién está subiendo, porque por acá casi nadie coge plata para derrochar así” (Entrevista Juan, Enero 24 de 2018).

Las nuevas formas de organización de las actividades productivas que giran en torno a la minería ilegal, mencionadas ampliamente en este apartado, constituyen cambios en la dinámica económica, pues se transforman las formas tradicionales y aparecen nuevos actores económicos alrededor de esta actividad.

3.3 De la cocina al socavón

*“De aquí habían varias mujeres (trabajando en las minas), de Peñas. Eran cocineras”
María – encargada de cocinar en las minas*

Como se puede constatar, el mundo rural hoy se enfrenta a múltiples transformaciones, que hacen parte de las dinámicas de la nueva ruralidad, donde la dimensión del género cobra relevancia. La globalización, como un proceso macro que ha impactado fuertemente el campo en Latinoamérica, afecta principalmente a los pequeños productores, pues las comunidades rurales dependen cada vez más de las condiciones del mercado. Consecuencia de lo anterior es el empobrecimiento acentuado del campesino y la pérdida de su habilidad para producir, impulsando que éste abandone sus labores en el campo y se inserte en otras actividades subsidiarias no agrícolas. Es en este contexto, que las mujeres han pasado a tener un papel relevante trabajando por cuenta propia y en múltiples labores de servicio (Loayza, 2006).

En el campo, las mujeres se han ganado un lugar dentro de la cadena productiva, no obstante, la escasa oferta laboral las ha limitado a la reproducción de roles domésticos asignados históricamente a éstas. Las ofertas laborales se limitan a las áreas de servicios generales, aseo y alimentación, por lo cual hay una alta vinculación de las mujeres a empleos precarios; mal remunerados, sin afiliación a seguridad social, inestables y con extenuantes jornadas laborales. A pesar de esto, las mujeres campesinas han sabido sortear las condiciones bajo las que se las emplea y se han convertido en generadoras de ingresos para sus hogares.

Por otra parte, la participación de las mujeres en la industria minera ha estado marcada por una constante discriminación. En el artículo 242 del Código Sustantivo de Trabajo, se especifica que las mujeres, sin importar la edad, no pueden ser empleadas en trabajos subterráneos en las minas, así como tampoco en trabajos que impliquen alto riesgo, que no cuenten con condiciones de salubridad o que demanden mayores esfuerzos. Fue sólo hasta el año 2015 cuando se eliminó la normativa que restringía el acceso formal de las mujeres a la industria minera. A nivel de

América Latina en países como Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay las mujeres tienen el libre albedrío de ejercer y elegir en qué laborar, es decir, se respeta el derecho fundamental de igualdad de género en el trabajo. Sin embargo, en Bolivia, Brasil, Nicaragua, Perú y Colombia, la prohibición sigue vigente o en el mejor de los casos se abolió recientemente.

Cabe resaltar que la discriminación de la que han sido víctimas las mujeres en la actividad minera, no sólo se ha dado por vías legales sino también por tradición, pues en el imaginario minero se pensaba que las mujeres no eran fértiles para las vetas, de ahí la hostilidad hacia ellas. Lo anterior, no solo se evidencia en la minería a gran escala, también es una realidad latente dentro de las prácticas de la minería ilegal. Para el caso que nos compete en esta investigación, constatamos que efectivamente las mujeres, por lo menos durante la explotación indiscriminada de las minas El Socorro o Alto del Buey, reprodujeron los roles domésticos en esta actividad. Resultados muy similares a éstos se presentan en el trabajo de Posso (2018) quien se refiere a las restricciones que tienen las mujeres para trabajar en las minas de esmeraldas.

María, habitante de la vereda de Peñas Blancas, cuyo padre, hermano, esposo e hijos tuvieron relación con el trabajo en las minas, nos contó cómo fue su vinculación a la minería. En su relato, menciona que su primera ida a las minas se dio gracias a que el dueño del “montaje” en el que trabajaba su esposo le pidió a éste que la contactara para emplearla en la cocina. Sus labores, comenzaban muy temprano en la madrugada. Una taza de café era lo primero que ella les brindaba a los mineros antes de salir a los socavones, después de eso, a las ocho de la mañana, despachaba los desayunos. A las doce en punto, el almuerzo estaba listo para servirse y pasadas las siete de la noche iban llegando uno a uno a comer. Cocinaba para aproximadamente quince o veinte hombres, cuando había pocos. Su sueldo por esta labor fue de doscientos cincuenta mil pesos los primeros ocho días, cabe mencionar que su pago se vio disminuido porque le descontaron la subida a lomo de mula de ella y sus tres hijos. Su estancia en el campamento minero oscilaba entre ocho y quince días, volvía a su casa aproximadamente por el mismo tiempo y retornaba nuevamente a su trabajo.

En los campamentos mineros en donde había más de cien trabajadores, se contrataba hasta tres mujeres en las labores de la cocina, se presume que éstas recibían un sueldo alrededor de dos millones de pesos cada una. Como sucedió en el caso de la señora María, las mujeres que trabajaban en los campamentos mineros lo hacían o bien por sus lazos de consanguinidad o por lazos maritales con los mineros.

En el marco del reconocimiento de la explotación ilegal de oro presente en las minas El Socorro o Alto del Buey, para el 2011 se realizó la identificación de los campamentos mineros establecidos en la zona. En dicho reconocimiento se registró la presencia de diez mujeres provenientes en su mayoría del Valle del Cauca, seguido de Cauca y Chocó. El promedio de edad era de treinta y cuatro años, es decir, mujeres jóvenes. Su lugar de residencia era principalmente Cali y en menor proporción la vereda Peñas Blancas, Sevilla y Tuluá. Según los registros, hay entre estas mujeres quienes trabajaron diez años, como hay otras que sólo llevaban

meses. En cuanto al oficio al que referían dedicarse antes de trabajar en las minas era modistería, peluquería, cocina, manejo de máquina, agricultura y ama de casa.

Zacarias Hidalgo, proveniente de Suárez Cauca, es tal vez quien mejor ejemplifica, la relación de parentesco de la que dependía el trabajo en las minas, por lo menos en el caso de las mujeres. Se dice, que este señor llevaba gran parte de su vida en la vereda Peñas Blancas. Fue uno de los pocos, junto con los señores Juan Getial y Ferney Herrera, que lograron establecer sus campamentos mineros en la época en que la guerrilla de las FARC estaba asentada en la zona. Hay quienes afirman que construyó una casa en el sector de las Palmas, donde era su campamento principal, a la cual trasladó a su familia. Allí crecieron sus hijos y tanto hombres como mujeres aprendieron lo concerniente a la actividad minera.

La información recopilada a través de las distintas versiones habla de una realidad en la que las mujeres estuvieron relegadas a las labores domésticas, pero en el caso de las mujeres Hidalgo, ellas no eran trabajadoras comunes, más bien su labor contribuía a fortalecer el negocio familiar, de hecho, sus funciones no se limitaban exclusivamente a labores de la cocina, sino que participaban de la explotación de oro junto con sus pares masculinos en los socavones. Aquí se puede ver entonces que las funciones desarrolladas por las mujeres en las minas, no solo dependían del parentesco, sino también de la posición que ocupará en el campamento la persona que la vinculó a la actividad. De acuerdo con los testimonios, los ingresos de las mujeres que trabajaban en las labores de la cocina eran destinados a aportar a la economía del hogar, es posible que aquellas que trabajaban en el socavón, al tener un margen más alto de ingresos tuvieran la libertad de destinar esos recursos para otras cosas.

El control ejercido por Parques Nacionales a la minería ilegal presente en el PNN Farallones de Cali reajustó la forma como se venía desarrollando ésta. En este sentido, la participación de las mujeres se vio afectada, la minería ilegal entró a demandar fuerza de trabajo netamente masculina, pues ahora al no existir los grandes campamentos sus labores en la cocina no eran requeridas. Las mujeres quedaron relegadas de esta actividad, a menos que trabajaran dentro de los socavones. Las recientes versiones apuntan a que es posible encontrar algunas mujeres de forma esporádica trabajando en los socavones. Se dice que muchas no han vuelto a las minas por el peligro que representa el control de las autoridades.

Partimos de que hubo dos momentos en los que las mujeres se vincularon a la actividad minera, el primero en la época de los grandes campamentos, donde se dedicaban a labores de la cocina. Al respecto destacamos que así como lo afirman diversos estudios, el trabajo de las mujeres rurales generalmente ha estado asociado, a la responsabilidad exclusiva de desarrollar tareas reproductivas, esto repercute en la baja participación de éstas en la fuerza laboral rural (Farah y Pérez, 2004). Sin embargo, la pluriactividad característica de la nueva ruralidad, ha permitido que las mujeres se integren cada vez más a actividades productivas, que representan ingresos para sus hogares. Las viejas nociones que consideraban que las actividades reproductivas no eran concebidas como un trabajo, porque estaban vinculadas a lo doméstico, quedaron desvirtuadas.

En dicho momento, se dio el tránsito de una actividad reproductiva a una productiva, pues cocinar en las minas, significó ingresos para las mujeres.

Un segundo momento, da cuenta de la vinculación de las mujeres al trabajo en los socavones, en éste identificamos una ruptura del rol desempeñado por la mujer, donde su trabajo se desarrolla bajo las mismas condiciones que sus pares masculinos, es decir, tanto sus ingresos como sus actividades cambiaron. Esto hace parte de un proceso de diversificación ocupacional femenina, donde las mujeres vienen asumiendo roles que les permiten desempeñarse en diversas tareas que antes solo se asociaban a los hombres

3.4 Foráneos en las minas

3.4.1 El caso de Suárez - Cauca: la miseria en medio de la abundancia

El municipio de Suárez, ubicado en el norte del Cauca, cuenta a la fecha con una población aproximada de 18.485 habitantes. Sus actividades económicas giran en torno a la agroindustria de caña de azúcar, ganadería extensiva, agricultura y explotación minera. De acuerdo con Anzola (2012), en el municipio de Suárez la extracción de oro ha impactado fuertemente la cotidianidad de sus habitantes, por ello todo lo concerniente a esta actividad repercute directamente en el aspecto social, político, económico, cultural y ambiental. Sin embargo, la percepción de los habitantes dista mucho de considerarla una actividad generadora de progreso, más bien es vista como una ocupación de subsistencia orientada a remediar obligaciones económicas.

Los orígenes de la minería en Suárez datan del año 1636, con los asentamientos de esclavos africanos, vinculada ésta principalmente a la extracción de oro, convirtiéndose en la segunda actividad más significativa para la economía local. La ubicación del municipio de Suárez lo ha convertido en un corredor estratégico y un blanco fácil para que grupos al margen de ley - guerrilleros y paramilitares- incursionen en este territorio. La presencia débil del Estado ha hecho de éste un sitio propicio para la siembra de cultivos ilícitos y el tráfico de drogas. Actualmente se asocia el incremento de éstos últimos a la ola de inmigración Nariñense. De igual forma, se destaca el papel activo de la colonización antioqueña, porque ha traído consigo un aporte a la economía local en cuanto a la diversificación de establecimientos comerciales. Sin embargo, se reconoce que los “paisas”, con la tecnificación de la extracción de oro establecieron el monopolio de la venta de insumos para las nuevas prácticas mineras, desplazando las técnicas ancestrales y despojando a la población de su historia y tradición (Anzola, 2012).

Se sabe, que la minería en Suárez está organizada entorno a cooperativas, además que existe una alta movilidad de la población, hacia centros urbanos como Cali y Popayán, ligada a la falta de oportunidades. En contraste, se registra que el incremento de la explotación aurífera de oro trajo como consecuencia la migración de personas de otras regiones del país a la zona (Anzola, 2012). De cierta forma, la minería en Suárez al estar legalizada por medio de cooperativas, significa la pérdida de rentabilidad para los mineros, éstos trabajan por un salario fijo y en ocasiones por un

bajo porcentaje. De ahí que muchos opten por trasladarse a las minas El Socorro o Alto del Buey, donde a pesar del control de las autoridades pueden obtener mayores ingresos.

Es de resaltar, que a pesar de la vasta riqueza natural con la que cuenta Suárez, representada en una área de gran desarrollo minero y con un potencial incalculable de recursos, donde se explotan diversos minerales del subsuelo, como el oro, carbón, arenas y arcillas para el sector de la construcción, es una región que se ha quedado estancada, cargando con el estigma de ser una zona violenta, atrasada y empobrecida. Los registros más recientes que datan del 2005, evidencian que la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) correspondían a más de la mitad (59.9%), asimismo, la población en estado de miseria constituía un 30%. Se dice también, que a pesar de que en esta región confluyen diversas culturas (indígenas, afrodescendientes y colonos) el negocio de la minería, en su mayoría, es manejado por la población afro. De igual forma, en este contexto los grupos armados ilegales, aunque no estuvieron directamente vinculados al control y manejo de la minería, lograron permear considerablemente estos escenarios.

3.4.2 ¿Y ellos de dónde son? !!De Suárez grita la gente!!

*“la minería trajo mucha población del Cauca, de Suárez... se están viniendo de allá, porque saben que acá hay oro”
Joaquín- líder del corregimiento de Los Andes*

De la misma forma como en Suárez nuevos agentes externos impusieron dinámicas en la extracción ilegal de oro que repercutió en el tejido social, se puede decir que para el caso de Andes y Pichindé encontramos un fenómeno parecido, en el que identificamos patrones como el aumento del consumo de alcohol, acompañado de la proliferación de la prostitución, muertes asociadas a conflictos por las minas, consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar y percepción de inseguridad. Mientras allá la colonización antioqueña permeó toda la actividad minera, despojándola de su esencia tradicional, los “suareños” llegaron a las montañas de los Farallones, montaron grandes campamentos y le mostraron a los lugareños cómo debían arañar el oro a la tierra, y es que estos últimos conocían la minería de vieja data y entre la población se sabía que algunos esporádicamente subían a las Minas a trabajar de manera muy artesanal en los viejos socavones que los alemanes habían dejado.

“En esos tiempos en la minería se comenzaron a utilizar químicos después de que se metieron todos lo caucanos, la minería se comenzó a dañar, se convirtió en una mafia cuando entraron forasteros” (Entrevista Edier, Julio 16 de 2018).

Con la llegada de estos nuevos actores se abrieron nuevos frentes de trabajo en las minas El Socorro o Alto el Buey. Los campamentos mineros más grandes en los tiempos donde los Farallones sirvieron de tránsito y asentamiento para la guerrilla de las FARC y grupos paramilitares, estaban al mando de caucanos provenientes específicamente del municipio de Suárez. El testimonio de Joaquín, presidente de la junta de los Andes cabecera, de la asociación de juntas comunales de la cuenca hidrográfica y coordinador del comité de planificación, quien

ha vivido toda su vida en la zona, nos permite evidenciar la percepción que de estos nuevos actores se tiene.

Eso fue lo que generó la problemática de la minería ilegal, porque la mina hace muchos años ya la habían explotado otras personas que no eran de la región. Entonces cuando a la gente no se le fue cumpliendo (entidades del Estado) llegaron del Cauca unas personas que sabían de oro y se empezaron a meterse allá, porque la gente de Peñas Blancas realmente comenzó como arrieros y acompañantes, a llevar mercado y de ahí realmente la gente comenzó a meterse en la minería como tal, pero fue por las mismas fallas de los proyectos, porque la gente si sabía que allá había oro, pero no sabían cómo explotarlo (Entrevista Enero 4 de 2018).

Si bien es cierto que personas provenientes de Suárez han implementado sus modos, usos y prácticas de trabajo en las minas, no se puede afirmar categóricamente que sean éstos los únicos quienes han irrumpido en la zona. Un claro ejemplo es el caso del señor Juan Getial, identificado por PNNC como dueño de uno de los grandes campamentos mineros. Se trasladó de Santacruz Nariño a la vereda Peñas Blancas, allí se estableció por más de dieciséis años y vinculó a su familia a la actividad. De igual forma, esto también se puede corroborar en el censo realizado en 2011 por PNNC, donde se revela que las personas que se encontraban ejerciendo actividad de minería ilegal no solo venían del municipio de Suárez, sino también de otras regiones del Cauca. Este departamento aportó el 38,81% de la población asentada en las minas, seguido del Valle del Cauca (32,84%) y Nariño (14,93%). Asimismo, y en menor proporción de los departamentos del Chocó, Putumayo, Caldas y Risaralda.

En lo referente a las edades de las personas que trabajaban en las minas se identificó que el 35,82% estaba en un rango de edad de 19 a 29 años, es decir, una población mayoritariamente joven, en edad de acceder a educación superior o de culminar sus estudios de bachillerato. El 28,36% estaba concentrado en el rango de 30 a 39 años, una población medianamente adulta y económicamente activa. Por otro lado, un aspecto importante a tener en cuenta, es que las actividades anteriores a la minería a las cuales referían dedicarse las personas que participaron del Censo son: la agricultura (28,36%), oficios varios y estudio (20,9%), destacando que estudio es la culminación del bachillerato. Del mismo modo, aquellos que no han realizaban ninguna actividad representaban el 10,45%, en otras palabras, probablemente esta población se dedicaba exclusivamente a la minería debido a que no expresaron realizar otro tipo de trabajos. Actividades como lava-autos, cocina, manejo de máquinas planas, modistería, transporte de pasajeros, otros, venta ambulante, administración de fincas, ebanistería, madre comunitaria y ama de casa, presentaron bajos porcentajes.

Como vemos, los mineros de los Farallones, basándonos en los datos obtenidos por el PNNC, se puede decir, que generalmente son foráneos, pues hasta el momento las evidencias apuntan a que la minería ilegal ejecutada en las Minas El Socorro o Alto de Buey atrae población flotante o de paso que se trasladan a la zona para ejercer la explotación ilegal de oro y que sólo en contadas ocasiones ha fijado su vivienda en sitios como Peñas Blancas, Vereda de Pichindé. Incluso es posible afirmar que dicha población es joven, pues como se mencionó anteriormente, los rangos

de edad que tienen los índices más altos representan a personas jóvenes o de mediana edad. A través de los testimonios se ha podido constatar que hasta la fecha, aunque en menor proporción, esta situación persiste, es decir, a las minas siguen llegando personas, normalmente hombres de otras regiones del país (Ver fotografía 15), siendo el municipio de Suárez - Cauca el que sigue aportando los mayores números en cuanto a personas en las Minas se refiere. El PNNC Dirección Territorial Pacífico asegura por ejemplo, que para el 2017 las capturas reportan en su mayoría, a personas oriundas del Cauca.

Fotografía 15. Captura de mineros en el sector de “Patequeso”



Trabajo de campo, visita a las Minas, enero 15 de 2018

Hasta aquí, se destaca que lo descrito previamente, no quiere decir que los pobladores de los corregimientos de Los Andes y Pichindé no trabajan o trabajaron en las minas, simplemente en relación con personas procedentes de otras regiones su proporción es mucho menor. Algunas versiones de mineros indican que a lo sumo 10 personas de los corregimientos aquí contemplados trabajan en las minas, pero esto dista de la realidad, porque en información recogida se registra casos como el de Peñas Blancas, en donde la mayor parte de su población, por lo menos en algún tiempo, estuvo vinculada al trabajo en las minas El Socorro o Alto del Buey.

Del panorama que nos ofrece la presencia de foráneos en las Minas, inferimos que los movimientos poblacionales que se dieron en los corregimientos de estudio, representan un cambio significativo, pues éstos desencadenaron una serie de dinámicas decisivas para la cotidianidad de los pobladores. En este sentido, fue posible identificar, en el marco de la nueva ruralidad, dos tipos de migraciones: la primera rural - rural, que constituye procesos de colonización en dinámicas de ampliación de la frontera agrícola, que en nuestro caso, es avivada por la demanda de mano de obra en actividades como la minería ilegal. La segunda urbano -

rural que consiste en la búsqueda de oportunidades económicas en lo rural, esto muy presente en zonas rurales donde los cultivos de uso ilícito se han convertido en generadores de empleo, generalmente la población atraída es joven, provenientes de sectores marginados de los centros urbanos. En las minas El Socorro o Alto del Buey, de acuerdo con el censo de 2011 del PNNC, se identificó población de la ciudad Cali, que en testimonios de pobladores, provenían de las zonas marginales de Cali como el distrito de Aguablanca y Siloé.

3.5 La minería en la mira institucional

“pero fue por las mismas fallas de los proyectos, porque la gente si sabía que allá había oro”
Joaquín-líder del corregimiento de Los Andes

En el municipio de Cali, las poblaciones que se encuentran dentro de los límites del PNN Farallones son en el corregimiento de Los Andes los sectores de El Faro, Cabuyal, Los Cárpatos, Quebrada Honda, Pueblo Nuevo y Los Andes cabecera. En Pichindé está la vereda Peñas Blancas. Dentro del PNN Farallones de Cali, en lo que respecta a los corregimientos de Los Andes y Pichindé, existe una división administrativa en cuatro zonas. La primera es la zona de amortiguamiento, llamada así porque se encuentra muy cerca del área urbana, esta zona contempla sectores como: parte de Mónaco, el Mameyal, el Mango y Atenas. La segunda es la zona de reserva forestal, que abarca parte de Venteaderos hacía abajo, parte del Faro, Andes bajo, la Reforma, la Carolina y un tramo de Mónaco. También, la zona de Parque Nacional Natural que comprende de Venteaderos hacia arriba. Y por último, con base en una reforma en la Ley se desafectó del Parque Nacional y declaró zona de sustracción doce mil metros cuadrados de la vereda Pilas del Cabuyal y Pichindé cabecera.

De ahí, que entidades como el DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente), CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca), EMCALI (Empresas Municipales de Cali) y PNNC (Parques Nacionales Naturales de Colombia) Dirección Territorial Pacífico, se encarguen del control, vigilancia y mitigación de las presiones medioambientales y sociales que puedan presentarse dentro de los límites de esta zona. Cada una de éstas, ejerce sus respectivas funciones dentro de su jurisdicción.

El DAGMA como máxima autoridad ambiental en el municipio de Cali, encargada de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, responsable de la política y de la acción ambiental, tiene la función de monitorear terrenos propiedad del municipio (predio el Arbolito, en la verdad el Cabuyal, el Danubio, en la vereda Cárpatos, finca la Yolanda, vereda Pueblo Nuevo y Piedra Grande en el sector de Venteaderos). Por su parte, la CVC que es encargada de administrar los recursos naturales renovables y del medio ambiente del Valle del Cauca, fue la primera en hacer presencia en la zona, comprando el predio de Yanaconas. En el PNN Farallones de Cali realiza asistencia y acompañamiento a las estrategias que implementa el PNNC en contra de la minería ilegal y tala de bosques. Adicionalmente aporta recursos en investigaciones y presta sus laboratorios para los análisis fisicoquímicos de los diferentes estudios que se hacen en

la zona. EMCALI, compró predios en el sector la Brasilia detrás de Pichindé cabecera, los Alpes Pueblo Nuevo, la Margarita Peñas Blancas y la finca La Olga en la Reforma.

En el año 2011 la minería ilegal presente en las minas El Socorro o Alto del Buey alcanza uno de sus puntos más altos de producción. Ante la presencia de grandes campamentos mineros y una acelerada explotación de los recursos naturales, con efecto colateral en el tejido social de las comunidades aledañas, se hizo necesario un apoyo interinstitucional para mitigar las afectaciones sobre los ecosistemas impactados por la explotación ilícita de yacimientos auríferos. En las diferentes intervenciones que se vienen desarrollando desde el 2011, han participado entidades tales como: Personería, Contraloría General de la República, Defensoría Del Pueblo, Procuraduría Ambiental y Agraria, Secretarías de Justicia y Seguridad, de Gestión del Riesgo, de Salud, Infraestructura y Vivienda; Empresas Municipales de Cali (Emcali), Ejército Nacional, Policía Metropolitana de Cali: Carabineros y Seguridad Rural, Fiscalía General de la Nación (CTI, URI), Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y Autoridad Nacional Minera.

Por otra parte, desde una perspectiva de análisis un poco más amplia, concebimos que el trabajo solidario entre las distintas instituciones que hacen presencia en la zona de los Farallones, es un cambio que surge de la necesidad de encontrar soluciones que frenen el impulso arrasador que tomó la minería ilegal. Ante esto último, aclaramos que no es que las instituciones ya mencionadas, no hayan intervenido en el territorio, sino que se volcó la atención hacia la minería ilegal, que estaba generando transformaciones trascendentales que afectaban no solo un área de alta fragilidad ecosistémica, sino también el entorno social y económico. La queja frecuente entre los pobladores, es que desde las instituciones que buscan mitigar el impulso de la minería ilegal, las soluciones que se ofrecen son tenues e insuficientes para afrontar un problema de tal dimensión, pues se pretende por medio de trabajos transitorios y a jornal desvincular a los mineros de la actividad ilegal sin proponer alternativas que les permitan ingresos estables.

3.6 Procesos Judiciales: evasión y reincidencia

Vea, la primera vez que me cogieron a uno le dicen que tiene que permanecer callado, que todo lo que diga será utilizado en su contra, que tiene derecho a un abogado y bueno.... El procedimiento que utiliza regularmente la ley. Pero yo me volé, fui, comí en el campamento de ellos (Campamento base de PNNC Y Ejército Nacional), dormí y me les volé en el camino bajando para Peñas. La segunda vez, me les volé llegando al campamento, la tercera vez no me cogieron pero si me vieron y no me pudieron coger porque yo salí a correr. La cuarta vez ya me cogieron y ahí si ya como sabían que yo me les volaba, me amarraron bien y me llevaron arriba, y el mismo procedimiento. Me cogieron a las 5 de la tarde, a las 8 estábamos en el campamento de ellos, a las 11 estuvimos en Peñas, a la 1 de la mañana en el Batallón y a las 7 de la mañana nos tenían en la Fiscalía. Y ahí ya, me condenaron a 4 años...En la fiscalía, lo coge el fiscal y lo acusan a uno de todo un poquito, hasta de cosas que uno desconoce en este país, pero bueno. De ahí llega el juez y lo sentencia a uno a lo que le dé la gana, así es esta justicia en Colombia... A uno si le cobran una multa, pero el abogado pelea, porque como uno no tiene, bueno yo no sé qué es que el abogado pelea allí,

entonces a uno le anulan la multa, pues no tiene con qué pagarla, en pocas palabras.
(Entrevista Edier, Julio 17 de 2018).

En las minas El Socorro o Alto del Buey cuando se captura a una persona realizando presuntamente explotación ilícita de yacimientos auríferos, como ya se ha mencionado, se deja a disposición de la Policía Judicial junto con el informe del Ejército Nacional, el informe técnico de PNNC y con los elementos incautados como material probatorio, para posteriormente ser trasladados a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación y proceder a la judicialización. No obstante, a pesar de los esfuerzos del PNNC por frenar la minería ilegal ejercida en los Farallones de Cali, el principal obstáculo se encuentra es la legislación colombiana, pues los delitos relacionados con invasión de áreas protegidas de especial importancia ecológica y daños en los recursos naturales, son delitos excarcelables. PNNC argumenta, que la legislación no brinda las garantías necesarias para, por lo menos desde la ley, sentar un precedente entre los presuntos infractores.

De los procesos judiciales adelantados por minería ilegal en el PNN Farallones de Cali, que llegaron al término de dictar sentencia, destacamos los casos en los que se declaró responsables materiales penalmente, a tres personas de la conducta punible de explotación ilícita de yacimiento minero. En noviembre de 2014 se dieron estas primeras condenas y cobros coactivos de la suma establecida en el incidente de reparación integral. En marzo de 2016, otros tres individuos fueron condenados a treinta y seis meses de prisión y el pago de una multa de cien salarios mínimos legales vigentes, como coautores penalmente del concurso de delitos de daño en los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica y explotación ilícita de yacimiento minero. Para esta misma fecha, se condenó a la primera mujer por el delito de invasión de área de especial importancia ecológica, con una pena de veinticinco meses de prisión y una multa de sesenta y nueve salarios mínimos legales vigentes.

En octubre de 2017, se presenta la sentencia más representativa. Nuevamente se condena a tres ciudadanos, éstos últimos provenientes del municipio de Suárez Cauca, a siete años de prisión y se les cobra una multa de cuarenta y cinco salarios mínimos legales vigentes. Los delitos por los que fueron procesadas estas personas fueron fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y privativo por las Fuerzas Armadas de Colombia en concurso con invasión de áreas de especial importancia ecológica.

Lo mencionado anteriormente, representa sólo algunos casos. En la información recogida en el trabajo de campo, tuvimos la oportunidad de obtener de primera mano múltiples testimonios de implicados en procesos judiciales. Muchos de ellos, eran pobladores de Los Andes y Pichindé, quienes se negaron a concedernos entrevistas formales, porque tenían procesos vigentes y se encontraban en detención domiciliaria. Todos han sido condenados a penas entre dos y cuatro años. En algunos de los casos, tienen permisos para trabajar y otros más osados, a pesar de las restricciones, siguen subiendo a las minas, evaden a las autoridades y en ocasiones son nuevamente capturados y reseñados como reincidentes.

Las comunidades campesinas como efectivamente pudimos observar en los corregimientos de Los Andes y Pichindé, no son homogéneas, ni permanecen estáticas. Por ello, el concepto de

nueva ruralidad permite una lectura de lo rural, como un complejo entramado de nuevas relaciones no solo entre los actores sociales, sino con el medio circundante. En nuestro caso, las judicializaciones que algunos pobladores de estos corregimientos tienen, son producto de nuevas formas de relacionarse y valorar su territorio, las prácticas agrícolas sustituidas por las mineras, conllevaron a que quienes se había dedicado exclusivamente a la agricultura, ahora se hubieran insertado en las dinámicas de la economía clandestina que implicó la minería ilegal. Cabe destacar, que estos cambios no fueron fortuitos, sino más bien inducidos e incentivados por el desarrollo de una actividad que se salió del control estatal y en la que los habitantes rurales encontraron una oportunidad de mejorar sus ingresos.

3.7 Ocupantes ilegales: campesinos sin tierras

“No somos mineros, somos campesinos”

La presencia de población humana en áreas protegidas es una realidad que no puede desconocerse, por ende la normatividad vigente, encaminada a la protección de los recursos naturales ha tenido que reajustarse de algún modo a tal situación y adoptar estrategias para regular las actividades que realizan los asentamientos humanos dentro de estas áreas. Como consecuencia, se ha dado un proceso de transformación en la forma como los pobladores asentados sienten y conciben el territorio. Quizá, fue este el caso los pobladores del PNN Farallones de Cali, quienes tienen una “ciudadanía restringida” que les impone otras formas de habitar ese territorio. Al no ser dueños de nada, no poder cultivar sus tierras como antes lo hacían, los dejó desprovistos de herramientas para poder subsistir. Fue entonces, cuando la minería ilegal encontró un contexto propicio para que aquellos que lo único que poseían era su fuerza de trabajo pudieran superar las condiciones que el estigma de ocupantes ilegales les imponía.

Es bien sabido, que la declaratoria de los parques nacionales naturales en el mundo, se hace en zonas despobladas, a lo sumo ocupadas por etnias nativas y/o afrodescendientes, para el uso, goce y disfrute de los habitantes, preservando las especies de flora y fauna. No obstante, en el PNN Farallones de Cali, el proceso fue diferente, se declaró parque nacional natural estando habitado por campesinos colonos provenientes de la bota Caucana desplazados de la violencia, que llegaron en busca de tierras cultivables, pues sus antiguas tierras se encontraban en deterioro o eran cada vez menos fértiles. De aquí, nace la problemática de uso, ocupación y tenencia de la tierra en el PNN Farallones de Cali. La queja frecuente entre los habitantes y líderes campesinos es que nunca hubo una debida socialización de los planes de manejo adecuados por parte del Gobierno nacional y local, para dar solución a la problemática.

Por otro lado, a pesar de que el INCORA (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria) junto con el municipio y EMCALI compraron predios de la zona (aproximadamente 300), muchos de éstos quedaron por fuera. Se sabe que setecientas familias con sus predios de agricultura y ganadería eran moradoras de la zona al momento de la declaratoria. La resolución implementada por el INCORA, vulnera los derechos fundamentales y ostensibles de los campesinos. Así, éstos últimos perdieron el derecho a cultivar su comida, a ser colonos y raizales, no les compraron sus

predios o mejoras, pero si los condenaron a condiciones de empobrecimiento. De igual forma, en 1941-1948 la Nación cedió los baldíos que aún le quedaban en la zona de reserva forestal al municipio de Santiago de Cali, por ello éste último no podía entregarles las mejoras a colonos, raizales y terceros compradores de buena fe. La situación anterior, es consecuencia de una posible violencia estructural que ha afectado al campesino de los Farallones desde tiempo atrás.

Adicionalmente, la nación le donó al municipio de Cali la hacienda la Buitrera con trescientas hectáreas a través de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (empresa encargada de administrar el sistema ferroviario de Colombia hasta el año 1991) con el fin de reubicar a los campesinos, raizales y colonos de la parte alta de los Farallones. Sin embargo, hay quienes se atreven a afirmar, que la clase dirigente de la época, se repartió el terreno entre concejales y políticos, para que pudieran construir sus fincas de recreo, dejando a los campesinos sin tierra. Lo precedente, deja en evidencia la problemática de ocupación en el PNN Farallones de Cali.

Las inconsistencias, contradicciones y vacíos jurídicos son un panorama donde entran en conflicto, dos intereses: el primero orientado a proteger esta zona rica en recursos hídricos, flora y fauna. El segundo, que va en concordancia de la defensa de los derechos de las comunidades asentadas, entendiendo que éstas han aprovechado tradicionalmente los recursos de la zona para su subsistencia, de ahí que el territorio tenga una construcción cultural que les ha creado un cierto sentido de pertenencia por este espacio. En esta dicotomía de intereses, se optado por dar mayor relevancia a preservar los recursos naturales, ejemplo de ello es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que como herramienta técnica para planificar y ordenar el territorio, dejó de lado el bienestar de los campesinos, pues les prohíbe cultivar y pastar ganado como lo dictan las normas.

Entre tanto, desde el PNNC se afirma que la mayor presión al interior del área protegida está relacionada con la ocupación ilegal y la tenencia de la tierra, siendo el sector de Farallones de Cali el más afectado. El fenómeno de ocupación ilegal tiene relación con el factor climático, pues debido a la temperatura favorable y apetecida de los Farallones, muchas personas buscan esta zona, llevándolos a obtener terrenos para la construcción de viviendas, ya sea para ocupación permanente o como áreas de descanso. La alta densidad poblacional conlleva una sobrecarga para el medio ambiente circundante, asimismo un aumento en la demanda de agua para consumo. Así como, el vertimiento de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, variación de la cobertura boscosa y ampliación de la frontera agrícola. El PNNC reconoce que la población flotante, recientemente llegada y mineros de la zona cuentan con mayor disponibilidad de recursos económicos, contribuyendo al problema de ocupación ilegal, pues hay un incremento de las construcciones y mejoramiento de viviendas sin ningún tipo de autorización. Algunos presentan en el momento procesos sancionatorios.

En el afán del PNNC por frenar el fenómeno de ocupación ilegal reforzado por la llegada de una explotación masiva de las minas El Socorro o Alto del Buey, nace el proyecto de dos puestos permanentes de control y vigilancia, cuyo objetivo según el PNNC, es limitar el tránsito de insumos, maquinaria y personal minero, así como controlar el ingreso de material de construcción, extracción de material forestal y faunístico. Uno de los puestos de control que ha generado mayor controversia e inconformidad entre los habitantes es el del sector del Arbolito,

en la vereda el Cabuyal. Los campesinos de los Farallones aluden a que las entidades que hacen presencia en la zona vienen adelantando procesos en el territorio para el beneficio de las elites, encaminados al ingreso de las grandes multinacionales. Por tanto sostienen, que el puesto de control coloca en riesgo a la comunidad, pues las normas internacionales prohíben la construcción de bases militares en sitios cercanos a espacios poblados. Los campesinos arguyen que si el verdadero objetivo es frenar la minería ilegal, el puesto de control debe construirse y asumirse en el sitio donde se está desarrollando esta actividad ilegal.

Los campesinos de los Farallones aún no entienden cómo un puesto de control a más de 50 kilómetros de las minas El Socorro o Alto del Buey puede controlar y vigilar la minería ilegal, sabiendo que el batallón del Ejército que trabaja en conjunto con el PNNC en esta zona no ha podido erradicar por completo esta actividad. No justifican que se invierta más de un billón de pesos en la construcción de este puesto conociendo las múltiples carencias a las que se ven enfrentados estos pobladores rurales. No cuentan con saneamiento básico, protección de las cuencas, mejoramiento de los centros de salud, escuelas, viviendas, sedes comunitarias, vías y todavía hoy existen veredas que no tienen acceso al agua potable (Ver fotografía 16).

Fotografía 16. Plantón vereda Cabuyal



Trabajo de campo, septiembre 22 de 2017

A través de las versiones de los pobladores analizamos que la resistencia generada hacia este puesto de control, radica en que éstos lo ven como una especie modelo panóptico al estilo de Foucault, en la que no se estaría controlando la minería y ocupación ilegal, sino las vidas de los habitantes. Ejerciendo un control estricto, restándoles su autonomía y despojándolos de su esencia de campesinos.

Por otra parte, en lo que concierne a los procesos sancionatorios, PNNC afirma que en el año 2017, en el corregimiento de Los Andes se impusieron veinticinco procesos sancionatorios de carácter ambiental por construcción de infraestructura nueva e ingreso no autorizado. La mayoría de estas infracciones se encuentran en etapa de medida preventiva y algunos casos en

formulación de cargos. Por su parte, en versiones de los pobladores afectados por estas medidas, esto se considera un atropello, pues según ellos han adquirido sus predios por la vía legal, otros han sido heredados de sus familiares y como también, hay quienes obrando de buena fe, dicen haber sido engañados en la compra de terrenos.

En el momento, se tiene conocimiento que existe en promedio doscientos diecisiete procesos sancionatorios. A la fecha, se han llevado a cabo dos desalojos, éstos se han realizado porque aun conociendo la ley algunas personas han invadido terrenos de la CVC, DAGMA, Parques Nacionales y EMCALI. De ahí que se hagan ventas ilegales de terrenos invadidos, que implican sanciones para los compradores. De otro lado, quienes son pobladores nativos y cuentan con el respectivo título de propiedad no se han visto perjudicados con esta situación, ni presentan mayores problemas frente a las instituciones. Entre los pobladores se menciona que en el sector de Peñas Blancas muchos invadieron el predio de EMCALI, por lo que las personas sancionadas en su mayoría pertenecen a esta vereda. En Quebrada Honda, se estima que aproximadamente ocho personas se apropiaron de parte del predio de EMCALI.

Quizá sea posible afirmar que frente a la situación de invasión presente en el PNN Farallones de Cali existen dos realidades distintas; una para aquellos pobladores antiguos en la que desde las instituciones se respeta su derecho a la tierra, pues su antigüedad en el territorio y la posesión de su respectivo título legal les garantiza el disfrute de su propiedad, más no la venta a particulares de la misma. Existe un reconocimiento de la propiedad privada, sin embargo el derecho colectivo a un ambiente sano subsiste por encima de los derechos individuales, por ende el uso y usufructo de la propiedad privada está limitado en pro de la función ecológica. La otra realidad, es para las personas que han invadido, a sabiendas que es parque nacional, o comprado predios ignorando las restricciones sobre ellos, por lo que se han presentado casos de demoliciones de viviendas por esta situación. Es de resaltar, que el problema de invasiones es de vieja data en los Farallones, desde mucho antes que fuera declarado reserva forestal en el año 1938.

3.8 La huella del hombre en la naturaleza

“Esa huella se siente, esa huella se ve, en cada lata, en cada motor, en cada desecho abandonado en el corazón de los Farallones”

En el marco de la nueva ruralidad, la conservación y preservación del medio ambiente se convierte en un requerimiento cada vez más indispensable, es así que si nos preguntamos hoy por un cambio trascendental y decisivo que haya afectado no solo el tejido social, sino también el entorno natural, durante la explotación excesiva de la minería ilegal en el PNN Farallones de Cali, ese podría ser la gran huella de contaminación que traspasó las barreras de lo rural y trascendiendo al entorno urbano.

Hablar de los efectos ambientales generados por la minería legal e ilegal, nos lleva a pensar en primera instancia sobre el mito de la “minería ecológica” o “amigable con el ambiente” específicamente en nuestro país. Pues es bien sabido que “la actividad minera es considerada una

de las de más alto efecto ambiental negativo. Quien diga que la minería no tiene impactos ambientales está mintiendo” (Padilla, 2012, p.42). Sumado a lo anterior, es de amplio conocimiento, el fuerte impacto ambiental que genera la minería. Los cambios a raíz de ésta, no sólo afectan al medio ambiente, incidiendo directamente en los recursos hídricos, biológicos, geológicos y atmosféricos, sino también, en los ámbitos socio-económicos. Muchos de estos efectos son prevenibles, sin embargo otros no pueden eludirse.

Julio Fierro estudioso geólogo colombiano, experto en minería y ex asesor del Ministerio de Ambiente, señala que gran parte de los suelos de los andes colombianos, en especial la cordillera central, corresponden con la llegada de cenizas volcánicas que requieren de miles de años para su formación. El ecosistema ha realizado una gran inversión en tiempo y energía para la formación de estos suelos que son de gran importancia agroecológica. Esfuerzo que se ve reducido cuando llegan los mineros a manipular los suelos, cambiando por completo las características de éstos y generando así impactos irreversibles (Citado por Escobar, 2013).

Fierro argumenta con respecto al agua, que el daño que produce la minería va en dos sentidos: en cantidad y en calidad. En cantidad, porque la actividad minera requiere agua en abundancia y por lo tanto entra en conflicto con otras actividades que también la necesitan, como es el caso de la agricultura. En términos de calidad, la situación es más compleja por los diversos elementos químicos que se utilizan sobre todo en la minería de carbón y oro, pues acidifican las aguas, contaminándolas. Un claro ejemplo de ello es que: “para separar el oro de la tierra hay que hacer una mezcla con químicos como el mercurio y el cianuro que, incluso en dosis mínimas, son altamente tóxicos” (Escobar, 2013, p. 33).

Para el caso de los Farallones de Cali, la evaluación de los impactos generados por la minería ilegal solo se hicieron visibles hasta el año 2011, cuando entraron las diversas entidades del Estado a realizar intervención en las minas El Socorro o Alto del Buey. El PNN Farallones de Cali hace parte de la región del Chocó biogeográfico, una de las más diversas del planeta: 9.000 especies de plantas vasculares, 200 de mamíferos, 600 de aves, 100 de reptiles y 120 de anfibios. Hay un alto nivel de endemismo; aproximadamente el 25% de las especies de plantas y animales, muchas de éstas están amenazadas por la minería de oro que actualmente vierte desechos industriales como el cianuro y el mercurio en las aguas que alimentan este ecosistema mega diverso (Escobar, 2013).

Para el 2011, según un informe de la CVC en el que se presentan los resultados de medición de mercurio y cianuro en agua, evidenciaron una reciente actividad minera aurífera, especialmente para el caso del agua que surte el acueducto de San Antonio. Así mismo, los valores encontrados sobrepasaron el umbral permitido para la salud humana. (Citado por Escobar, 2013). Este informe prendió las alarmas para que las entidades encargadas tomaran cartas en el asunto, comenzando así una intervención interinstitucional fuerte en la zona de los Farallones donde nacen los principales ríos y quebradas que surten los acueductos de la ciudad. No obstante, a pesar de la fuerte intervención que se adelantó y se sigue adelantando en la zona, para el año 2014 la Personería Municipal de Cali revela en un informe que aún existe un alto riesgo por la

presencia de la actividad minera en los Farallones de Cali, pues aún persiste la contaminación por mercurio y cianuro, haciéndose extensiva a la población residente en la ciudad, de igual forma que en la zona rural (Personería municipal Santiago de Cali, 2014). (Ver fotografía 17)

Fotografía 17. Contaminación del recurso Hídrico



Fuente: PNN Farallones, Campamento Diógenes

En este mismo año la Asamblea Departamental del Valle del Cauca revela su preocupación durante el Foro sobre Minería Ilegal al encontrarse que:

En Pichindé, del total de Páramo (2.565 Hs), hay un área afectada de 136 Hs (5.3%) y del total de Bosque Alto Andino (69.501 Hs), hay un área afectada de 116 Hs (0.16%)”. Allí los Impactos Ambientales encontrados son: fragmentación de ecosistemas, tala selectiva de algunas especies, apertura de nuevas trochas, adecuación de caminos, contaminación química de fuentes hídricas, desviación de cuerpos de agua, descarga directa de aguas residuales a los cuerpos de agua, remoción de suelos en masa, cambios del uso del suelo, y contaminación por disposición y manejo inadecuado de residuos sólidos, líquidos y aguas servidas (Asamblea Departamental Valle del Cauca, 2014).

Destacamos que aunque es evidente el daño que la minería ilegal causó en el ecosistema del PNN Farallones de Cali, no se puede responsabilizar a ésta como la única causante de las afecciones al medio ambiente, pues se presume que algunos pobladores contaminan cuando no hacen un buen manejo, tanto de aguas residuales como de desechos sólidos.

Conclusiones

Nuestro trabajo, además de dar cuenta de las transformaciones sociales, económicas y ambientales acontecidas a raíz de la incursión de nuevos agentes en la minería ilegal, pretendía evidenciar una realidad que ha sido ignorada como un hecho social y trascendental. Todos los días admiramos las bellas montañas de los Farallones y pensamos que éstas se respira vida, sin siquiera imaginarnos que en ellas se esconde una letal acción humana: la extracción ilegal de oro, que está arrasando con todo lo que encuentra a su paso. Lo paradójico es que todo esto se está dando en una área protegida como lo es el PNN Farallones de Cali.

Sabemos que este estudio es un pequeño aporte al conocimiento de esta realidad. El representó un esfuerzo por acercarnos e interpretar desde una nueva lectura de lo rural, las dinámicas que impulsieron nuevos agentes en la cotidianidad de las localidades campesinas estudiadas. Embarcarse en una aventura que representaba escudriñar un tema tan espinoso, que podía herir las susceptibilidades y los intereses de muchos, y ponía en riesgo nuestra integridad, nos llevó a superar nuestros miedos y nos impulsó a asumir riesgos como investigadoras. Pretendemos que esta investigación marque una pauta, para que desde otras disciplinas de las ciencias sociales, se dé un interés sólido por este tema. A continuación listamos las principales conclusiones de este ejercicio:

- La preocupación inicial de este trabajo se interrogaba por los principales cambios que producía el desarrollo de la minería ilegal. En el camino, nos encontramos, que si bien ésta era un factor aglutinador de cambio, no fue la única que propició dichos cambios producidos en estas dos localidades campesinas. Lo que demuestra esta investigación es que son múltiples factores y agentes los que han propiciado los cambios que evidenciamos.
- Se tiene evidencia que las minas El Socorro o Alto del buey existen desde la época de la Colonia, mucho antes que llegaran los asentamientos humanos que hoy están reconocidos. En este sentido, las dinámicas de exploración y explotación son las que han sufrido cambios. En un principio, la explotación se hacía de forma manual por algunos pobladores de la zona. Posteriormente, con la llegada de los foráneos se tecnificó, presentándose altos niveles de contaminación ambiental por el uso de químicos como mercurio y cianuro. Actualmente, debido a la intervención de las autoridades se retornó a técnicas manuales combinadas con las exportadas por los foráneos, que de igual forma afectan el ecosistema
- Los importantes cambios que se evidencian, no han impactado del mismo modo en las dos localidades. Mientras en una de ellas se mantienen prácticas campesinas muy arraigadas (Corregimiento de Los Andes), a pesar de la mayor rentabilidad que ofrece la minería; en el otro (Corregimiento de Pichindé) se observa que han surgido dinámicas económicas que si bien no están directamente relacionadas con la minería si se benefician de ella. Como lo es caso de los servicios que ofrecen los motoratones, los muleros y los guías, los informantes y los que han establecido comercios.

- La minería ilegal se convirtió en una importante fuente de ingresos y empleo para la población oriunda de esta zona, que al no contar con tierras cultivables se vio obligada a buscar otras alternativas económicas. Asimismo, para la población flotante, significó nuevos frentes de explotación minera con mayores ingresos. Se resalta que las prácticas mineras, en estas dos localidades, se han ejercido mayoritariamente por población migrante, quienes han introducido nuevas dinámicas en la cotidianidad de sus pobladores. Entre tanto, la población que lleva más tiempo en la zona es quien menos se ha vinculado a la actividad minera, siendo la población joven de estos corregimientos la más vinculada a ésta.
- Partimos de la idea que las mujeres se vincularon al trabajo en las minas reproduciendo los roles domésticos, salvo algunas excepciones en las que pertenecer a las familias de los dueños de los grandes campamentos les permitía realizar actividades distintas a las de la cocina. Posteriormente, se da un cambio de la vinculación de éstas, ante la transformación de las condiciones bajo las que se desarrollaba la actividad minera. En estas condiciones, ellas se tuvieron que desplazar hacia los socavones para poder emplearse. Aquí encontramos quizá uno de los cambios más significativos, porque como se ha señalado, las mujeres en la minería han cargado con el estigma de no ser aptas para el trabajo y hasta de atraer la mala suerte y espantar la veta. Las pocas mujeres que se incorporaron al trabajo en las minas El Socorro o Alto del Buey de los corregimientos de estudio, lograron trascender las barreras impuestas desde la ley y las creencias populares, adentrándose en los socavones al igual que sus pares masculinos.
- En los corregimientos de Los Andes y Pichindé, encontramos campesinos dedicados a actividades no agropecuarias, algunos se entrelazan a la minería ilegal como prestadores de servicios directamente o a actividades subsidiarias derivadas de ésta. Esto también es consecuencia, en el caso particular del PNN Farallones de Cali, de las restricciones que implica habitar un parque nacional natural. Los casos analizados son representativos del cambio por el que han pasado muchas comunidades, de ser economías campesinas de pequeños productores agropecuarios, que emplean esencialmente fuerza de trabajo familiar en sus tierras, a una economía en la cual los ingresos provienen de múltiples empleos no agropecuarios y que constituyen la base de los ingresos para la subsistencia.
- Especificamos que aunque no utilizamos la teoría del cambio propuesta por diferentes autores para indagar por el enfoque institucional, desde el que se planifica el futuro de las comunidades; consideramos que esta perspectiva podría contribuir a la comprensión de las tensiones que mostramos entre lo que quieren los diferentes actores presentes en el PNN Farallones de Cali. Aquí destacamos cuatro de las más evidentes:
 - Para los mineros foráneos esas montañas representan principalmente su sitio de trabajo y una fuente de ingresos, donde adquieren recursos para el sustento de sus familias. Por ello, el territorio no posee características simbólicas, por lo

tanto no existe apego al mismo, pues no tienen vínculos históricos y culturales con este espacio.

- Para los pobladores más antiguos de los corregimientos de Los Andes y Pichindé el territorio más que su hogar constituye sus tradiciones y cultura, pues generaciones enteras han vivido ahí. Para los pobladores más recientes, solo constituye su lugar de vivienda, pues en algunos casos compran o invaden pequeños predios para construir sus casas.
- Para los ciudadanos que cuentan con fincas de recreo, el territorio representa un espacio de descanso y distracción por espacios cortos de tiempo.
- Para las instituciones y autoridades ambientales presentes en el PNN Farallones de Cali el territorio es un parque que se debe preservar.

De ese modo, señalamos que existen diversas apreciaciones con respecto a un mismo objeto. Este ejercicio de investigación nos permitió identificarlas y comprender en que se diferencian y porqué ellas entran en disputa.

Finalmente, consideramos que este ejercicio constituyó una importante experiencia para nuestra formación sociológica. Nos permitió comprender mejor las lógicas de los individuos, las contradicciones de las instituciones, las formas en que se enfrentan los poderes de facto y los de derecho y el modo en que se van modificando las prácticas sociales, en este caso las de los habitantes rurales. En últimas, podemos concluir que en el caso analizado se evidencian casi todas las características una nueva ruralidad.

Referencias bibliográficas

- Acosta, C. (2012). Anatomía del conflicto armado en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI. *Revista Científica Guillermo de Ockham*, 10 (1), 83-99.
- Anzola, J. (2012). Suárez en la mira: Riqueza minera, conflictos sociales y grupos armados ilegales al acecho. *Revista Controversia*, (199), 75-109.
- Arias, A. (2015). Conflicto minero y organizaciones étnicas: cabildo indígena Nasa de Cerro Tijeras y consejo comunitario afrodescendiente de la Toma en resistencia. (Trabajo de pregrado). Universidad del Valle, Cali Colombia.
- Becerra, M. (1994). El Ministerio del Ambiente, Génesis, Estructura y Proyecciones. En M. R. Becerra, La política ambiental del fin de siglo: Una agenda para Colombia (págs. 44-92). Bogotá: CEREC.
- Bolívar, R. (2016). *Las mujeres mineras de la Toma: activismo negro por la vida y el territorio*. (Trabajo de pregrado). Universidad del Valle, Cali Colombia.
- Bury, J. 2007. Neoliberalismo, minería y cambios rurales en Cajamarca. En *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas. Una ecología política de transformaciones territoriales*. Lima. Instituto de Estudios peruanos: pp. 49-80.
- Castañeda, Y. (2012). Familias campesinas y rurales en el contexto de la nueva ruralidad. Estudio de caso en la vereda del Hato del municipio de la Calera (Tesis Doctoral). Universidad Nacional de Colombia.
- Ceña, F. (1993). “El desarrollo rural en sentido amplio”, en El Desarrollo Rural Andaluz a las Puertas del siglo XXI. Congresos y Jornadas (Andalucía, España) N° 32.
- Damonte, G. (2012). Dinámicas rentistas: Transformaciones institucionales en contextos de proyectos de gran minería. En G. d. desarrollo, *Desarrollo rural y recursos naturales* (págs. 95-122). Lima.
- De Francisco, A. (1997). Sociología y cambio social. Barcelona: Ariel.
- Díaz, M. (2008). Conflicto de ocupación en áreas protegidas. Conservación versus derechos de comunidades. *Opinión Jurídica*, 7(14).
- Escobar, D. (2013). *Con una gota comienza el aguacero*. (Trabajo de pregrado) Universidad del Valle, Cali Colombia.
- Farah, M. & Pérez, E. (2003). Mujeres rurales y nueva ruralidad en Colombia. *Cuadernos de desarrollo rural*, (51).

Fierro, J. (2012). Políticas Mineras en Colombia. Bogotá: ILSA.

Fierro, J. (07 de Julio de 2013). Razón pública. Recuperado de:
<https://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/6938-megamineria-y-danos-ambientales-deuda-a-perpetuidad.html>

Franco, A., Casallas, D., & Galeano, H. (2010). *Conflictos socio-ambientales por la extracción minera en Colombia: casos de la inversión británica*. CENSAT Agua Viva.

Giddens, A. (2004). Sociología (4ª edición). Madrid: Alianza Editorial.

González, L. (2012). Minería ilegal y paramilitarismo. *Indepaz*

Gómez, A. (2013). *Efectos sociales y ambientales del proceso de exploración minera en La Vega Cauca. 2010-2012*. (Trabajo de pregrado). Universidad del Valle, Cali Colombia.

Gómez, S. (2008). Nueva ruralidad. Fundamentos teóricos y necesidad de avances empíricos. en: *La nueva ruralidad en América latina, avances teóricos y evidencias empíricas*. Pontificia Universidad Javeriana. (Bogotá, Colombia).

Güiza, L. (2014). La minería manual en Colombia: Una comparación con América Latina. *Boletín de Ciencias de la Tierra*, (35), 37-44.

Grammont, H. (2008). El concepto de nueva ruralidad. en: *La nueva ruralidad en América latina, avances teóricos y evidencias empíricas*. Pontificia Universidad Javeriana. (Bogotá, Colombia).

Himley, M. (2011). El género y la edad frente a las reconfiguraciones en los medios de subsistencia originadas por la minería en el Perú. Apuntes: Revista de Ciencias Sociales, 38(68), 7-35. URL: <http://revistas.up.edu.pe/index.php/apuntes/article/view/65/60>. Consultado Abril 2017

Ibarra, M. (2014). Las mujeres en la minería. Estado del arte y posibles líneas de investigación. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, Universidad del Valle, CIDSE, documento de trabajo 157/14.

Ibarra, M. & Bolívar, M. (2017). Las mineras de La Toma. Resistencia negra en defensa de la vida y el territorio” en *Pensamiento Americano* Vol 10 No.19, Jul-Dic (pp.155-174)

Juárez, F. (2015). La minería ilegal en Colombia Un conflicto de narrativas. EL Ágora USB, 16(1), 135-146. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5372997>

Loayza, S. (2006). Cambios en las relaciones de trabajo de la mujer en comunidades campesinas. *Investigaciones Sociales*, 10(16), 303-319.

Nisbet, R. Kuhn, T. White, L. y otros (1988): Cambio Social. Alianza Editorial. Madrid.

Mejía , C., & Martínez, T. (2006). Colombia País Minero: Plan Nacional para el Desarrollo Minero, Visión al año 2019. Bogotá: Unidad de planeación minero energética, subdirección de planeación minera.

Mendoza, R. (2003). Efectos de la minería moderna en tres regiones del Perú. *Revista de antropología*, 31.

Mora, J., & Sumpsi, J. M. (2004). *Desarrollo rural: nuevos enfoques y perspectivas* (No. 11834). Agecon Search.

Motta, N. (2007). Ocupación y poblamiento de la cuenca hidrográfica del río Cali. Santiago de Cali.

Muriel, A. (2012). *Paramos intoxicados: No todo lo que brilla es oro*. *Revista la palabra*

Ortiz, C. (2003). Cultivos ilícitos y nueva ruralidad en Colombia. *Cuadernos de desarrollo rural*, (50). 143-166. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/html/117/11705008/>

Padilla, C. (2012). Minería y conflictos sociales en América Latina. En C. Toro p., J. Fierro M., S. Coronado D., & T. Roa A., *Minería: Territorio y conflicto en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Pérez, E. (2001). Hacia una nueva visión de lo rural. En N. Giarracca, *Una nueva ruralidad en América Latina*. Buenos Aires. CLACSO. Recuperado de: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100929011414/2perez.pdf>

Palacios, Y. (2014). *Estudio del impacto ambiental y social de la explotación minera en el municipio de Tadó del departamento del Chocó una mirada desde el trabajo social* (Trabajo de pregrado) Corporación Universitaria Minuto de Dios, Medellín Colombia.

Pinilla, C., & Santos, C. (2014). La minería ilegal arrasando las entrañas de la tierra. (Trabajo de grado). Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Colombia

Posso, A. (2018). *Tesoro. Proyecto cortometraje documental*. (Trabajo de pregrado). Universidad del Valle, Cali Colombia.

Ramos, E., & Romero, J. (1993) “La crisis del modelo de crecimiento y las nuevas funciones del medio rural”, en *El Desarrollo Rural Andaluz a las puertas del siglo XXI*. Congresos y Jornadas (Andalucía, España).

Rocher, G. (1990). *Introducción a la Sociología General*. Barcelona: Editorial Herder.

Sandoval, R. (2013). Habitus productivo y minería: el caso de Marmato-Caldas. *universitas humanística*, (74).

Solano, A., & Vera, A. (1996). Tenencia de la tierra en el Corregimiento de Pichindé. Santiago de Cali.

Tilly, C. (1991). *Grandes Estructuras. Procesos Amplios, Comparaciones Enormes*. Alianza editorial

Tilly, C. (1998). Conflicto político y cambio social. En Ibarra, P. y Tejerina, B. (Ed.), *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural* (pp. 25-41)

Toro, C., Fierro, J., Coronado, S., & Roa, T. (2012). *Minería Territorio y Conflicto en Colombia*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado de: <http://extractivismo.com/wp-content/uploads/2016/07/MineriaTerritorioConflictoColombia.pdf>

Triana Sandoval, A. (Comp.) (2001). *Nuevo Código de Minas (Ley 685 de 2001)*. Bogotá: Leyer.

Vergara, W. (2011). Desarrollo del subdesarrollo o nueva ruralidad para Colombia. *Cartografías del desarrollo rural. Revista de la universidad de la Salle*, (55), 33-66.

Fuentes Documentales

Departamento Administrativo de Planeación Municipal . (2003). *Plan de Desarrollo Estratégico Corregimiento de Pichindé. Periodo 2004-2008*. Santiago de Cali.

Departamento Administrativo de Planeación Municipal . (2003). *Plan de Desarrollo Estratégico Corregimiento de Los Andes. Periodo 2004-2008*. Santiago de Cali

Departamento Administrativo de Planeación Municipal . (2003). *Plan de Desarrollo Estratégico Corregimiento de Los Andes. Periodo 2016-2018*. Santiago de Cali

Departamento Nacional de Planeación (2014). Documento Conpes 3018, Política para el suministro de agua potable y saneamiento básico en la zona rural. Recuperado de <http://www.minvivienda.gov.co/conpesagua/3810%20-%202014.pdf>

García, L. (28 de Septiembre de 2015). Minería ilegal de oro sigue teniendo de tragedia a Los Farallones de Cali. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/cal/mineria-ilegal-de-oro-sigue-tinendo-de-tragedia-a-los-farallones-de.html>

González, L. Indepaz. (2012). Minería ilegal y paramilitarismo. Recuperado de: <http://www.indepaz.org.co/1246/mineria-ilegal-y-paramilitarismo/>

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (2018). *Datos abierto, gobierno digital Colombia* . Recuperado de <https://www.datos.gov.co/>

Ocampo, J. Departamento Nacional de Planeación (2014). Saldar la Deuda Histórica con el campo, Marco conceptual de la Misión para la Transformación del Campo. Recuperado de <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/DOCUMENTO%20MARCO-MISION.pdf>

Organización de Naciones Unidas. (2013). Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Asamblea General. Ginebra. Recuperado de: https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGPleasants/A-HRC-WG-15-1-2_sp.pdf

Parques Nacionales Naturales Nacionales de Colombia, Dirección Territorial Pacífico. (2017). Informe de la Gestión Desarrollada por Parques Nacionales Naturales de Colombia para controlar extracción ilícita de Yacimientos Auríferos en el sector conocido como las Minas del Socorro o Alto del Buey 2016-2017.

Parques Nacionales Naturales de Colombia (2011). Análisis situacional de la actividad minera en el sector de las Minas del Socorro, vereda Peñas Blancas, cuenca alta del río Pichindé.

Parques Nacionales Naturales de Colombia (2005). Plan de manejo 2005-2009, Dirección territorial suroccidente.

Periódico El Tiempo. (22 de Noviembre de 2015). *Conpes para priorizar vías que se podrán construir y cofinanciar*. Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16438239>

Periódico El Tiempo. (03 de mayo 1995). Minería afecta al medio ambiente. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-497060>

Procuraduría General de la Nación. (2011). Minería ilegal en Colombia Informe Preventivo. Recuperado de: <https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/MINERIA%20ILEGAL%20EN%20COLOMBIA%20DOCUMENTO.pdf>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2012). Informe nacional de desarrollo humano 2011. El Campesinado, Reconocimiento para construir un país. Bogotá. Recuperado de

http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/human_development/el-campesinado--reconocimiento-para-construir-pais.html

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2011). Informe nacional de desarrollo humano 2011. Colombia rural, razones para la esperanza. Bogotá

Personería municipal Santiago de Cali. (2014). Informe situacional PNN Farallones de Cali. Recuperado de: <https://storage.googleapis.com/pnn-web/uploads/2013/12/informe-farallones.pdf>

Verdad Abierta. (17 de Septiembre de 2008). *Conflicto armado 1997 – 2002*. Recuperado de <https://verdadabierta.com/conflicto-armado-periodo-3/>

Organización de las Naciones Unidas. (2013). *Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales*. Recuperada del sitio Web: Red Nacional de Agricultura familiar (RENAF) en <https://agriculturafamiliar.co/proyecto-de-declaracion-sobre-los-derechos-de-los-campesinos-por-parte-de-la-onu/>